

ISSN 1996-6601

VillaLibre

Cuadernos de estudios sociales urbanos

N° 5 • AÑO 2010



Ciudades Rebeldes



VillaLibre

Cuadernos de estudios sociales urbanos

Número 5

Año 2010

Centro de Documentación e Información Bolivia

Director Ejecutivo CEDIB

Marco Gandarillas Gonzáles

Responsable de Edición

Escarlet Torrico

Tapa

Fotografía: "Flameante"

Por Rodrigo Sebastián Urzagasti Saldías

Centro de Documentación e Información Bolivia CEDIB

Calle Calama N° 255, entre Nataniel Aguirre y Esteban Arze

Teléfono: 4 25 78 39 Fax: 4 25 24 01

Cochabamba - Bolivia

ISSN 1996-6601 Versión impresa

ISSN 1996-661X Versión electrónica*

* Disponible en: www.cedib.org

Proyecto

"Impulso a procesos de cambio social en Bolivia:
Fortalecimiento del protagonismo social y político
de organizaciones de inmigrantes indígenas del
área suburbana de Cochabamba"

Con el apoyo de:



Organizaciones urbanas ¿Un nuevo sujeto político?	Pág. 7
- <i>Escarley Torrico</i>	
Irreflexiones interrogativas: El barrio popular. Del axioma al sofisma	Pág. 33
- <i>Fabio H. Avendaño T.</i>	
Política Comunitaria y Rebelión en El Alto	Pág. 39
- <i>Lucia Linsalata</i>	
Las Juntas Vecinales de El Alto, entre la institucionalidad y la rebelión	Pág. 77
- <i>Melina Deledicque y Daniel Contartese</i>	
El ayllu reterritorializado y su taypi, la ciudad de El Alto	Pág. 99
- <i>Orlando Augusto Yépez Mariaca</i>	
Plan 3000: Bastión rebelde del oriente boliviano	Pág.117
- <i>Marxa Chávez</i>	
Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón del racismo	Pág.131
- <i>Raúl Zibechi</i>	

Este número, es ante todo una provocación, una invitación a la reflexión, el debate y la producción sobre un tema del que hoy por hoy se conoce poco, sobre el que faltan elementos de discusión, aportes teóricos e incluso metodológicos para generar herramientas que nos permitan comprender con mayor precisión la dinámica política que se desenvuelve en las ciudades. Nos gustaría que la lectura y revisión del material que aquí presentamos sea una fuente importante de inspiración e interrogantes respecto de las características de los actores urbanos, sus capacidades, sus formas de acción política, sus motivaciones y cómo no; sus potencialidades y límites.

Encontraran, ustedes un interesante contrapunto e implícito debate sobre temas cómo, la identidad y la territorialidad, las tradiciones y herencias organizativas y cómo estas se conjugan en el espacio urbano. Son evidentes también, otras tantas provocaciones en torno a temas como los procesos de rearticulación social y el rol que han jugado los sectores urbanos en el cuestionamiento del modelo neoliberal y a partir de entonces en la defensa de todas aquellas medidas que pretendían consolidar cambios institucionales en el país, aún en momentos difíciles donde esto significó arriesgar la propia seguridad personal, como sucedió en el caso de Santa Cruz de la Sierra.


Más allá de los aportes valiosos que se ofrece en estas páginas, gracias a la colaboración totalmente desinteresada de los autores. Nos parece oportuno reflexionar sobre el carácter de las ciencias sociales, que a momentos

parece sufrir, tanto como algunos medios de comunicación, lo efectos de un cierto “amarillismo”, puesto que se suele prestar atención a ciertos temas solo en cuanto representan algún grado de espectacularidad, una hazaña, un triunfo político o un gesta heroica, cuando no una masacre. En ese momento, parece ser que los “académicos” vuelcan todo su interés y tiempo en la “novedad” social. Luego el tema “pasa de moda” y el interés disminuye, conforme el hecho va quedando en el pasado. Hoy por hoy, por ejemplo, después del “boom” de estudios sobre la guerra del agua y la guerra del gas, son menos las personas que están dedicadas a estudiar los movimientos y organizaciones sociales urbanas, siendo que el contexto nacional reciente nos demuestra el peso de su presencia en la política nacional.

Son por ello, doblemente celebrados los trabajos que aquí presentamos y quedan para los lectores de VillaLibre, el trabajo de analizarlos, diseccionarlos, engullirlos, exprimirlos, odiarlos o amarlos, contradecirlos, retrucarlos, citarlos, referenciarlos. En fin... darles el uso para el cual fueron concebidos.

Finalmente, este trabajo es también un homenaje para aquellos(as) que se toman las calles, las plazas y las convierten en espacios con historia.

Los editores



Organizaciones urbanas

¿Un nuevo sujeto político?

Escarley Torrico*

A manera de introducción

Entre el 2000 y 2005 en Bolivia las organizaciones y movimientos sociales populares, en un proceso de creciente rearticulación, acosaron sin tregua a los representantes del modelo económico y político neoliberal que hasta entonces gobernaban el país, hasta destruir los ya débiles y escasos soportes de legitimidad que quedaban al régimen impuesto y resistido hace poco más de veinte años.

No es casual que los conflictos sociales más intensos hayan tenido como escenario el espacio urbano y como protagonistas a sus habitantes, puesto que son las ciudades las que han recibido el impacto de la recomposición territorial que ha generado el neoliberalismo en nuestro país. De un lado, la des-industrialización y del otro la migración rural producto de la desaparición de las condiciones de vida del pequeño productor campesino.

* Escarley Torrico trabaja en el Centro de Documentación e Información Bolivia Email: etorricof@gmail.com



Foto: elciudadano.cl

Varios análisis han hecho hincapié en el hecho de que los cambios en el mundo del trabajo y la precarización de las condiciones de vida en las ciudades han significado a su vez la pérdida de referentes organizativos y por lo tanto los procesos de articulación, organización y ejercicio de derechos se ha visto limitada. Pero a la luz del hecho de que desde las ciudades se han lanzado los desafíos más importantes a la hegemonía neoliberal, es posible también evidenciar que a pesar de los obstáculos ha sido posible construir y reconstruir formas de organización colectiva tan efectivas que han cambiado la correlación de fuerzas. Los sectores populares urbanos pasaron de la resistencia a la ofensiva.

Aunque este hecho se perfiló ya en la guerra del agua, fue la intervención más directa de actores urbanos en la guerra del gas, la que volcó

la atención de las ciencias sociales sobre el tema y posicionó a los actores urbanos como una pieza clave del proceso de transformaciones políticas que ha vivido el país. A tono con la actual corriente predominante en el estudio de los movimientos sociales en América Latina, los profusos análisis se han centrado en las estructuras de organización territorial, las juntas vecinales y su federación local (FEJUVE), así como en el componente cultural y étnico, como los elementos que estructuran su fortaleza y contundencia.

Las juntas vecinales, estructuras organizativas venidas siempre a menos debido a su cercanía con el poder, el clientelismo y la cooptación han pasado a formar parte del selecto grupo de los “nuevos” sujetos políticos protagónicos de la coyuntura nacional actual. Aunque todavía deben pagar el precio del particularismo, puesto que solo la FEDJUVE de El Alto aparece en esta lista.

Con este trabajo pretendo poner a consideración algunos elementos que amplíen la mirada sobre los actores urbanos y la dinámica política que han vivido en este tiempo, partiendo de la comprensión del lugar que juega y jugará lo urbano en este periodo histórico, posteriormente nos adentramos en un análisis de las juntas vecinales, sus potencialidades, obstáculos y los mitos que en tono a estas organizaciones se ha tejido. Finalmente, algunas preguntas e hipótesis respecto a lo que podríamos considerar las características del sujeto político urbano en sentido general.

La reconfiguración territorial. Sub-urbanización y des-ruralización

Las nuevas formas de producción posfordistas han puesto en el centro del debate al “territorio” puesto que los cambios tecnológicos¹ han hecho posible la descentralización de la producción y con ello la expansión de las empresas transnacionales a todos los rincones del planeta.

1 “Uno de los efectos más gravitantes de la revolución científica y tecnológica es el de permitir por vía de la microelectrónica y otros mecanismos la segmentación funcional y territorial de los procesos productivos sin pérdida de eficacia ni rentabilidad.” (Boisier: 2005: 50)

“El antecedente histórico que da origen al cambio científico-técnico, se encuentra en la crisis del capitalismo fordista se puede caracterizar como una inadecuación del sistema de producción, ya que las bases de este modelo de acumulación encontraban una contradicción; esto debido a que el sistema fordista de producción suponía la estabilidad en la estructura y crecimiento del mercado, pero se enfrenta a una tendencia recesiva, que se agrava con la rigidez del mercado de la mano de obra, dada su sólida organización sindical. Las corporaciones utilizan nuevas formas de organización que rompen con las rigideces presentes en el sistema fordista-keynesiano, basadas en el cambio tecnológico, dispersión geográfica a zonas con mercados laborales sin restricciones, fusiones, automatización, innovaciones en productos, etc. (Harvey: 1996)

La búsqueda de ventajas como mano de obra barata y nuevos nichos para satisfacer la demanda de energía, biodiversidad y agua² convierte el conocimiento del territorio y sus características en el elemento central ya que “...la empresa...que piensa localizar partes [del proceso del proceso productivo] en diferentes lugares discontinuos en el globo, debe examinar cuidadosamente las características de cada lugar para que tenga un resultado positivo. El territorio puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso en el modo de producción postfordista... por ello es que la globalización exige ahora finos análisis sociales -aparte de económicos y tecnológicos- de los múltiples territorios de producción.” (Boisier : 2005:50)

Pero el peso de lo territorial en el neoliberalismo no se agota en las innovaciones tecnológicas, ajustes económicos y políticos. La búsqueda de mejores condiciones para generar ganancia, produjo una acelerada re- configuración territorial, “la mayor en cinco siglos”, según Zibechi (Zibechi, 2008:91). Al cambiar la división del trabajo, las relaciones y ritmos de crecimiento campo- ciudad; intra-urbana; interurbanas; intra- regionales; inter-regionales/nacionales e internacionales, han sido trastocados.

2 “En los marcos de la actual revolución en las relaciones de poder por medio de la tecnología, tres son los recursos naturales estratégicos: la energía en sus diversas fuentes, la diversidad biológica y el agua” (Porto - Goncalvez, 2004, pág. 64)

De todos los cambios territoriales que se han producido como efecto de la nueva división internacional del trabajo existen dos fenómenos que son relevantes: la des-ruralización y la sub-urbanización.

El primero es fruto de una de las mayores olas de expropiación indígena – campesina que se ha vivido en los últimos 30/40 años, ya que el actual modelo de explotación de recursos naturales³ en las escalas fijadas por las empresas transnacionales y apoyadas por los gobiernos de los países semi-coloniales, es simplemente incompatible con la pequeña producción. De hecho, si el ajuste estructural significó ya un duro golpe para el pequeño productor con la eliminación de subvenciones y la libre importación de alimentos agrícolas⁴; la expansión de la explotación minera, petrolera y el ingreso de las grandes empresas en el agro negocio, han impulsado los procesos de desalojo y reconcentración de tierras, por “vías legales o ilegales”⁵, que actúan de manera complementaria. Entre ellas figuran: compra o arrendamiento masivo de tierras, guerra de baja intensidad (incluida la organización de grupos paramilitares); desalojos con militarización en concesiones (mineras, petroleras y latifundios) y desplazamientos por contaminación y agotamiento de tierras y agua.

Este hecho ha sostenido y disparado las tasas de migración hacia las ciudades que se ha producido en casi todo el Tercer Mundo, dando lugar al fenómeno de la sub - urbanización. Según Davis (2003: 28 -29) la mayoría de

3 “Hay que entender que el sistema capitalista siempre necesita nuevos espacios para generar ganancia económica. De esta manera, la expansión del mercado ha llegado a convertir el agua, los servicios de salud, y la educación en mercancías. Algo que anteriormente era impensable. En este momento, la mercantilización de los recursos naturales es la estrategia fundamental para la acumulación de capital a mediano plazo, poniendo la biodiversidad enorme de América Latina en el centro de la atención” (Santos, 2008)

4 “Uno por uno, los gobiernos nacionales atrapados por la deuda, se encontraron sometidos a los programas de ajuste estructural y condicionados por el Fondo Monetario Internacional. Las subvenciones, las mejoras de los inputs agrícolas y la construcción de infraestructuras rurales se vieron drásticamente reducidas. a medida que tanto en América Latina como en África se abandonaron los esfuerzos por ‘modernizar’ la agricultura, los agricultores y campesinos se iban encontrando a merced de la estrategia de ‘nadar o ahogarse’ que proponían las instituciones financieras internacionales, la desregulación de los mercados nacionales empujó a productores agrícolas hacia los mercados globales, donde los campesinos pequeños y medianos no podrían competir. Los programas de ajuste y las políticas de liberalización económica supusieron la convergencia de las tendencias mundiales que buscaban el cierre de mercados agrícolas, con las políticas nacionales que provocaban la desaparición del campesinado D. Bryceson, ¿Disappearing pasantries? Rural labor redundancy in the neoliberal Era and beyond” pp 304 -305,tomado de Davis: 2003

5 “Ciertamente parece poco importante que estos desplazamientos se produzcan por vías legales o ilegales, poniendo en juego los mecanismos del mercado o través de la militarización de los territorios en disputa. En Brasil. Los conflictos más intensos se desarrollan precisamente en las áreas donde se está expandiendo el agro negocio...” [Zibechi, 2008 :93]

los expertos quedaron sorprendidos debido al hecho de que la urbanización en los países coloniales, continuaba su “desenfrenada carrera”⁶ (3,8 por 100 frente a un 2,1 de las ciudades europeas),⁷ pese a la contracción del empleo, la acelerada des – industrialización, la reducción del empleo público y la caída de las clases medias, que producía el neoliberalismo a su paso por las urbes de África, América Latina y Asia.

Los datos de la sub-urbanización

Las ciudades bolivianas en el neoliberalismo

En Bolivia, según los datos de Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa de crecimiento de la población urbana más alta (4,2) se registra en el período 1976 – 1992⁸ que coincide con el período de crisis económica, apertura democrática e implementación de las reformas neoliberales de primera generación. En el mismo período, la tasa de crecimiento de la población rural es casi nula (0,09 % anual).

El pequeño productor además de verse afectado por condiciones climáticas particularmente adversas como la sequía de 1982 – 1983 sufrió el golpe de la libre importación de productos agrícolas. Nele Marien, en su artículo “Adiós al Pequeño Productor” asevera que un periodo de 20 años (1981-2000) las importaciones oficiales de alimentos se cuadruplicaron , en especial de 1998 en adelante, mientras por otro lado hay una total permisividad con el contrabando . Esto habría deteriorado el tipo de intercambio campo – ciudad. Los precios al consumidor se cuadruplicaron entre 1987 – 2000 pero los precios de productos agrícolas sólo se duplicaron. (2002:5)

Marien, también pone atención a los efectos que tuvo en el agro la explotación de recursos naturales por empresas transnacionales, pues el incre-

6 “los modelos económicos ortodoxos (...) mantenían que la recesión urbana traería como consecuencia una ralentización o incluso una inversión del proceso migratorio” (Davis : 2003: 28)

7 En Bolivia ciudades como El Alto han tenido tasas de crecimiento de más del 8%, en la etapa de implementación del ajuste estructural.

8 La tasa de crecimiento medio anual de América Latina es de 2,8% ((Laserna, Ciudades y pobreza, 2005) (Ledo, 2002.)1980 -1990) y 2,4 para el período 1990 – 2000. CEPAL: 2009: 90

mento en el número de concesiones mineras, hidrocarburíferas y madereras genera procesos de degradación de los suelos y contaminación de las fuentes de agua y termina expulsando a campesinos e indígenas (ob cit: 5)

Para el país, este hecho fue además relevante porque significó un cambio histórico en la proporción de población urbano/rural puesto que a partir de entonces, nos convertimos un país mayoritariamente urbano. Esta tendencia, aunque ha tenido algunos matices, no se ha modificado sustancialmente. Para el año 2001 la población urbana ya representaba el 62% del total nacional.

En los marcos del neoliberalismo, los niveles de pobreza urbana se han incrementado. Según los datos de CEPAL (2009: 34) Bolivia se encuentra entre los países con mayor incidencia de pobreza urbana a nivel regional (53,8%) y al mismo tiempo porcentajes elevados de indigencia (20.2%)⁹

Aunque la pobreza medida por el índice de necesidades básicas insatisfechas, muestra una reducción (1992 – 70,9%; 2001- 58.6%)¹⁰ siendo significativa en la zona urbana, la pobreza medida por ingresos es menos optimista.

Pereira y Velasco, de la Unidad de Políticas Sociales (UDAPSO) en su trabajo “Estimación de la pobreza urbana en Bolivia” con datos de las 10 principales ciudades de Bolivia en 1990 muestran que en ese año, 2.44 millones de personas en 523.5 miles de hogares habitaban en las nueve capitales de

9 Las cifras para la región son las siguientes. Pobreza porcentaje promedio América Latina y el Caribe 34.1% . Indigencia, 10.3%. Cálculo para el año 2005

10 Los datos de pobreza en Bolivia según qué método se utilice (NBI o Línea de pobreza) son tremendamente disímiles y dan lugar a mucha confusión. Por ejemplo Laserna en su estudio “Ciudades y Pobreza” refiriéndose principalmente a la reducción de los porcentajes de población con NBI, llega a la conclusión de que “La reducción de la pobreza es un fenómeno ante todo urbano” (2005:76) Y que “ la pobreza en este período ha disminuido más rápidamente “(idem) Siguiendo sus datos, por ejemplo, la reducción de la pobreza en el área urbana de Cochabamba sería de -16.8% una de las más altas a nivel nacional. Entre tanto la investigadora Carmen Ledo (2002), llega a la conclusión de que la población de Cochabamba figura entre las más pobres del mundo puesto que el 80% de su población vive con menos de dos dólares diarios. Para Wanderley “los resultados dispares de la pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas y por ingreso laboral es difícil de explicar. Tropezamos probablemente con problemas de medición estadística, sobre todo en materia de ingresos, dada la enorme economía informal que hay en Bolivia. También es probable que los progresos en la cobertura de atención sanitaria y educación, por ejemplo, no reflejen en la calidad de las mismas en una situación de profunda crisis institucional. Otra hipótesis es que esta paradoja sea fruto de la continuidad de un tipo de políticas públicas que da mucha más importancia a la ampliación de la cobertura de los servicios públicos y la distribución directa de recursos y menos a la transformación de la estructura ocupacional, y por ende a la generación de empleos de calidad...” (2009: 59)

departamento y la ciudad de El Alto. Las denominadas ciudades del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) concentraban el 79% de los hogares.

Del total de hogares 55% estaban en condiciones de pobreza, 22% con problemas de indigencia y 33% eran pobres no indigentes. También ratifican la relación de pobreza y etnicidad, ya que en los hogares bajo condiciones de indigencia se observó que el 63.2% de los jefes de familia hablaban quechua y/o aymara aparte del castellano.

Puede deducirse que las personas que hablan algún idioma nativo provienen en un alto porcentaje de contextos rurales y que en general tienen serios problemas para insertarse en actividades con ingresos aceptables debido, tal vez, a su bajo nivel de calificación, pocas opciones de ocupación y a una encubierta discriminación hacia estos grupos étnicos. (*Pereira y Velasco: 1991: 19*)

De las diez ciudades consideradas Potosí, El Alto, Oruro y Sucre mostraban los mayores niveles de pobreza, más del 60% de sus hogares se encontraban en estas condiciones. Las otras ciudades a excepción de Tarija tenían niveles que afectaban alrededor del 50% de sus hogares. Si bien existe una relativa diferencia de 21 puntos porcentuales entre la ciudad con el mayor índice de pobreza (Potosí) y la de menor (Santa Cruz), el nivel promedio por demás ya es alto. Se consideraba particularmente preocupante la situación de la ciudad de El Alto con 40% de su población en la indigencia y Potosí con 44%. Las ciudades que les siguen como Oruro, Sucre, Tarija y La Paz tienen 20% de población indigente. (ob cit: 20)

El trabajo de Landa sobre la pobreza en Bolivia que cubre el período 1999 -2002¹¹ muestra que la pobreza tuvo un incremento de 2,57 puntos porcentuales (de 62,03% a 64,60%), en tanto que la pobreza extrema aumento en 0,93 puntos porcentuales (de 35.84% a 36,77%). Seguidamente plantea que las mayores diferencias se encuentran en el área urbana pues es allí donde existe un mayor crecimiento de la pobreza, 2.58% comparado con un 1,87% en el área rural. (Landa: 2002: 6) El informe concluye que si bien en el área

11 Los datos comparativos de varios años, permiten tener una idea más clara del proceso



rural hay niveles altos de pobreza, el área urbana es la que presenta las mayores tasas de crecimiento de los niveles de incidencia.

Los indicadores de salud y educación además ayudan a comprender el deterioro de la calidad de vida en áreas urbanas. La tasa de asistencia a establecimientos educativos de la población entre 6 y 25 años, en el área urbana bajó 2% y 1% en área rural. Lo cual estaría relacionado a la incorporación de los niños en la generación de ingresos. La asistencia a centros de salud formal bajó en un 10% en el área urbana, y 2,3% en el área rural. (Landa: 2002: 9-10)

Llama también la atención el incremento de la desigualdad, en el período estudiado se evidencia una reducción de los ingresos de todos los sectores *a excepción de los más ricos en el área urbana*, lo que indica que “...en el contexto que se desarrolló la economía boliviana, los más ricos (decil 10)

que están en las ciudades aumentaron su ingreso (17,77%) en cambio los más pobres (decil 1) se hicieron 9% más pobres. (*Landa: 2002: 6*)

Aunque para nadie es desconocido que los niveles de desempleo una vez que se empezaron a aplicar las reformas estructurales, subieron hasta alcanzar niveles históricos, este hecho no se revirtió aún en la década del 90 cuando se suponía que debíamos empezar a “cosechar” los frutos de la reforma económica. La tasa de desempleo urbano aumentó de 3,8% en 1996 a 7,2 en 1999, y llegó a 8,1% en 2005 en su punto más alto, afectando principalmente a las mujeres (*Wanderley: 2009: 48*).

Siguiendo a Wanderley, las características más importantes del período 1985 -2003 en términos del régimen de trabajo fue el incremento del sector familiar, el semi - empresarial y doméstico, la contracción del empleo generado por el sector público, el incremento del desempleo abierto y la extensión de la modalidad de contratación eventual o por plazo fijo. Este último uno de los rasgos más importantes del llamado sector informal que conlleva ausencia de regulaciones, y principalmente incapacidad de negociar derechos laborales (ob.cit. 50)

El sector informal, aunque brinda mayores y más fáciles opciones de inserción laboral, es al mismo tiempo el sector donde los ingresos se deterioran con más rapidez, ya que la expansión del sector es posible “...no porque origine nuevas vías sino porque divide las ya existentes, dividiendo claro está los ingresos” (Davis: 2003: 242-245). En el caso boliviano, los datos comparativos de los ingresos medios de asalariados y trabajadores por cuenta propia en el período (1989 – 2004) muestran que mientras el ingreso medio de los primeros se ha mantenido, el de los segundos ha caído drásticamente. (CEPAL, Panorama social de América Latina 2006, tomado de: Wanderley: 2009: 50)

Es importante contar como costos adicionales para las familias urbanas el retiro del Estado en varios sectores como el de la vivienda¹² y el transporte público, el incremento de las cargas tributarias que sobrevino como efecto de

12 En ausencia de regulación de alquileres y finalmente la eliminación de cualquier forma de apoyo en la dotación de viviendas, las olas de migración rural son muy bien aprovechadas por latifundistas urbanos, especuladores y también por políticos locales corruptos.

las reformas en este ámbito y la privatización de servicios básicos¹³ como el agua potable, el alcantarillado y la electricidad que significó un incremento de tarifas y costos de conexión. En este terreno, también la privatización de los hidrocarburos, tuvo efectos directos e indirectos en la elevación del costo de vida en las ciudades.

La conflictividad urbana en etapa neoliberal

Precisamente a raíz de que las ciudades del Tercer Mundo se han convertido en el receptáculo de los cambios económicos de los últimos años, la conflictividad urbana ha sido una constante en América Latina, el autor uruguayo Raúl Zibechi encuentra que del “corazón de las barriadas pobres han surgido en las dos últimas décadas los principales desafíos al sistema dominante. Desde el Caracazo de 1989 hasta la comuna de Oaxaca en 2006 (...) los levantamientos populares de Asunción en marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril del 2000, Buenos Aires en diciembre 2001, Arequipa en junio 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero o de 2003 y El Alto en Octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes” [2008: 23]

Aunque algunos de estos eventos, los más espectaculares, son ampliamente conocidos, con frecuencia se ha analizado su significado y alcances, como parte de un proceso general de rebelión popular, muy pocas veces se ha considerado relevante su especificidad urbana. De esta manera, pareciera que los actores urbanos no tienen una identidad propia dentro de las tensiones nacionales. Ello ha contribuido a opacar su presencia y pasar por alto un necesario análisis de los procesos políticos que se están desarrollando en el ámbito urbano.

Aunque por el momento no es posible salvar estos obstáculos, es evidente que un análisis de largo plazo nos permitiría entender de mejor ma-

13 En el caso de Bolivia, aunque el proceso de descentralización fue presentado como la vía para mejorar la cobertura de servicios, en los hechos todas las instituciones e instancias que se encargaban de este tema fueron a su vez privatizadas o “descentralizadas” de los municipios y se les exigió que ajustarán la gestión a los parámetros empresariales. En pos de la eficiencia y eficacia económica, dichas empresas debían “autofinanciarse” o sea no recibir ninguna transferencia de fondos públicos, como consecuencia las entidades de servicios pasaron prontamente a ser consideradas “empresas”.

nera el rol de los actores urbanos, tanto en la resistencia a la aplicación del modelo neoliberal, como en la fase de rearticulación y ofensiva popular que se vivió a inicios del siglo XXI en Bolivia.

Por el momento, nos parece que la base de datos de conflictos sociales, elaborada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social CERES (1970- 2008)¹⁴, nos permite un acercamiento interesante a los actores sociales en conflicto, sus objetivos, el lugar donde ocurren e incluso los métodos de lucha que implementan, descartan o actualizan.

Si ponemos atención a estos datos se pueden identificar tres etapas¹⁵, una de resistencia al neoliberalismo (Víctor y Jaime Paz 1985 – 1993), una breve disminución de conflictos durante entre 1993 y 1997 (primer gobierno de Sánchez de Lozada) y una súbita escalada de conflictos sociales desde 1997 que llega a su pico más elevado en 2005 (Carlos Mesa) para finalmente volver a caer por un breve tregua del año 2006 ya en el gobierno del Evo Morales (Calderón y Villarroel: 2008: 13). En todos estos momentos las ciudades bolivianas y los actores urbanos, de manera cada vez más persistente, han sido las variables de conflicto más significativas, aunque ello no desmerece el rol jugado por otros actores.

En la etapa de resistencia es claro el protagonismo de empleados públicos, maestros, estudiantes, obreros y el sector denominado “popular urbano”, pese a la represión desplegada por el Estado e incluso a la política de ataque contra las estructuras sindicales y la desaparición de algunos sectores de trabajadores, como los mineros, fruto del cierre de operaciones de la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL y las primeras privatizaciones. Notablemente, en este período el sector campesino- indígena con mayor tradición de lucha, es decir el organizado en torno a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSUTCB, se muestra muy poco activo.

14 La base de datos comprende el período 01/01/1970 – 31/01/2008 fue elaborada en base a los registros de prensa de conflictos sociales de ese período histórico. Ver Calderon y Villarroel. 2008

15 El gobierno de Siles se lleva 15,3% del total de conflictos del período, el gobierno de Víctor Paz se lleva el 9,9%; Jaime Paz 8,1%; el primer gobierno de Sánchez de Lozada 5,3%; Banzer y Quiroga 15,4%; Sanchez, Mesa y Veltze 15,2% y Morales hasta Enero del 2008 el 8,1%.

Son los indígenas del oriente, que tienen mayor visibilidad, ya que inician una movilización emblemática. “La marcha por el territorio y la dignidad”, como reacción ante el creciente “... asedio de la empresas explotadoras de los bosques y la expansión del latifundio...” (Tapia: 2002: 48) Este hecho, cobra relevancia por ser una de las primeras manifestaciones de la agudización de la contradicción entre diferentes formas de apropiación del espacio¹⁶. Los indígenas, a partir “formas sociales y políticas de origen no moderno” se ven en la necesidad de cuestionar “los procesos modernos de explotación de la naturaleza y las gentes” para intentar frenar la destrucción de sus territorios y por ende su cultura (Tapia: 2002:48).

Resulta interesante el hecho de que el primer gobierno de Sánchez de Lozada se registrara una disminución de conflictos sociales, cuando el gobierno implementó la segunda generación de reformas neoliberales, como la capitalización, la descentralización municipal, la departamental y otras. Sin duda, en ese momento se tuvo la impresión de que “...a fuerza de golpes y de tiempo se aceptaba el orden neoliberal como inevitable por unos, y como bueno, por los más entusiastas” (Tapia: 2002: 52), pero la escalada de conflictos registrada a partir de 1998 y que continuaron en el gobierno de Banzer, nos muestra que este intervalo de tiempo no puede ser considerado como una etapa de derrota del movimiento popular, en todo caso se trataría de un momento de rearticulación, aunque esta no fuese lo suficientemente evidente ¿quizás la búsqueda de nuevas estructuras de movilización y organización frente al ataque y destrucción de las ya existentes?. En todo caso es evidente que este período puede ser considerado como el ejemplo más claro de dislocación entre la institucionalidad impuesta y los procesos políticos subterráneos que se estaban gestando entre los sectores populares.

Si ponemos atención a los datos, es posible ver que son los sectores medios (a excepción de los maestros urbanos y estudiantes universitarios)

16 “Un bosque no es lo mismo para un pueblo que ha convivido con él millares de años que para un maderero que, más que en la madera, está interesado en su transformación en algo abstracto —dinero; en la vida de una comunidad, para quien una riqueza mineral no tenga el menor sentido, puede transformarse en una pesadilla si en sus tierras se descubre petróleo, oro o cualquier otro mineral que interese a algún empresario o a algún Estado ávido de hacer concesiones a empresas o, también, para cobrar más impuestos” (Porto - Goncalvez, 2004, pág. 56)

los que reducen el número de conflictos sociales, y por el contrario entre 1997 -1998, cuando ocurrió el proceso de capitalización de las empresas estratégicas de propiedad del Estado, se registró uno de los períodos de mayor movilización de obreros en etapa democrática, mismo que puede considerarse la última batalla de este sector frente al neoliberalismo, ya que en adelante, su intervención como sector se verá enormemente reducida. (Ver Laserna y Villarroel: 2008).

Durante las gestiones de Banzer y Quiroga se intensifican los conflictos sociales y mucho más importante que eso la efectividad de la protesta social, ya que logra frenar cualquier intento de profundización del modelo. Si bien los actores urbanos continúan teniendo el protagonismo, la composición de estos actores cambia, los sectores medios no incrementan su participación en conflictos, con respecto al período anterior, pero aparecen en escena, ocupando el segundo lugar, sectores denominados “otros” en la clasificación que utiliza CERES, cuya identificación no está del todo clara, ya que no se trata de ningún sector “tradicional”, desgraciadamente no hay mayores detalles sobre este clasificador, excepto que se trata de “... diversos sectores y grupos de la población, la mayor parte de ellos sin una tradición de luchas sociales u organizados de manera difusa y, por tanto, difíciles de ser incluidos dentro de grupos o actores sociales más comunes de identificar” (Calderon y Villarroel: 2008: 51) . En este caso podríamos suponer que se trata de una expresión de la fragmentación del mundo laboral e incluso de las instancias organizativas históricas. Esta tendencia se verifica también por el hecho de que el tercer lugar lo ocupa la “ciudadanía en general”, es decir aquellos conflictos que siendo de magnitud considerable, interpelan a los sujetos en tanto individuos, ya que no acuden a los mismos como afiliados a ningún sector en particular, es posible que eventos como la “Guerra del Agua” hayan entrado en este clasificador.

Un hecho interesante es que a la disminución de participación del sector obrero en los conflictos le corresponde un incremento de las acciones de los llamados sectores urbano populares y además el surgimiento del “bloqueo” urbano” como forma de protesta, el mismo que resultará tan efectivo

en las jornadas de octubre del 2003. A título de hipótesis, y alejándonos de la interpretación que hace de ello Calderón y Villarroel, podríamos decir que ante la imposibilidad de mantener el espacio laboral como eje de organización, empiezan a surgir otros ámbitos desde donde se expresa el descontento e incluso se empiezan a perfilar nuevas formas de movilización más efectivas.



Foto: amauta.org

Es importante mencionar que la participación del sector campesino indígena en la escena política, tiene más relevancia que en los períodos anteriores, tanto por la acción de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia CSTUCB, que logra recomponer su estructura orgánica, como por el incremento de la represión en el Chapare, que genera amplia movilización en el sector.

El año 2003 con poco tiempo de iniciado el segundo gobierno de Sanchez de Lozada, comenzó con una revuelta urbana de proporciones considerables, el gobierno particularmente obsecuente de las recomendaciones de los organismos internacionales, se decide por la implementación de un impuesto al reducido sector asalariado el país, en vez de incrementar los impuestos a las empresas transnacionales del sector de hidrocarburos, como medio para reducir el déficit fiscal y destrabar la ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional.

Aunque las protestas de los sectores afectados no se dejaron esperar, fue un motín policial que terminó acelerando los sucesos. El gobierno mo-

vilizó a los militares para enfrentar a los policías y la jornada terminó con unos 32 muertos y una centena de heridos producto de la acción de francotiradores. Por la noche, la ciudad fue escenario de disturbios en donde fueron quemadas las sedes de varios partidos políticos y oficinas gubernamentales. El impuesto al salario fue finalmente retirado pero quedó claro que era el sistema político el que estaba en entredicho.

En septiembre del mismo año varios conflictos sectoriales, regionales y nacionales se traslapan y sobreponen. Por un lado, los habitantes de la ciudad de El Alto se oponen a la aplicación de los formularios Maya y Paya, que se suponía eran la antesala de un incremento al impuesto a los bienes inmuebles en el municipio. Impiden la aplicación de la medida luego de un paro cívico que paraliza a la ciudad. A ello se suma, la movilización de campesinos-indígenas del altiplano que demandan atención a su pliego petitorio y la liberación de dos dirigentes, con bloqueos de caminos y actos de presión en la ciudad de El Alto. Finalmente, la intervención militar en la comunidad de Warisata que provoca nuevas muertes, determina el ingreso de la FEDJUVE - El Alto al conflicto con la declaratoria de un nuevo paro cívico en rechazo a la venta del gas por Chile y la industrialización del gas natural en Bolivia. El conflicto se prolongó durante la primera quincena de octubre, involucrando a la ciudad de La Paz y más débilmente las otras ciudades del eje, pero el epicentro fue la ciudad de El Alto. Por la brutalidad de la represión estatal desatada contra sus habitantes y por la respuesta de la población, que desde sus barrios organizaron la defensa de la ciudad calle a calle y terminaron por conseguir la renuncia de Sánchez de Lozada, quien dejó la silla presidencial dejando tras de sí una cuenta de 60 víctimas fatales.

Termina así la etapa de estabilidad política de la era neoliberal ya que después de esto el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa también renunciaría y el Presidente de la Corte Suprema asumiría el mando con el objetivo de convocar a nuevas elecciones.

Es significativo el hecho de que a diferencia de los anteriores períodos, durante el tiempo que ocupó la silla presidencial Carlos Mesa, se reduce sig-

nificativamente la presencia de los sectores medios, pero sigue creciendo la importancia del sector urbano popular. Durante el gobierno de Rodríguez Veltze ya son el segundo actor conflictivo más relevante. De manera interesante, en esta etapa, aunque más marcadamente durante el gobierno de Carlos Mesa, el sector campesino indígena se muestra más activo que en ningún otro período.

La complejidad de lo “urbano popular”

Los actores urbanos (clases medias empobrecidas, empleados públicos, maestros, estudiantes pequeños comerciantes, obreros, desocupados, migrantes rurales) bien han podido jugar un rol importante en la resistencia y ocaso del neoliberalismo ortodoxo, pero al mismo tiempo, sus características, su forma de acción, articulación y organización puede también ser el tema al que menos se le ha prestado atención, debido precisamente a las dificultades que genera su heterogeneidad y porosidad. Pero ateniéndonos a su inobjetable presencia, en el escenario político último, quisiera plantear algunas ideas que ayudarían a avanzar sobre este tema.

Actualmente, se considera que las características y capacidades políticas del sector urbano popular estarían ligadas a su condición de migrantes rurales recientes, que partiendo de su experiencia comunitaria, construyen, se apropian y controlan territorios donde surgen y se sostienen relaciones sociales, políticas y económicas alternas a las dominantes, pues se rigen por valores como la solidaridad, la reciprocidad, la igualdad; y como mecanismo de toma de decisiones la deliberación colectiva. (Zibechi: 2008: 55). Su relación con el Estado y los partidos políticos sería más bien distante con fuertes rasgos de autonomía política, debido a la capacidad de autogestionar recursos y servicios básicos necesarios para la vida urbana, pero también debido a las distancias existentes con las mediaciones políticas tradicionales de corte liberal. De este modo, la junta vecinal sería “una especie de recreación urbana de autoridad tradicional y/o sindical de las comunidades rurales” (Gutiérrez: 2008: 215)

Algunos de estos rasgos están presentes en las capas populares de las ciudades, aunque desgraciadamente menos idealizadas y más contradictoriamente de lo que suele presentarse. Pero, desde mi punto de vista, las características anotadas anteriormente, en el mejor de los casos, solo lograrían captar a un pequeño sector dentro de un bloque de actores mucho más heterogéneo y amplio que ha sido protagonista en la última ola de revueltas populares.

Se hace necesario entender este hecho, no como algo casual sino como fruto de un proceso que ha requerido la articulación de actores diversos, así como el reconocimiento de una situación compartida, es decir el paso de actores a sujetos políticos. Para ello sería también importante comprender los mecanismos a través de los cuales se han sorteado exitosamente los obstáculos que han planteado las nuevas condiciones laborales a los procesos de organización y defensa de derechos.

¿Podríamos hablar de un sujeto urbano popular? De ser así, este sería más complejo, heterogéneo y dinámico de lo que suponemos, su presencia territorialmente más difusa y sus formas de acción política, lucha y organización tendrían que ser lo suficientemente flexibles, para “copar” las estructuras tradicionales o rebasarlas.

El espacio urbano síntesis de múltiples experiencias organizativas

Como ya hemos visto, los cambios económicos que ha vivido el país aceleraron el proceso de urbanización y generaron transformaciones en los flujos de población. Esta circulación y localización en diferentes espacios territoriales, ha supuesto la convergencia de un conjunto de experiencias organizativas, previas y la adquisición de nuevas ya que los sectores populares asimilan, combinan y recombinan en el nuevo espacio de vida.

Contrariamente a lo que se cree, la migración desde la zona rural hacia las grandes ciudades o capitales, al parecer, rara vez se produce de manera

directa, los datos disponibles hacen suponer que "... existe una migración por etapas, desde lo rural hacia el polo urbano más cercano y, en una segunda etapa, una migración de más largo alcance hacia una ciudad grande o una zona de colonización" (Mazureck:8). Lo que significa que en esta trayectoria, una serie de experiencias laborales y organizativas van sumando a la experiencia propiamente rural.

Pero también es importante la larga experiencia urbana de la población migrante antigua y sus descendientes. Para el caso de la ciudad de El Alto, Franck Poupeau, plantea la existencia de tres anillos desde el centro de la ciudad hacia la periferia, en el centro la población más antigua, luego la población de migración de 1980-90 y finalmente el tercer anillo del 2000 "... que se trata más bien de una migración intraurbana, mediante la cual parejas jóvenes (de 30 a 40 años principalmente) acceden a la propiedad: en la mayoría de los casos en asentamientos salvajes y no planificados por la municipalidad, en los que la autoconstrucción de viviendas de adobe coexiste con la especulación inmobiliaria..." (Poupeau:15).

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que como efecto de las particularidades de la implementación del ajuste estructural en Bolivia, se produjeron desplazamientos importantes de población de los centros mineros hacia las ciudades. Los datos disponibles nos hablan de unas 100mil personas desplazadas entre 1987 y 1992. Cuatro de cada diez migrantes se habrían establecido en la ciudad del eje (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz), mientras que otros se trasladaron a la región del Chapare (Ledo: 2002:65 tomado de Antequera: 2008)

Los relocalizados mineros, vinieron hacia las ciudades como portadores también de una importante experiencia organizativa que se volcó a la construcción de nuevos barrios y en las dinámicas barriales. Albo, refiriéndose a la ciudad de El Alto destaca el "impulso ideológico" que le dieron a la ciudad y a las propias juntas vecinales "algunos ex-dirigentes mineros que quedaron 'relocalizados' o despedidos. Gracias a su experiencia de lucha y organización prontamente empezaron a incorporarse a la dinámica barrial

volcando su experiencia obrera y organizativa en la dirigencia vecinal. [Albo 2006:338]

Podemos seguir dando ejemplos de una multiplicidad de actores e identidades heterogéneas que hoy por hoy están presentes en las ciudades, y que conformarían lo urbano popular: trabajadores fabriles que hoy engrosan las filas del comercio informal, sectores medios empobrecidos, etc. Pero para mí, lo importante de destacar es precisamente el hecho de estas trayectorias múltiples y diversas son las que adquieren finalmente algún tipo de síntesis en el espacio urbano y que esta cualidad debe ser mucho más analizada para entender los procesos de politización en las ciudades.

Más allá de las juntas vecinales, buscando nuevas fuentes de poder

En los años 60 – 70 la urbanización jalonada por la centralidad del Estado en la economía (sustitución de importaciones) se expresó también en el surgimiento de movimientos sociales urbanos, cuyo eje de acción giraba en torno a la dotación de bienes de consumo colectivo. Varios autores, llegaron a la conclusión de que su situación de precariedad material y social les impide desarrollar independencia política respecto del Estado y los partidos políticos. Más bien se generaría una dinámica donde la lucha y organización de los primeros momentos es sustituida por la subordinación política, que opera a través de mecanismos clientelares. Castells, afirma por ejemplo, en relación a los movimientos de los asentamientos de ocupantes ilegales que al final son “...un instrumento de integración social y de subordinación al orden político existente en vez de un agente de cambio social” (Castells: 1986: 274 tomada de Zibechi: 2008: 36)

Éste es precisamente el rasgo que más se ha acentuado¹⁷ gracias a las reformas implementadas en el ámbito local en Bolivia, elección de alcaldes

17 Como se mostró en un trabajo anterior (Torrice y Choque. Itinerario Organizativo de Villa Pagador en VillaLibre Nº2: 133 – 148) , el Estado centralizado tenía mayores limitaciones para extender su presencia en todo el territorio nacional, por lo cual, un barrio tenía que recurrir a la autogestión y el trabajo colectivo para paliar esta ausencia. Este hecho, otorgaba a los vecinos cierta “autonomía”, pese a las esporádicas relaciones que existían con respecto los partidos políticos y el Estado

(1987) y descentralización a nivel municipal (1994), cuyo objetivo político más importante fue la substitución de los actores sindicales por los territoriales. En el fondo se trataba de un rediseño de los términos en que debía darse la relación Estado - Sociedad Civil y la creación de los actores con los cuales debía darse la misma.

“Las reformas económicas habían sido iniciadas en 1985 pero el sistema político todavía tenía fuertes rasgos heredados del ‘Estado de 1952’, sobre todo la presencia de los sindicatos aunque debilitados por el *shock* del ajuste. De esta manera la reforma en el ámbito de las instituciones políticas tendría por objetivo de desplazar las formas de participación y representación en el marco de las organizaciones funcionales - corporatistas y sustituirlos por la democracia representativa territorializada.” (*Assies: 9*)

La elección de alcaldes por voto popular y la distribución de recursos económicos a los municipios, abren las puertas de una relación más directa pero de mayor control de los partidos políticos hacia las organizaciones vecinales. Roberto Laserna anota que “...el fortalecimiento institucional y político de los ámbitos municipales ha creado nuevas oportunidades para el clientelismo y la manipulación prebendal de los actores barriales” (2005:124).

Como resultado, las organizaciones vecinales de base y con mayor nitidez los espacios de articulación como las federaciones de cada ciudad (FEJUVE) y la Confederación de Juntas vecinales de Bolivia (CONALJUVE), sufrieron un profundo desgaste y crisis de representación, debido a la creciente subordinación de los dirigentes a las autoridades municipales de turno¹⁸.

Varios trabajos académicos han planteado que, el rasgo diferenciador más importante de los movimientos sociales actuales y también los urbanos, es el arraigo territorial y que este hecho es lo que ha permitido revertir la

18 Como se puede colegir de lo expresado por un vecino de la zona sur de Cochabamba, en junio del 2003: “...aunque mañana haya elecciones, la gente odia a los dirigentes, la gente ya no quiere a los dirigentes, aunque ellos se crean dirigentes, ya no se cree [en ellos]. Aunque digan ¡En Villa Pagador, yo manejo! No les van a creer y al día siguiente... a la votación, votos ocultados ¿no ve?” (Vecino de Villa Pagador, Cochabamba: 2003)



Foto: Ariel Marco Tito Correa

derrota del movimiento obrero (Zibechi: 2008: 55) Sin embargo, en el caso boliviano, no se debe subestimar el peso de la intervención estatal para neutralizar su potencial y funcionalizarlas a su lógica¹⁹. Desde esta perspectiva creo que sería erróneo plantear que las juntas vecinales pudieran constituirse en un referente político mínimo que fuera “la alternativa” de las organizaciones sindicales. Pero entonces ¿cómo cuáles son los elementos que fueron importantes en la rearticulación de las organizaciones urbanas que se dio partir del año 2000?

Desde el punto de vista organizativo, creo que es posible plantear que la eficacia de las movilizaciones urbanas del 2000 y 2003, como parte de un proceso de rearticulación en el cual los actores urbanos en su conjunto, a partir de la experiencia en la resistencia al modelo neoliberal, lograron rebasar los límites que les presentaba tanto la organización sindical como la territorial. No se trata, sin más de “nuevas formas organizativas”, sino de una superación en el sentido dialéctico en donde se desecha lo caduco y se potencian las mejores cualidades del núcleo de experiencias organizativas previas. Podríamos

¹⁹ Por lo menos en el caso urbano ya que la consecuencia de la aplicación de estas reformas en el ámbito rural es todavía objeto de amplio debate.

dejar en suspenso el hecho de que hayan terminado de constituirse nuevas formas de organización, me parece que se trata más de un búsqueda que de un proceso acabado.

A pesar de los repetidos anuncios de la “muerte” de las organizaciones sindicales tanto la “Guerra del Agua” como la “Guerra del Gas”, tienen en común el uso inicial de estructuras organizativas tradicionales, como las federaciones de trabajadores y las centrales obreras y federaciones de vecinos, como punto de convergencia de diversos actores y el desarrollo posterior de formas de organización con “nuevas” características. Pareciera ser que bajo ciertas condiciones favorables, éstas son susceptibles de ser copadas con atributos que las rebasan, una especie de ocupación de un espacio vacío que luego vuelve a ser abandonado, volviendo a los causes normales de funcionamiento.

Desaparece por ejemplo, la figura vertical del dirigente, o mejor dicho, las estructuras jerárquicas recreadas en los sindicatos como efecto de la estructura de los centros laborales y los mecanismos de decisión se tornan colectivos, reaparece la asamblea y el cabildo. A partir de este hecho, la convocatoria, las estrategias y la movilización dependen únicamente de actores de base, lo que se ha llamado “auto - organización” porque de hecho rebasan a los dirigentes, que en la mayoría de los casos actúan más como muro de contención de la demanda social que como representantes.

Dice con razón Kruse que “... la Coordinadora no ‘hizo’ la Guerra del Agua y que, rebasada en varios momentos por la acción ‘auto-organizada’, ni siquiera la conducía. Lo que hizo fue abrir, como argumenta Albro, ‘espacios de traducibilidad’ en los cuales sectores y redes diversas podrían construir conceptos y agendas compartidos basados en necesidades y atropellos indignantes compartidos.” (Kruse: 2005:1)

Finalmente, quiero referirme a uno de los aprendizajes más importantes en términos tácticos en la movilización de los actores urbanos, el control territorial. Resulta interesante que uno de los métodos de lucha más novedosos y exitosos de la última década haya sido el bloqueo urbano.

Más allá de que este pueda ser o no considerado un “réplica” urbana de las modalidades de lucha del movimiento indígena campesino. Lo importante es entender que este hecho, dadas las condiciones de fragmentación del mundo laboral, donde los métodos de lucha ligados a la interrupción de la producción resultaban debilitados, los actores urbano populares han identificado el potencial de la interrupción de la circulación de mercancías, que tiene un escenario importante en las ciudades.

Si los actores de poder económico se empeñan en apropiarse del territorio y re - organizarlo desde sus necesidades, los sectores populares lo han convertido en el escenario de lucha para des - organizarlo.

Posibles lecturas sobre el sujeto urbano popular

Los sectores urbanos, aquellos denominados medios como estudiantes, empleados públicos, maestros, los obreros y finalmente los actores vecinales han jugado un rol de gran importancia en la resistencia y el asedio final del ciclo más ortodoxo del neoliberalismo en Bolivia. No se trata de desmerecer el rol jugado por el sector campesino e indígena²⁰, en todo caso se trata de comprender que ésta marcada conflictividad se debe en gran medida a que las ciudades han sido el escenario de impacto del neoliberalismo. Campesinos migrantes, indígenas desplazados por la actividad de latifundistas y empresas transnacionales extractivas, obreros des - industrializados y desplazados, desempleados y clases medias empobrecidas se concentran en el espacio urbano. A veces, claramente identificables y concentrados en un espacio geográfico denominado periferia pero también están diseminados por toda la ciudad, ocupando espacios degradados, viviendo como inquilinos cerca de las fuentes laborales o comerciales, como alojados con parientes, en los viejos barrios obreros y también en las urbanizaciones de clases medias que quedaron de los planes de vivienda del Estado y las asociaciones laborales. Cargan con ello(as) diversas experiencias políticas y laborales, campesinos comu-

²⁰ Puesto que como se evidencia los datos señalados anteriormente, tuvieron una presencia activa en los gobiernos de Mesa y Rodríguez, de hecho en términos históricos son las etapas donde su participación en conflictos sociales ha sido elevada.

narios, obreros agrícolas, empleadas domesticas, comerciantes, obreros(as), mineros(as), confeccionistas y transportistas. Algunos conocieron el sindicato, otros el ayllu, otros la junta vecinal y algunos vivieron todas estas formas de organización. Combinan y recombinan varias tradiciones, trayectorias y experiencias políticas. El sujeto urbano popular no es un actor fijo, concreto, fácilmente aprehensible, sus formas de organización y existencia son flexibles y deslocalizadas, pueden aprovechar cualquier resquicio que se les ofrezca, el territorio, el centro de trabajo, y acudir a diferentes métodos de lucha y crear nuevos. Aprendieron la importancia estratégica del territorio no solo como espacio de vida sino como espacio de circulación de las mercancías y fueron capaces de tomar este elemento a su favor, por ello a veces es importante el barrio y las relaciones que a su alrededor se tejen, pero otras es más importante controlar/ interrumpir el territorio en tanto espacio de circulación y tránsito, como las carreteras, plazas o pasos de combustible.

Bibliografía

- ALBO, X. (2006). La vorágine de una ciudad única. *Journal of Latin American anthropology*, 329-350.
- ANTEQUERA, N. (2007). *Territorios Urbanso*. La Paz: CEDIB - PLURAL.
- ASSIES, W. (s.f.). La descentralización a la «boliviana» y la economía política del reformismo.
- BOISIER, S. (2005). ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización? *Revista de la CEPAL N°86*.
- CEPAL. (2009). *Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe*. Santiago: Naciones Unidas.
- CRISTINA Cielo, R. C. (2008). *Paerticipaciones periurbanas. Del control social a los movimientos sociales*. Plural.
- GUTIERREZ, R. (2008). *Los ritmos del pachakuti*. La Paz: Textos Rebeldes.
- HARVEY, d. (1996). *La condición de la posmodernidad*. Buenos Aires: Amorrortu.
- INE. Instituto Nacional de Estadística.

- KRUSE, T. (2005). La «Guerra del agua» en Cochabamba Bolivia. Terrenos complejos, convergencias nuevas. En E. d. Toledo, *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina* (pág. 224). Buenos Aires: CLACSO.
- LANDA, F. (2003). Pobreza y desigualdad del ingreso en Bolivia entre 1999-2002.
- LASERNA, R. (2005). *Ciudades y pobreza*. La Paz: Plural.
- LASERNA, R., & Villarroel, M. (2008). *38 años de conflictos sociales en Bolivia*. Cochabamba: CERES, COSUDE, Instituto para la democracia.
- LEDO, C. (2002.). *Urbanisation and Poverty in the Cities of the National Economic Corridor in Bolivia: Case Study Cochabamba*. Cochabamba.
- MARIEN, N. (2002). Adios al pequeño productor.
- MAZUREK, H. (s.f.). Tres preconceptos sobre migración interna en Bolivia.
- MIKE, D. *Planeta de ciudades miserias*. FOCA.
- PORTO - Goncalvez, C. W. (2004). *El desafío ambiental*. Mexico: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
- POUPEAU, F. (30 de 10 de 2010). El Alto una ficción política. Cochabamba, Bolivia.
- SANTOS, B. d. (28 de julio de 2008). Entre la represión del neoliberalismo y la imaginación utópica de los pueblos. (R. Hoetmer, Entrevistador)
- TAPIA, L. (2002). Movimientos sociales, movimiento societal y los lugares de la política. En *Democratizaciones plebeyas* (págs. 25 - 73). La Paz: Muela del Diablo.
- TORRICO, E., & Choque, R. (2008). El itinerario organizativo de Villa Pagador. Cochabamba. *VillaLibre*, 133 - 144.
- VELASCO, R. P. (1991). Estimación de la pobreza urbana en Bolivia.
- WANDERLEY, F. (2009). *Crecimiento, empleo y bienestar social ¿por qué Bolivia es tan desigual?* La Paz: Plural.
- ZIBECHI, R. (2008). *Territorios en Resistencia*. Buenos Aires: Cooperativa de trabajo Lavaca.

Irreflexiones interrogativas

El barrio popular Del axioma al sofisma

Fabio H. Avendaño T.*

Desde hace algunos años, en el ambiente político, intelectual, académico, se han venido utilizando ciertos conceptos, frases y palabras que hacen referencia a grupos de población urbana, de escasos recursos económicos, localizados dentro de una total marginalidad. A este sector se le ha llamado “popular” y todo lo que con él se relaciona recibe éste mismo apelativo. El sector popular se ha tratado, tradicionalmente, como bloque compacto, homogéneo y en cierta forma abstracto pero, eso sí, muy necesario para la experimentación económica, social, cultural, académica o política. Todo concepto respecto a éste sector se ha convertido en axioma de fácil y cómoda utilización, incluso para los neófitos y profanos. Este facilismo intelectual soslaya toda posibilidad de cuestionar la esencia que esconden sofismas de distracción, que se utilizan para taxonomizar a seres humanos individuales, que viven en un mundo heterogéneo de ambiente multitemporal, a quienes

* Fabio H. Avendaño es arquitecto.

se les ha encasillado dentro del llamado “barrio popular”.

Es conveniente examinar de cerca el concepto popular de lo “popular”, y para aproximarnos a él nada mejor que las frases interrogativas. A pesar de que habitamos un universo acrítico y pragmático, “un universo –dice Lyotard- donde el éxito consiste en ganar tiempo, y el pensar no tiene más que un solo defecto, pero incorregible: hace perder el tiempo” (1), podemos por lo menos cuestionar. Aunque el cuestionar ya implique perder un poco más de tiempo, del que siempre perdemos. Pero como nos sentimos embriagados con el escepticismo que perfuma nuestro ambiente, nos atrevemos a preguntar sobre lo “popular”.

Podemos comenzar por preguntarnos, si ¿no será éste el tiempo para de-construir la legitimación pretenciosamente dogmática, respecto a la existencia de una identidad homogénea en el llamado “barrio popular”? Según observa García Canclini, “lo popular, conglomerado heterogéneo de grupos sociales, no tiene el sentido unívoco de un concepto científico, sino el valor ambiguo de una noción teatral” (2). ¿No será necesario comenzar a descolectivizar y descubrir el enfoque y tratamiento que se dan a los problemas singulares y seculares de estos barrios que, disfrazados de discursos generalizantes y mesiánicos, esconden toda una intencionalidad de manipulación académica, cultural o electorera...? Y, ¿no será igualmente necesario detener la incitación demagógica, que nos exhorta a salvar un peculiar VOLKSGEIST de existencia, supuestamente axiomática, pero vivencialmente intangible?



Foto: elatoholiva.blogspot.com

¿Qué, o quién, nos legitima para dar enfoques comunales, socializantes, aglutinantes o globales a los problemas de grupos humanos en donde lo único común lo constituye lo desigual, lo diferente, lo individual, lo sui generis? Hoy en día lo atomizado, lo desigual y lo diferente, lo aglutinamos en una amalgama heteróclita, la que luego rotulamos con el nombre rimbombante de “barrio popular”, “cultura popular”, “soluciones populares”, “soluciones comunitarias”, o en últimas “desarrollo popular”, “desarrollo de autogestión” ...Etc.. Pero, cabe nuevamente preguntarnos, ¿acaso por medio de una bendición o un exorcismo podemos convertir lo heterogéneo en homogéneo y llegar así a establecer un acuerdo entre partes diferentes? Según nuestro sentido de razón, trastornada por cierto espíritu iluminista, tímidamente contestaríamos que no, y somos conscientes que “en un mundo como el nuestro donde lo real es construido a partir de los juegos de lenguaje, no existe, no puede existir el acuerdo universal. Lo que hay son diferendos. Y diferendo quiere decir disentimiento permanente... En el diferendo no existe una imagen de pensamiento común entre las “partes”. Se trata de un disentimiento... De un desencuentro entre juegos de lenguaje que constituyen realidades irreductibles entre sí” (3).

El seguir buscando un “acuerdo universal de voluntades”, el querer ignorar la diferencia, la diversidad, proclamando una singularidad absoluta, no pasa de ser un intento romántico en medio de un mundo pragmático. Se ha de cambiar la estrategia y dar testimonio de que existe un disenso, un pluralismo y que esto nos obliga a cambiar nuestros métodos tradicionales de aprender, pensar, decir y hacer. Pero como no pretendo llegar a ser un oráculo omnisciente, que podría dar la fórmula mágica a los problemas planteados, entonces, sólo puedo invitar a la reflexión o, por qué no, a la irreflexión, a abandonar el control de lo real desde la razón mal ilustrada, para que despojados de presunciones heredadas, podamos entrar a preguntarnos qué es lo que pasa en nuestro heterogéneo aquí y en nuestro multitemporal ahora.

En nuestro multitemporal ahora resulta anacrónico seguir buscando por medio de metarrelatos resolver todos aquellos singulares problemas que nos aquejan. En nuestro heterogéneo aquí debemos reconocer que habita-

mos un mundo impregnado de disentimiento y pluralismo, y que la identificación y comprensión de nuestros diferendos y peculiaridades es condición sine qua non para alcanzar la tolerancia.

En cuanto a la arquitectura –dentro de este panorama- ella estaría llamada a alejarse de la soberbia redentora –característica de los años heroicos- y pasar a desempeñar un papel más modesto y significativo. Los petulantes arquitectos podemos olvidarnos de la persecución de aquellas quiméricas megaintervenciones que transformarían la sociedad, las ciudades o los barrios. En nuestro fallido intento de transformación olvidamos que las herramientas con que trabajamos el espacio y la mesa no son apropiadas para hacerle frente a todas las fuerzas, que interactúan en campos tan disímiles con el nuestro. Esto nos ha llevado una y otra vez a pasar de manipuladores a manipulados. Toda invasión nuestra a campos ajenos siempre ha terminado en promesas redentoras, con las cuales intentamos paralogizar a una sociedad escéptica. Definitivamente debemos abandonar toda apología de la supremacía de lo general sobre lo particular, del erudito Plan Regulador General, del metarrelato ya que “el gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado: relato especulativo, relato de emancipación” (4). Lo modesto y significativo de la arquitectura estaría, entonces, en volver los ojos a la persona real y no idealizada, a la pequeña escala, a la memoria, al evento, a lo cotidiano.

La arquitectura, por pretender ser la salvadora de la humanidad, ¿es posible que se olvide de su propia esencia? ¿Es posible que, por un afán protagónico, quiera responsabilizarse y empecinarse en resolver muchos de los problemas que no le conciernen única y exclusivamente a ella (v. gr. la vivienda popular), y que en éste intento, la arquitectura, deje de ser arquitectura? Esto último es lo que nos está sucediendo. La milenaria cultura arquitectónica, por una involución senil de nuestra memoria moderna, se ha convertido en la estrategia para pegar más o menos ladrillos y conformar “abrigos primitivos” o falacias consumistas. El urbanismo no ha sido la excepción. Ha sido oprobado por fuerzas empeñadas en obtener un máximo rendimiento económico en el comercio del suelo. Trivialmente, lo han convertido en un

instrumento para distribuir “mallas”, “llantas”, “columpios” o “troncos” dentro de los laberínticos y microscópicos retazos de suelo urbano que olvidaron invadir, los “urbanizadores”, con asfalto y concreto. En consecuencia todo concepto de memoria, rito, mito, significado, paisaje, ha sido aniquilado, extirpándose con ello una parte vital de la ciudad, su memoria. En este último sentido, cabe preguntarnos si, ¿es que la arquitectura ya no es arquitectura?. Y entonces, las consideraciones de lugar, masa, espacio, luz, color, material, significado, etc., son anacrónicas y en consecuencia debemos olvidarnos definitivamente de la poesía, del arte, de la comunicación y muy especialmente del hombre como ser humano integral? Si esto es así, deberíamos, entonces, preocuparnos únicamente por un hombre taxonomizado, mítico y abstracto, que se determina por su capacidad de consumo y que ha perdido su capacidad onírica y su capacidad de vivir como ser humano. No creemos esto posible. Aún no es tarde para decir lo que no se ha dicho y para crear nuestros propios micro relatos, que se ajusten a nuestro peculiar aquí y ahora, modestos y realizables gradualmente; que reconozcan las diferencias y nos enruten hacia la tolerancia. Tampoco es tarde para devolvernos a la arquitectura con su don de significar, comunicar, hablar, su don de ser un mundo de sueños para el hombre, en donde se crea y recrea la vida.

Todo intento de crítica, dentro de un mundo acrítico, nos lleva a asumir una posición disidente. Igualmente nos lleva a luchar contra nosotros mismos, contra nuestra necesidad visceral de asentimiento. Pues siempre nos sentimos como frente a un “gran jurado” (ortodoxos, academicistas, políticos, comerciantes, inquisidores, etc.), que juzgará nuestra actitud frente a la vida misma, frente a nuestro diario quehacer. Es muy dudoso que por dar testimonio del disenso, de la pluralidad, por pregonar una arquitectura modesta (no especulativa o audaz), por querer ser tal cual somos y no como la moda (intelectual, estética, política o comercial) pretende que lleguemos a ser, el “gran jurado” nos absuelva algún día. Los miembros de este peculiar jurado cautivados por una bulimia snobista y hedonista-consumista, nuestro nuevo ZEITGEIST, preferirá, seguramente, desviar hacia el plano de la promesa y el metarrelato los problemas que vivimos en nuestro aquí y nuestro

ahora. Nos tildarán, muy probablemente, de nihilistas, apóstatas o de desidiosos, pero no llegarán a comprender, por supuesto, que nuestro interés es el de criticar para comprender y comprender para actuar. Que nos identificamos con un mundo no abstracto ni dogmático, sino muy real, el cual podemos y debemos ir modelando a nuestra imagen y semejanza.

La pregunta respecto a lo “popular” queda abierta e inacabada, y esta ha sido nuestra intención, pues como magistralmente lo expresó Borges, “La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma” (5).

Bibliografía

LYOTARD Jean – Francois (1). “La Postmodernidad” (explicada a los niños) Gedisa. Barcelona, 1987, p.47.

CANCLINI Néstor García (2). “Culturas Híbridas”. Grijalbo. México, 1990, p. 259.

GARAVITO Edgar (3). “Lyotard: salir del romanticismo”. En Magazín Dominical de El Espectador. N° 566. 6 de marzo de 1994, p.4.

LYOTARD Jean – Francois (4). “La condición postmoderna”. Rei. México, 1990, p. 73.

BORGES Jorge Luis (5). “Ficciones”. Oveja Negra, Bogotá, 1984, p.82.



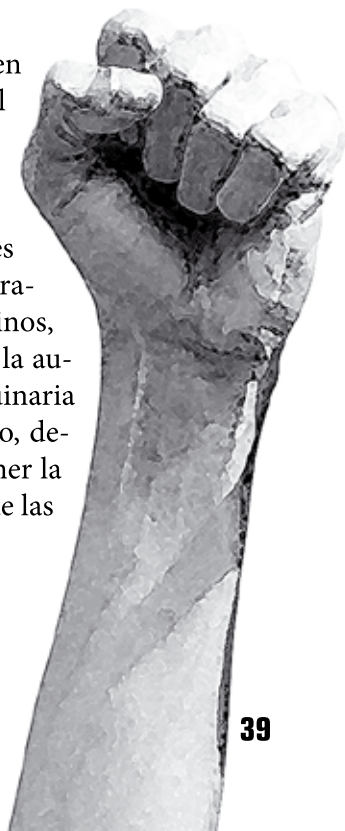
Política Comunitaria y Rebelión en El Alto

Lucia Linsalata*

El 17 de octubre de 2003 quedará para siempre en la memoria de los hombres y las mujeres alteñas como el día en que “TUMBAMOS AL GONI”, el entonces presidente de la República Don Gonzalo Sánchez de Losada. “TUMBAMOS” porque lo hicieron ellos, los y las alteñas, y porque lo hicieron juntos. Hombres y mujeres, hombres y mujeres de a pie: campesinos, mineros, trabajadores, trabajadoras, estudiantes, vendedoras de los mercados, vecinos, vecinas, ... aymaras, en su mayoría¹, se rebelaron contra la autoridad estatal, dando vida a una extraordinaria maquinaria social que logró tomar el control de la ciudad de El Alto, derribar al gobierno, vencer al ejército nacional e imponer la voluntad popular y la capacidad de autodeterminación de las masas por encima del estado y de los señores del capital.

* Maestra en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. Email: lucia.linsata@gmail.com

1 Según el censo de 2001, el 74,2% de los habitantes de El Alto se auto-define aymara.



Hombres y mujeres, vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras marcharon sin cansancio, levantaron barricadas, cavaron zanjas, tomaron el control de las calles, establecieron guardias y vigiliias nocturnas en los barrios y organizaron cientos de asambleas y cabildos en donde, día tras días, iban definiendo colectivamente la organización de la resistencia y los pasos a seguir en la lucha. El estado, deslegitimado y negado por la población insurrecta, desapareció durante varios días para ser remplazados por formas locales y auto-gestionadas de ejercicio del poder. A medida que el levantamiento popular en la urbe alteña fue creciendo, las calles ocupadas por la población se transformaron, en efecto, en un extraordinario laboratorio de experimentación política donde se ensayaron formas autónomas de organización y deliberación colectiva cuyo principal núcleo de articulación fueron las redes locales de organización barrial².

En la vida cotidiana de El Alto, las relaciones de carácter vecinal y comunitario tienen una fuerza enorme, organizan y regulan numerosos aspectos de la vida política y social de los barrios alteños, confiriendo a la ciudad un carácter muy peculiar marcado por la presencia de un complejo entramado de poderes locales, relativamente autónomos, con una gran capacidad de auto-organización social. En este sentido, las movilizaciones de octubre de 2003 (así como las de mayo-junio 2005) no surgieron de la nada, se forjaron en el seno de relaciones sociales y prácticas políticas profundamente arraigadas en el tejido social urbano alteño.

¿De qué prácticas políticas estamos hablando? ¿Qué formas de organización social se experimentan cotidianamente en las barriadas alteñas? ¿Dónde radica la capacidad de auto-organización de los pobladores de esta ciudad? ¿Cómo emergió esta capacidad durante las rebeliones de 2003? ¿Qué

2 El sociólogo aymara, Paolo Mamani, en un detallado estudio sobre el levantamiento de octubre de 2003 en la ciudad de El Alto, sostiene que durante la insurrección cada barrio se constituyó como un pequeño poder autónomo con su propio microgobierno. Dice el autor: "Cada espacio de la ciudad, a través de la estructura de organización barrial se ha convertido en un centro de producción de decisión colectiva para tejer un poder que inmoviliza a la ciudad y al gobierno. Cada espacio de la urbe ha sido tomado por las diferentes juntas de vecinos y por los Comités de Defensa de Gas. Bajo estos mecanismos de acción colectiva se empieza a corroer el poder gubernamental- estatal" (Mamani 2005: 72). Y añade más adelante: "La importancia que tienen estos gobiernos es fundamental porque aquí se decide de manera masiva las acciones colectivas mediante asambleas de emergencia y de evaluación. Se convierten en lugares de decisión multitudinaria y de legitimaciones de las acciones (...). La legitimidad que debe de tener un gobierno-estado deja de existir por el sencillo hecho de que la gente no tiene como referente de orden y decisiones públicas al estado" (Mamani 2005: 100-101).

desafíos y qué potencialidades emancipativas habitaron estos momentos de lucha?

En el presente artículo, me propongo reflexionar acerca de los procesos de auto-organización barrial y de las prácticas políticas comunitarias existentes en las villas alteñas. Este análisis se abordará a partir del estudio de dos distintos momentos del acontecer de la vida política de El Alto: lo cotidiano y la rebelión. En la parte inicial del texto relativa al primer punto de análisis, explico cómo se organiza la vida política y social en la urbe alteña: qué tipo de comunidades son las comunidades barriales y qué tipo de prácticas políticas y relaciones sociales las configuran. En la segunda parte, en cambio, reconstruyo brevemente algunos de los momentos más significativos de las movilizaciones de 2003, para sucesivamente ir observando cómo a partir de los ámbitos comunitarios de la vida política descritos en la primera parte, durante los levantamientos alteños, fueron emergiendo un conjunto de poderes autónomos de carácter comunal que se enfrentaron con el poder estatal, llegando a disolverlo momentáneamente.

Historia de una ciudad auto-construida

Caótica y ruidosa pero, al mismo tiempo, lenta y desolada, pobre y rebelde, joven e irreverente, El Alto es una ciudad de rostros duros, miradas severas y manos rotas por el viento frío del altiplano. Un intrincado laberinto de calles que encuentran otras calles: unas vacías, llenas de huecos, polvo, basura y esqueléticos perros callejeros, que compiten en número con sus ciudadanos; otras congestionadas y ruidosas, por la excéntrica mezcla de minibuses, improbables puestos de ventas, permanentes fiestas barriales e imprevisibles marchas de protestas, frecuentes tanto como las fiestas. Una ciudad impenetrable para las miradas occidentales que, la mayoría de las veces, se retraen molestas frente a la hostilidad y la desconfianza de sus habitantes. Una ciudad difícil de descubrir que, sin embargo, sabe ser también increíblemente amiga y acogedora, como los colores variopintos de sus mercados, la expresión humilde y digna de sus habitantes y la fuerza femenina de sus cholitas, vientres fértiles y madres orgullosas. Una ciudad india y combativa, como las páginas más íntimas de su historia.

Aquí, entre 1780 y 1781, Tupak Katari y Bartolina Sisa establecieron el gran cuartel general del ejército quechua y aymara, desde el cual condujeron el cerco de casi seis meses a la ciudad de La Paz. Hasta el principio del siglo XX, estas alturas cargadas de memoria quedaron deshabitadas: una enorme pampa fría y vacía a las afueras de la ciudad de La Paz, dominada por las grandes montañas de la Cordillera Real, que hoy siguen vigilando la vida de la grande urbe alteña. Pocas familias de hacendados (Julio Téllez, Jorge Rodríguez Balanza, Adrian Castillo Nava, Raúl Jordán Velasco y Francisco Loza) contendían por el espacio con algunos *ayllus* originarios, que no se rendían a cederles sus tierras comunales.

El centro urbano empezó a surgir sólo al principio de los años 40s, cuando algunos hacendados decidieron urbanizar sus propiedades y lotear sus tierras. En las décadas anteriores, habían empezado a aparecer algunas empresas y actividades económicas en lo que hoy se conoce como la Ceja (la Empresa de Navegación del Lago Titicaca, el Ferrocarril La Paz-Arica, las oficinas del Lloyd Aéreo Boliviano y los primeros galpones de YPF) que fomentaron una primera urbanización del área (Sandoval y Sostres 1989 : 21).

Con la expropiación de las haciendas, después de la Reforma agraria del 1953, la naciente ciudad empezó a poblarse siempre más rápidamente, recibiendo todos los excedentes de la población campesina que, liberada del yugo de los patrones, empezó a migrar a los centros urbanos en búsqueda de mejores condiciones de vida. Al final de los años '70, El Alto era ya un importante barrio de casi 100.000 habitantes en las periferias de la ciudad de La Paz.

En las décadas de los años 80s y 90s, la ciudad comenzó a crecer a ritmos espantosos (con una tasa anual promedio del 9,2%). Después de la brutal sequía de 1982 y 1983, que afectó a todo el altiplano, y de la aplicación del decreto 21060, que abrió paso a la implementación de las medidas económicas neoliberales, miles y miles de campesinos y mineros relocalizados, provenientes de las comunidades aymaras del altiplano y de los principales centros extractivos del país, se asentaron masivamente en las periferias ur-

banas de la capital. El Alto, que al principio de los años ochenta era sólo un barrio marginal de la ciudad de La Paz, pasó de tener 95.434 habitantes en 1976, a 307.403 en 1988, 405.492 en 1992, 646.958 en 2001 y 800.273 en 2005 (Laruta 2006: 4).

La rápida y masiva migración de estos sectores sociales desposeídos a la urbe alteña determinó que la ciudad se desarrollara caóticamente en una lógica de ilegalidad, abandono, marginalidad y olvido estatal. Repitiendo un guión tristemente conocido en las metrópolis latinoamericanas, la mancha urbana alteña se expandió rápidamente dando lugar a una ciudad que se caracteriza por la dramática ausencia de servicios y la precariedad de las condiciones de vida de sus habitantes.

Actualmente, El Alto es una de las ciudades con los índices de pobreza más altos del país. A la precariedad de las viviendas y a la ausencia de los servicios básicos (en el 2000, poco antes del estallido de las protestas, el 69,4% de las viviendas alteñas no contaba con alcantarillado y sólo el 66% tenía conexión al agua potable), se añade la absoluta insuficiencia de los servicios sanitarios (que apenas cubren el 20% de las necesidades de sus habitantes), el bajo nivel escolar de su población, los altos índices de desempleo y la precariedad de avenidas y calles, la mayoría de las cuales no tienen todavía pavimentación (Red Habitat 2000: 23).

Pobreza, marginalidad, desempleo, explotación son el pan de todos los días para los pobladores de esta ciudad. Sin embargo, los y las alteñas no se han resignado nunca a la situación de marginalidad en la que los ha relegado la ausencia del estado y la irresponsabilidad de sus gobernantes. Han aprendido muy temprano a enfrentarla y a sobrevivir en ella, construyendo y alimentando una tupida red de relaciones comunitarias y un fuerte sentimiento de unidad barrial, que les permitió superar (por lo menos en parte) la precariedad de sus condiciones de vida. (Sandoval y Sostres 1989: 73)...

“Entre sus escasas pertenencias, los migrantes habían traído consigo la **herencia inmaterial del saber organizativo**”. Dice Adolfo Gilly, comentando los procesos migratorios en El Alto (Gilly 2009: 33). Y así fue. Expulsados de

sus lugares de origen, los mineros relocalizados y los campesinos aymaras del Altiplano, las dos almas originarias de El Alto, empezaron a reconstruir sus vidas en las inhóspitas tierras alteñas a partir de lo único que realmente poseían: su cultura corporativa y comunitaria, su incomparable experiencia de lucha y auto-organización social y sus solidas redes de parentesco. Campesinos y mineros (indígenas, al fin) se enfrentaron a las nuevas condiciones de pobreza encontradas en la ciudad, recreando nuevas formas de organizaciones sociales al interior de las cuales reprodujeron, adaptándolas al medio urbano, muchas de las prácticas políticas y de los mecanismos organizativos de sus lugares de origen.

Hoy en día, en El Alto, estos saberes organizativos se encuentran materializados en una amplia red de agrupaciones y organizaciones de varia naturaleza (asociaciones gremiales, clubes o centros de madres, asociaciones de relocalizados, centros juveniles, asociaciones de padres de familias, juntas de vecinos, etc.): un complejo tejido social extendido por barrios y zonas, a través del cual los alteños organizan diariamente su vida cotidiana. Las identidades colectivas por gremio laboral, pertenencia territorial o familiar, en El Alto, preceden mayoritariamente a cualquier manifestación de individualidad y son utilizadas cotidianamente para organizar la actividad laboral, ejercer control social, plantear demandas, introducir querellas igualitarias, etc.

Al interior de este complejo entramado social, sobresale la importancia de las relaciones barriales, verdadero motor de la historia y del desarrollo de la ciudad de El Alto. La primera comunidad que los migrantes tienden a recrear al llegar a la ciudad es, sin duda alguna, la **comunidad vecinal**. Las razones son varias. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que la llegada y la instalación de los migrantes a la ciudad de El Alto fueron, y siguen siendo, en gran medida hechos colectivos (Zibechi 2006: 44). La decisión de dejar los lugares de origen y moverse a los centros urbanos surge, en muchos casos, a partir de acuerdos entre distintas familias, que migran y se asientan en la ciudad colectivamente (es esta la razón por la cual en El Alto se encuentran numerosos barrios de gente proveniente de un mismo centro minero o comunidades rurales). También cuando las familias no se conocen anteriormente,



la creación de un asentamiento se hace frecuentemente de forma colectiva: la gente que aspira a ocupar un lote para construir su vivienda se reúne alrededor de algunos líderes y se organiza para iniciar a ocupar con carpas una zona de la ciudad (el Movimiento Sin Techo se generó, por ejemplo, a partir de estos episodios). En ambos casos, la inserción en el espacio urbano es fruto de una decisión y una acción colectiva.

En segundo lugar, las extremas condiciones de vida, que los migrantes tienen que enfrentar a su llegada, los obliga a cohesionarse y actuar unitariamente para hacer frente a las privaciones comunes: la ausencia de servicios básicos en los barrios (electricidad, agua y alcantarillado), la necesidad de legalizar sus lotes, la pavimentación de las carreteras, la construcción de escuelas y servicios sanitarios, etc. Desde el primer momento en que se asientan en el territorio urbano, los alteños se ven obligados a actuar y luchar todos juntos, en calidad de vecinos. Esto lleva a la creación de sólidas comunidades barriales alrededor de las cuales los alteños organizan gran parte de sus luchas colectivas.

Durante mi trabajo de investigación en El Alto, he tenido la oportunidad de visitar varias villas y conversar con numerosos vecinos y vecinas sobre el origen de sus barrios y las condiciones que les tocó enfrentar al llegar a la

ciudad. Las historias y las experiencias de vidas recogidas, si bien distintas, compartían siempre un hilo común: la lucha de los vecinos para legalizar sus lotes, garantizar el acceso a los servicios básicos y mejorar las condiciones de vida de sus barrios. El recuerdo de las marchas de protestas, de los bloqueos, de las cuotas o de los trabajos comunitarios para construir una escuela, una cancha de fútbol, una plaza, etc., emergían en cada conversación, dibujando el carácter combativo de una ciudad cuyos habitantes han tenido la necesidad de reinventar constantemente las formas de sobrevivir y resistir a las condiciones de escasez y marginalidad a las que la historia de su país los ha relegado.

“En los barrios alteños se fusionaron dos lógicas organizativas distintas. La de los mineros y la de los campesinos. Los primeros dieron línea a la organización de las juntas de vecinos, de cómo estructurarse y de cómo luchar. Los campesinos en cambio le han dado más un rasgo comunal que uno ve en los turnos de trabajos para construir las calles, las escuelas, (...) y también en la asamblea y en la forma de concebir el ejercicio de la autoridad”³.

De esta forma, en los barrios de El Alto la combatividad y la experiencia de lucha de los mineros se fusionaron con la creatividad y la capacidad auto-organizativa de las comunidades aymara. Los vecinos alteños no sólo aprendieron a bajar todos juntos a las calles, supieron también convivir colectivamente y construir juntos, adobe tras adobe, sus casas y sus barrios. Arquitectos de su propia ciudad, estos sectores sociales dieron a El Alto una conformación absolutamente original, estética y socialmente hablando. Aquel “saber hacer juntos” (Zibechi 2006) que la población aymara ha siempre demostrado a lo largo de su historia, volvió a reaparecer bajo otras formas y condiciones en el espacio urbano. Las redes de reciprocidad, que regulan cotidianamente las relaciones sociales en el mundo rural andino, se reactivaron para hacer frente a las condiciones de escasez que la gente tuvo que enfrentar al llegar a la ciudad. El *ayni* y la *mink’a*, los mecanismos ay-

3 Entrevista a Marco Quispe, radio periodista alteño, El Alto 26/10/2008.

maras de ayuda mutua, fueron utilizados en la construcción de las viviendas (familiares y vecinos se ayudaron recíprocamente para levantar sus casas). La pavimentación de las calles, los centros médicos, las zanjas para la red hidráulica, las plazas, etc., es decir, los servicios en beneficio de toda la comunidad barrial, se hicieron, en cambio, mediante un sistema de turnos colectivos entre las familias asentadas en el barrio. De esta forma, los alteños fueron edificando colectivamente su propia ciudad.

“No teníamos ni agua, del Illimani, del pozo nos la traíamos o nos comprábamos.....grave hemos sufrido toditos. Después nos hemos organizado y, de a poco a poco, agua hemos traído, luz de allí arriba, escuela también hemos hecho, cancha para nuestros hijos..... en acción comunal hemos trabajado: hemos comprado cordón, hemos hecho cotas, turnos de trabajo, los que no trabajan multas eran. Después de eso, poco a poco, poco a poco, hemos resuelto muchos problemas (...) Unidos siempre hemos estado, unidos pues vamos a salir adelante”⁴.

Al construir colectivamente sus casas, sus barrios y su ciudad, los alteños empezaron a reinventar un nuevo tipo de comunidad, una comunidad urbana, que surgió a partir de un ámbito concreto y común de resistencia, donde se compartía no solo los mismos problemas y las mismas necesidades, sino también la conciencia de pertenecer a un colectivo organizado: el barrio.

Este sentimiento de pertenencia a una unidad territorialmente organizada se reflejó de manera muy evidente en las formas de organización internas que las villas alteñas asumieron. A partir de las prácticas sociales de cotidiana resistencia descritas arriba, los alteños se dotaron de un espacio de decisión y deliberación colectiva, la asamblea barrial; implementaron un complejo sistema interno de derechos y obligaciones, a través del cual auto-reglamentaron la vida colectiva al interior de las villas; y empezaron a nombrar periódicamente sus autoridades locales, encargadas de defender los intereses de los barrios y llevar sus reivindicaciones frente al estado.

4 Entrevista a Doña Candy, vecina de Villa Imperial, El Alto 12/09/2008.

Las juntas vecinales son la expresión más evidente de lo que acabamos de decir.

Las juntas de vecinos y las formas comunitarias de la política en las villas alteñas

La lucha cotidiana de los pobladores alteños para garantizar su sobrevivencia en el medio urbano y alcanzar condiciones de vida más dignas y humanas dio lugar al surgimiento de las juntas de vecinos. Éstas emergieron, y siguen emergiendo, a partir de la iniciativa autónoma y espontánea de los alteños que empezamos a reunirse y a organizarse para debatir y buscar soluciones comunes a las necesidades básicas de cada barrio. Sin embargo, en el tiempo, se fueron institucionalizando, adquiriendo el carácter de verdaderas instancias públicas cuyo objetivo principal es el de reivindicar frente a las autoridades estatales mejores condiciones de vida para los vecinos.

“La principal función de la junta de vecinos es la de atender las demandas de su comunidad: reclamar la legalización de los papales, las minutas, todo el aspecto legal frente a los loteadores y la Alcaldía, los servicios básicos, la escuela, la posta sanitaria, la construcción del mercado y el mantenimiento de las áreas verdes y deportivas”⁵.

Cada asentamiento urbano, al nacer, organiza inmediatamente una junta vecinal para coordinar la vida al interior del barrio y dotarse de un mecanismo que le permita formular sus demandas frente al Gobierno Municipal. Una vez constituidas, las juntas empiezan a operar sobre dos frentes diferentes: por un lado, se encargan de coordinar la vida colectiva en el barrio y de solucionar los problemas comunes; por el otro, tienen la responsabilidad de presentar las reivindicaciones de los vecinos frente a las instituciones públicas y de canalizar los financiamientos estatales hacia los barrios. Es decir, las juntas de vecinos se mueven constantemente entre dos ámbitos

5 Entrevista a vecino, citada en (Zumarán 2003: 67).

políticos distintos (y, a veces, contrapuestos): por un lado, operan en el ámbito de la auto-organización barrial y, por el otro, actúan en el campo de la acción reivindicativa y de la mediación estatal, campo al interior del cual se pueden generar comportamientos políticos muy distintos, desde el abierto enfrentamiento con las instituciones estatales hasta prácticas prebentales y clientelares.

Por cuestiones de brevedad, en las páginas siguientes no abordaremos este segundo aspecto (a pesar de ser un elemento fundamental en la vida política alteña); nos concentraremos más bien en analizar las prácticas políticas comunitarias que se generan cotidianamente a partir de estos procesos de auto-organización barrial.

Se comprenderá mejor el funcionamiento de las formas de organización comunitaria existentes en las barriadas alteñas si empezamos analizando cómo los alteños conciben el derecho a la propiedad y de qué manera esta concepción incide en la regulación de las relaciones sociales entre los vecinos.

La vida social y política en los barrios alteños se articula, en la mayoría de los casos, alrededor de un complejo **sistema de derechos y obligaciones colectivos**, que reproduce parcialmente la lógica política existente en el mundo comunitario andino. La vigencia de este mecanismo de regulación política está ligada en gran medida a la forma en que los aymaras urbanos conciben el derecho a la propiedad y a la vivienda. De manera similar a lo que acontece en las comunidades del altiplano paceño, el derecho a la propiedad y/o a tener acceso a una vivienda en los barrios alteños no es una cuestión de simple compra-venta, sino algo que tiene que ser constantemente renovado a través de la participación de los vecinos y de las vecinas en la vida colectiva de la villa. Cada unidad familiar o unidad habitacional es titular de un lote al interior de un barrio⁶. La ocupación de este espacio garantiza el acceso y la pertenencia de sus ocupantes a la comunidad barrial y a la junta de vecinos.

⁶ No es necesario tener un título de propiedad legalmente reconocido, es suficiente ocupar materialmente un lote. Sin embargo, es necesario que la junta autorice esta ocupación. De la misma forma, si un vecino quiere vender su lote o cederlo a algún pariente tienen que tener la autorización de la junta.

Sin embargo, para que este derecho sea respetado y protegido por los demás, la familia que ocupa el lote tiene que cumplir con todos los deberes públicos que la asamblea barrial define.

La principal obligación de un vecino alteño, sobre todo en los primeros años de vida del barrio, es la de comprometerse con la lucha colectiva por la legalización de los títulos de propiedad y la obtención de los servicios básicos. Esto implica que los vecinos tomen parte en todas las iniciativas que como asamblea barrial se decida emprender al respecto: desde la participación en las acciones de protesta, hasta el cumplimiento de los turnos de trabajos colectivos para la realización de obras y mejoras en el barrio (construcción de escuelas, plazas, canchas, pavimentado de calles, etc.). Por lo general, un vecino está obligado a: participar puntualmente en la asamblea barrial; aportar regularmente sus cuotas, prestar los servicios colectivos para el barrio y participar en las movilizaciones locales y nacionales conforme a las decisiones que se tomen al interior de la junta de vecinos. Sus derechos, en cambio, consisten en poder contar con el acceso a un lote, a su vivienda y a todos los servicios que el barrio va conquistando con el pasar del tiempo. Además, todo vecino tiene derecho a participar en la toma de las decisiones sobre los asuntos colectivos y a ser atendido por sus autoridades.

El incumplimiento de algunas de las obligaciones mencionadas arriba puede dar lugar a sanciones morales y materiales por parte de la comunidad barrial. Detrás de la aplicación de las sanciones, reside un principio fundamental: en la medida en que el barrio y los servicios se van construyendo y obteniendo colectivamente, todos tienen que participar de igual forma en este proceso⁷. Es esta una obligación moral, que no presupone necesariamente la existencia de un “pacto voluntario” entre los vecinos. Se trata más bien de un “deber ser”, de un supuesto ético que regula el hacer colectivo de las

7 Uno de los mecanismos más común de autorregulación barrial es el sistema de las fichas. Las fichas se reparten por lotes. En cada de una ellas, se van anotando las tareas colectivas que los vecinos tienen que cumplir (asistencia a la asamblea, participación en las marchas, cuotas, prestación de trabajos colectivos, etc.). Los dirigentes marcan un sello en la ficha en ocasión de la realización de cada actividad obligatoria (la obligatoriedad de una actividad se define siempre en asamblea). A las familias, que no tienen debidamente llenada su ficha, se les aplica periódicamente una sanción monetaria o material, cuya cantidad varía siempre en proporción a la gravedad de la falta.

comunidades urbanas alteñas. Quien lo viola, tiene que ser sancionado, por una cuestión de equidad hacia los demás. Doña Candy, una vecina de Villa Imperial, expresó así este concepto:

“Si no participan, nosotros les hacemos pagar. Tenemos reuniones, trabajos, marchas, asambleas de emergencia.....no es justo que unos participan y otros no. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones, así es. Por eso a los faltones le hacemos pagar: fichas reparten y, si faltan, pagan.

¿Y a usted le parece justo ese sistema de poner sanciones?

Sí, pues. Nosotros vamos a perder el tiempo en allí para ellos también. Todos igual hay que hacer las cosas”⁸.

El presidente de la misma zona, me dijo algo muy parecido:

“(...) es que así como hay derechos, hay obligaciones también: así como tienen derechos a tener su casa, su propiedad, agua potable, electricidad, estos son derechos humanos que existen, pero también como vivimos en una sociedad hay obligaciones que tiene que cumplir el vecino. Si no cumple entonces no se le puede dar la luz, el agua potable.....hasta que cumpla sus sanciones. Por eso, a veces se corta la luz, el agua potable o se le empuja la pared. Es una forma de hacer cumplir las resoluciones ...y además de eso, punir una injusticia. Otros conscientemente vienen a trabajar, vienen a la asamblea, pero otros están en su casa tal vez mirando película, eso no es justo. Entonces por eso los dirigentes tienen que hacer justicia”⁹.

Al igual que en el campo, también en las villas alteñas el sujeto titular de los derechos y de las obligaciones colectivas no es el individuo, sino la unidad familiar y/o habitacional que ocupa el lote. El acceso al lote obliga la

8 Entrevista a **Doña Candy**, vecina de Villa Imperial, El Alto 12/09/2008

9 Entrevista a **Rodolfo Nina**, presidente de la Juntas de Vecinos de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008

unidad familiar hacia la comunidad, toda familia tiene que cumplir con sus obligaciones, pagando sus cuotas y garantizando por lo menos la participación de uno de sus miembros en las actividades colectivas.

Cabe puntualizar que el sistema de derechos y obligaciones descrito arriba no funciona de la misma forma y con la misma rigidez en todas las villas alteñas. Por lo general, es muy efectivo en los barrios más periféricos, donde la necesidad de mantener sólidos los lazos comunitarios, para enfrentar las condiciones de precariedad de la vida urbana, es más apremiante. A medida que las juntas vecinales logran legalizar sus lotes, obtener todos los servicios y alcanzar mejores condiciones de vida para sus barrios, el respeto del principio de obligatoriedad tiende a desaparecer, para volverse casi totalmente ausente en los barrios más ricos de la ciudad, donde las relaciones mercantiles y capitalistas han penetrado profundamente en el tejido social.

Ahora bien, el hecho que estos sistemas de auto-regulación de la vida barrial tiendan a desaparecer en el tiempo, a medida que se solucionan los problemas relativos al acceso a los servicios básicos, no nos impide reconocer que estamos frente a prácticas sociales de carácter comunitario muy diferentes a las dominantes en el mundo político liberal y moderno.

El sistema de derechos y obligaciones vigente en las villas alteñas responde a un código interpretativo de lo político muy diferente al que subyace en la base de las formas de socialidad que se producen al interior del estado moderno y capitalista¹⁰. Al obligarse los unos a los otros mediante acuerdos definidos a través de mecanismos de deliberación colectiva orientados a solucionar autónomamente problemas comunes, los alteños van generando al interior de sus barrios formas de socialidad diferentes a las dominantes en el moderno mundo capitalista que descansan, en primer lugar, en la capacidad social de decidir colectivamente sobre distintos asuntos comunes y, en se-

¹⁰ El estado moderno no es sólo una institución, sino también una forma de relación social, un proceso de formación de relaciones sociales que se conforma a partir de la separación de la soberanía política de la sociedad. Cuando hablamos de formas comunitarias de la política hacemos referencia a una forma de relación social diferente a la estatal, en decir, a un tipo de subjetividad colectiva conformada a partir de un ejercicio directo y consensuado del poder entre distintas personas, ejercicio que no requiere ninguna mediación estatal o mecanismos de delegación de la soberanía.

gundo lugar, en el despliegue del valor de uso de la vida (es decir, en la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de la comunidad barrial) por encima de su valor de cambio capitalista. Dicho de otro modo, detrás del sistema de derechos y obligaciones descrito arriba, opera una forma de decodificar lo político (es decir, de comprender el modo en que tiene que configurarse la legalidad de la convivencia humana) en la que las relaciones inter-sujetivas que definen la colectividad constituyen una suerte de unidad orgánica soberana: la soberanía no es delegada, sino que es ejercida directamente por la comunidad barrial que decide autónomamente como responder a las necesidades que van surgiendo en la villa.

Foto: Hernán Izurieta Weyacuma



La capacidad de los pobladores de los barrios alteños de crear, al interior del espacio urbano, formas alternativas de socialidad centradas en la producción y en el disfrute colectivo de valores de uso, emerge claramente cuando analizamos cómo operan dos instituciones centrales en la vida de los barrios alteños: los sistemas de **trabajo colectivo** y la **asamblea**.

El trabajo comunitario por turnos obligatorios ha sido y sigue siendo, como ya hemos mencionado arriba, la principal tecnología social a la cual los vecinos han recurrido para satisfacer sus necesidades comunes. La mayoría de los barrios alteños han sido construidos por los vecinos mediante el sistema del trabajos colectivos.

“Aquí casi todo lo hemos hecho nosotros, con nuestro propio trabajo. (...) El trabajo colectivo se convoca por cuadrillas, a veces por manzanos y es por tareas, hombres y mujeres. La señoras por ejemplo tienen que traer tierra y piedras y los hombres tiene que tirar la pared o estucar la pared, sus funciones que se dividen en

base a la capacidad y a la fuerza de cada quien. Pero todo es en común, cada familia tiene que cumplir sus horas de trabajo. Las horas de trabajo se deciden en la asamblea también y a los faltones se aplican las sanciones”¹¹.

Todas las familias del barrio trabajan conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de la villa, dando lugar a relaciones de trabajo que escapen a la lógica mercantil, cuya finalidad es más bien la de encontrar una respuesta a las necesidades concretas y vitales de los vecinos y de las vecinas. En este sentido, el trabajo colectivo de los alteños es una forma de “trabajo útil” en tanto generador de valores de uso: no sólo produce bienes colectivos para el disfrute de la comunidad, sino que también contribuye a alimentar un sentimiento de pertenencia comunitaria y arraigo territorial entre los vecinos y las vecinas.

La territorialidad es un elemento clave para entender el funcionamiento de lo comunitario en lo urbano. La comunidad puede existir en la medida en que un grupo de familias logra asentarse en un territorio (en este caso el barrio) y establecer alguna forma de control colectivo sobre él. El sujeto político fundamental de una comunidad no sólo es un sujeto plural (la unidad familiar), sino que es también un “sujeto territorial”, es decir, un sujeto vinculado a su pertenencia a un territorio específico. El trabajo colectivo es uno de los principales mecanismos mediante los cuales los vecinos construyen esta forma de pertenencia y control sobre el territorio barrial y sobre los servicios reales que en él se van generando. En la medida en que todos trabajan para la realización de una obra, todos sienten que tienen el derecho a usufructuar y gestionar el bien producido. Este sentimiento fortalece enormemente los lazos comunitarios, la identificación colectiva con un territorio y la consolidación de un sentimiento de autogobierno.

“El Alto no es una ciudad cualquiera, es una ciudad autoconstruida. Esta condición le ha dado la posibilidad de construir un poder distinto al estado, un poder barrial. La gente acá dice: ‘El

11 Entrevista a **Rodolfo Nina**, presidente de la Juntas de Vecinos de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008.

estado nunca nos ha construido, porque nosotros tenemos que darle algo. (...) El estado no tiene ningún derecho de pisar este territorio. Nada ha hecho, todos hemos hecho nosotros, ni siquiera alcantarillado nos ha dado'...y así dicen. Es como si existiera una reapropiación autónoma del territorio, que permite que exista un poder distinto al estatal"¹².

El ámbito donde se definen los términos de esta gestión colectiva del espacio barrial es la asamblea. La asamblea es la máxima instancia de autoridad al interior de las juntas de vecinos. En este espacio, los pobladores de los barrios alteños analizan los problemas comunes y consensuan las decisiones y las acciones colectivas a tomar.

Los dirigentes de la junta están obligados a convocar a los vecinos en asamblea periódicamente (una vez al mes o cada dos meses) y todas las veces que sea necesario abordar un asunto común. Todas las familias que viven en la villa, sin exclusión alguna, pueden (y en algún caso deben) tomar parte en la asamblea.

“¿Quién participa en la asamblea?

Son todos vecinos que se convocan mediante convocatoria pública.....es abierto, todo mundo participa, vecino vecina o entre esposos, todo mundo está convocado para participar.

¿Los vecinos tienen la obligación de participar o es voluntario?

Evidentemente tienen. Si no participa y después quiere reclamar por algo que afecta su interés ya no puede, está obligado a acatar lo que se decide. Por eso se convoca con una orden del día y si no le gusta tiene que venir a la asamblea para modificar la orden del día y discutir sobre este punto en función de su interés. Si no participa se aprueba lo que ellos no quiere, pero igual tienen la obligación de cumplir"¹³.

12 Entrevista a **Marco Quispe**, radio periodista alteño, El Alto 26/10/2008.

13 Entrevista a **Doña Cristina**, vecina de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008. En el caso específico de Villa Imperial, donde se

La decisión de la asamblea es soberana. Tanto los dirigentes como los vecinos tienen que cumplir el mandato de la asamblea. Una vez que se consensuan colectivamente las decisiones y las acciones a realizar, todos tienen que cumplir con lo que se estableció: es la regla que gobierna la disciplina comunal, cualquier incumplimiento puede dar lugar a sanciones. En las formas comunitarias de la política, la decisión reside siempre en la colectividad. El “nosotros” manda: un nosotros de carne y hueso construido más allá de la ilusoria unificación estatal a partir de una compleja red de relaciones de cooperación y convivencia cotidiana y de un ejercicio autónomo y contante de deliberación colectiva que se renueva y se reactualiza constantemente.

Lo anterior implica que en los barrios alteños donde perviven estas formas de auto-organización comunitaria el ejercicio el cargo de dirigente no se traduce nunca en una total delegación de la capacidad de conducción y dirección de los asuntos públicos. El dirigente de las juntas de vecinos no es de ninguna manera designado para mandar, sino simplemente para orientar y dar curso a la voluntad colectiva. La capacidad de decisión reside en última instancia en la colectividad. Los dirigentes de las juntas de vecinos alteñas no pueden actuar o tomar decisiones a espaldas de la gente. Por lo contrario, tienen siempre que consultar a los vecinos del barrio en una asamblea.

“Hay dos principios: uno de la Asamblea y uno del dirigente. El de la asamblea es tratar todos los temas concernientes a un interés social y común y resolver estos problemas mediante decisión colectiva. (...) La asamblea es la máxima autoridad y los dirigentes tienen que respetar lo que se decide allí. Al mismo tiempo, el otro principio es que el presidente tiene que orientar a la asamblea, dirigir para que no se pueda cometer ciertos errores o delitos, que pueden también cometerse por la asamblea. El principio del dirigente es un principio de autoridad de orientar para que no pueda cometerse ningún tipo de errores. La asamblea hay veces que se

realizó la entrevista anterior, por lo menos un miembro de cada unidad habitacional tiene la obligación de participar en la asamblea. Sin embargo, este principio no es respetado en todos los barrios de El Alto. En general, la afluencia a la asamblea varía mucho, dependiendo de las reglas internas de las juntas vecinales, de la importancia del asunto que se va a discutir y del momento político que se está viviendo.

*puede emitir una resolución en contra de la ley, por ejemplo, un linchamiento a una persona porque ha cometido un supuesto delito y ahí ya el dirigente tiene que direccionar y orientar la vecindad al respecto de los derechos humanos. **Esta son las reglas entre la asamblea, que manda, y el directorio, que dirige***¹⁴.

El trabajo de los dirigentes no es retribuido. Todo dirigente presta su servicio *ad honorem*. Sin embargo, a diferencia de las áreas rurales, en las áreas urbanas no se respeta el sistema del *thakhi* obligatorio. La asignación de los cargos no es ni obligatoria, ni rotativa: todo dirigente es elegido mediante voto (directo o secreto, de acuerdo a las reglas internas de las juntas). El mandato dura dos años y puede ser renovado distintas veces (el estatuto de la FEJUVE, no prevé límites para la reelección de los dirigentes).

Estas diferencias determinan que entre los dirigentes alteños se generen, con más facilidad que en el campo, comportamientos políticos de tipo caciquil o mecanismos de corrupción y cooptación partidaria. En El Alto, en efecto, es muy frecuente que un dirigente ejercite su cargo a lo largo de varias gestiones, esto implica (de manera similar a lo que acontece en las formas liberales de la política) una cierta profesionalización del rol del dirigente y la posibilidad de que se desarrollen formas de ejercicio del poder de carácter paternalista y autoritario. Sin embargo, cabe destacar que estos fenómenos suelen darse con mucha más frecuencia en los niveles superiores de la organización vecinal. A nivel de las juntas de vecinos, las bases logran todavía ejercer un buen control sobre sus autoridades: la voluntad de la asamblea es respetada y, en caso de incumplimiento o falta de transparencia, los dirigentes pueden ser fácilmente sancionados o expulsados por sus bases.

Resumiendo: a partir de los procesos de auto-organización popular surgidos en torno a la necesidad de enfrentar colectivamente las condiciones de marginalidad en las que se desarrolla cotidianamente su vida, los alteños han recreado, adaptándolas al medio urbano, formas de organización política de carácter comunitario. Estas prácticas políticas son, por lo general, expre-

14 Entrevista a **Rodolfo Nina**, presidente de la Juntas de Vecinos de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008.



Foto: abibbo

sión de una politicidad que se organiza “más allá” del orden instituido por el capital y por el estado. Su ejercicio, en efecto, genera en la sociedad espacios - tiempos donde se experimentan formas de igualdad social y económica que tienden a privilegiar el valor de uso de la vida sobre el valor de cambio, así como formas de ejercicio del poder autónomas, no delegativas, al interior de las cuales el sujeto titular de la soberanía social es el “nosotros barrial”.

En lo cotidiano, estas formas comunitarias de organización de la vida social coexisten de manera ambigua y desarticulada, bajo una relación de dominación, con las instituciones estatales. Sin embargo, hay momentos en los que las reglas de esta ambigua coexistencia entran totalmente en crisis: son momentos en los que la dominación se hace insoportable y la necesidad de rebelarse indetenible. En esos momentos, el complejo entramado comunitario alteño entra en una relación de abierto conflicto con el estado, invirtiendo momentáneamente los términos del orden de dominación existente.

Los momentos de insurgencia vividos en El Alto en 2003 fueron unos de esos momentos históricos en los que los poderes comunitarios alteños desafiaron abiertamente el orden estatal y las formas instituidas de ejercicio de la política, abriendo paso a una forma distinta de pensar y ejercer el poder.

Veamos cómo y por qué.

La lucha de Octubre de 2003: El Alto insurrecto

Octubre de 2003 marcó un antes y un después en la historia presente de Bolivia: fue el punto de mayor alcance de una extraordinaria ofensiva indígena y popular contra el capital trasnacional y el estado boliviano, que se abrió con la Guerra del Agua en Cochabamba y se cerró definitivamente en junio de 2005, con la caída del presidente Mesa. A lo largo de este mes, recordado por la memoria colectiva con el nombre de “Octubre Negro” (las balas del ejército boliviano dejaron 70 muertos y más de 400 heridos en las calles), los hombres y las mujeres bolivianas impusieron a palos y piedras un nuevo rumbo a la historia de su país: el “Goni”, el símbolo por excelencia del poder neoliberal fue obligado por la furia incontenible de los de abajo a dejar Bolivia, develando públicamente el agotamiento de una forma de dominación económica, política y cultural que los bolivianos no estaban dispuestos a sufrir más.

Recordamos brevemente algunos de los momentos más sobresalientes de la rebelión.

Las primeras protestas en El Alto se desataron a mediano de septiembre cuando la FEJUVE y la COR decidieron proclamar un paro indefinido en la ciudad como medida de protesta en contra de la introducción de dos nuevos formularios, llamados “Maya y Paya” (uno y dos en aymara), que el alcalde estaba tratando de imponer a los pobladores alteños. Se trataba de una medida del Gobierno Municipal para modificar las formas de gestión del catastro. El rechazo de la población se basaba en el hecho de que, a partir

de la información recolectada, la alcaldía pretendía elevar el pago de impuestos relativos a la construcción y refaccionamiento de casas y habitaciones (Gómez 2004: 24). En una ciudad tan pobre como El Alto, donde la mayoría de la gente no tiene ingresos estables, un aumento de la imposición fiscal iba a afectar profundamente la economía de las familias alteñas. Sintiendo amenazados por la introducción de este nuevo impuesto, los vecinos y los gremiales de la ciudad apoyaron contundentemente las medidas de protesta lanzadas por sus organizaciones matrices y, a partir de la noche del 14 de septiembre, empezaron a levantar bloqueos en distintos puntos.

Las principales carreteras de El Alto se volvieron intransitables, el transporte público se suspendió (por decisión de la federación regional de transportistas), las escuelas cerraron y los locales comerciales de la ciudad fueron obligados a suspender sus actividades. El Alto se paralizó. Las redes vecinales e inter-barriales entraron en acción, junto a los gremiales, los estudiantes y los sindicatos de la ciudad. Ladrillos, piedras y latas empezaron a obstruir el paso de numerosas calles. Los principales puntos de salidas de la urbe como San Roque hacia el altiplano norte, Senkata hacia Oruro y cruce Viacha hacia el sector Viacha, fueron literalmente tomados por la población. La mayor parte de los distritos de la ciudad se movilizaron: las juntas vecinales afiliadas a cada distrito participaron en los bloqueos implementando un sistema interno de turnos rotativos, mediante el cual los vecinos de cada barrio estaban obligados a alternarse en los puntos de vigilias en representación de sus juntas (Mamani 2005: 47). De esta forma, la gente de base empezó a activar al interior del espacio urbano la dimensión territorial de la organización comunal aymara, ocupando físicamente la ciudad.

Frente a la poderosa reacción de los alteños, la alcaldía decidió suspender la aplicación de los formularios. Sin embargo, las protestas sociales no se detuvieron. Desde Cochabamba la Coordinadora del Gas¹⁵, juntos con otras organizaciones sindicales y sociales, convocó para el 19 de septiembre una

15 La Coordinadora de defensa del Gas se conformó en septiembre de 2003, agrupando en torno a sí varios sindicatos, instituciones cívicas, vecinales, campesinas, profesionales y universitarias que habían participado en el 2000 en la Guerra del Agua. Sin embargo no logró tener la misma eficacia organizativa y política que tuvo esta última.

gran jornada de movilizaciones nacionales en defensa del gas y de su nacionalización. Ya desde algunos meses, varias organizaciones sociales bolivianas habían empezado a denunciar los términos desventajosos en los que el estado boliviano había establecido los contratos de extracción y exportación de gas con diversas empresas trasnacionales. La gente cuestionaba ásperamente el poder del capital trasnacional en el país y las formas de privatización de los recursos naturales y de las empresas públicas que los gobiernos neoliberales habían viabilizado con la aplicación de la Ley de Capitalización. La decisión del gobierno de Sánchez de Lozada de exportar una gran cantidad de gas natural a México a través de los puertos chilenos de Arica e Iquique (que habían sido sustraídos a Bolivia durante la Guerra del Pacífico en 1879) hizo explotar el malestar social que venía madurando desde varios meses.

El 19 de septiembre, distintas organizaciones sociales del país respondieron al llamado popular en defensa del gas. Las principales manifestaciones se produjeron en la ciudad de La Paz y en Cochabamba. Los alteños bajaron a la capital, desfilando compactamente hasta la Plaza Murillo (sede del Palacio del Gobierno) junto con los campesinos del altiplano, los cocaleros de los Yungas, los estudiantes, los choferes y los comerciantes de la ciudad. De manera similar, en Cochabamba miles de cocaleros, estudiantes, trabajadores y organizaciones ciudadanas marcharon en las calles de la ciudad al grito de: “El gas no se vende, carajo”; “El gas es nuestro”. A partir de este momento, la recuperación del gas se trasformó en la consigna de todas las organizaciones sociales del país, articulando las distintas luchas regionales en un único y poderosísimo movimiento popular en defensa de los recursos naturales.

La respuesta del gobierno no tardó en llegar. Sánchez de Lozada, al igual que sus predecesores, Banzer y Quiroga, eligió la represión militar como camino para disuadir la protesta. El 20 de septiembre, el día sucesivo a las grandes movilizaciones en defensa del Gas, el ejército no dudó en forzar un bloqueo de camino que los comunarios de Omasuyos habían organizado en la localidad de Warisata. El pretexto oficial fue el rescate “humanitario” de alrededor de 1000 turistas que habían quedado bloqueados en la localidad de Sorata a causa del inicio de las movilizaciones. El ejército incursionó en el

pueblo con la excusa de liberar la carretera, dejando tres víctimas en el camino, entre ellas Marlene, una niña de apenas 2 años, asesinada por un proyectil que atravesó los vidrios de la ventana de su casa.

La injusta muerte de Marlene y la agresión al pueblo de Warisata desataron la rabia de los indígenas aymaras. Warisata es el corazón cultural del mundo aymara, la sede de la primera Normal indígena del país, orgullo y esperanza del mundo indígena-campesino del altiplano. Con esta incursión, el ejército boliviano violó uno de los símbolos más importantes de la lucha aymara para el reconocimiento de su identidad cultural, manchándose además con la muerte de una niña inocente. La reacción de los indígenas aymaras, tanto el campo como en los barrios de la ciudad de El Alto, fue directamente proporcional a la gravedad de la agresión estatal.

En todo el territorio aymara (y en varios otros lugares del país), las medidas de protestas se endurecieron. En las provincias del Departamento de La Paz, las asambleas comunitarias empezaron a activar sus múltiples mecanismos de consulta para redefinir los planes de lucha. A partir del 21 de septiembre, las radios comunitarias del altiplano norte empezaron a emitir en aymara los resolutivos que las bases había tomado: los bloqueos se multiplicaron rápidamente, las instituciones públicas volvieron a arder (como en 2000 y 2001) y los mandos militares del ejército indígena aparecieron nuevamente, armados de máuser y cubiertos con pasamontañas (Gómez 2004: 50).

Los aymaras de la ciudad no fueron menos, en todo El Alto la protesta se radicalizó: los vecinos aprovecharon su capacidad de movilización y control territorial para ocupar milimétricamente todo el espacio urbano. Avenidas, plazas y calles volvieron a ser tomadas por la población insurrecta.

En la última semana de septiembre y en la primera de octubre, el conflicto fue creciendo en distintos puntos del país. El gobierno siguió implementando su política represiva, mas no logró detener el disenso social. Al contrario, a medida que el número de los detenidos y de las intervenciones militares iba creciendo, las acciones de protesta se tornaron cada vez más amplias e intensas.

Luis Gómez describe así este momento de efervescencia popular:

“Entre el viernes 3 y el martes 7 de octubre hubo unas decenas de marchas. Las movilizaciones ocurrieron en La Paz, El Alto, Cochabamba y hasta en la capital del oriente boliviano, Santa Cruz. Todos los días, a toda hora, se comenzó a escuchar en las calles una consigna compartida por todos los sectores: “¡Que renuncie!”. Desde el viernes 3 los yungueños cerraron todo acceso a la región, toda salida de productos tropicales (como el café, famoso en el mundo por su delicado sabor): mil campesinos custodian los caminos. Los bloqueos en el altiplano disminuyeron, pero no se apagaron, y el bloqueo de productos continuó. La COB marchó todos los días a partir del viernes.....y hasta Evo Morales comenzó a hablar de una “revolución pacífica”. Las organizaciones sociales comenzaron a proponer la creación de una Asamblea Constituyente para refundar al país. (.....) Los alteños empezaron a aplicar el Plan Wayronk’o (un escarabajo de tierra famoso por sus rutas de vuelo aparentemente caóticas): marchas y bloqueos relámpago para distraer a las fuerzas represivas, a los que enfrentarían, con la intención de llegar hasta la rica y exclusiva zona sur de La Paz. Los obreros de la COB comenzaron a coordinar acciones con ellos, los maestros urbanos hicieron lo mismo y entraron en huelga...y la gente de Sánchez de Lozada echó a rodar medidas y decretos para calmar los ánimos. Ese fin de semana el presidente promulgó un decreto para que las empresas petroleras tributaran más, decidió lanzar una consulta nacional sobre el gas y trató inútilmente de dialogar con algunos dirigentes...pero nadie escuchaba ya al gobierno, que comenzó a considerar la declaración del estado de sitio” (Gómez 2004: 69-70).

El acto de fuerza final que llevó a la caída del presidente provino de la ciudad de El Alto. El 8 de octubre los alteños convocaron a un nuevo paro indefinido de todas las actividades de la ciudad: el Alto volvió a paralizarse. El entramado comunitario urbano entró nuevamente en acción, esta vez de

manera más compacta y eficiente. La organización barrial se convirtió en el referente de la acción colectiva de los pobladores alteños: las prácticas políticas comunales a través de las cuales los vecinos buscan solucionar cotidianamente sus necesidades materiales fueron utilizadas para la organización de las protestas. El sistema de turnos y obligaciones colectivas se reactivó espontáneamente en varios barrios de la ciudad y fue utilizado para levantar los bloqueos y las barricadas contra el ejército, organizar las vigiliadas, preparar las ollas comunes y viabilizar el abastecimiento de productos alimentarios al interior de cada barrio. Todas las decisiones relativas a la gestión del conflicto empezaron a ser tomadas por las asambleas barriales e inter-barriales. Los dirigentes de la FEJUVE desaparecieron, siendo totalmente sustituidos por las redes de auto-gobierno barrial. En algunos distritos, como en el 5, los dirigentes locales decidieron reeditar las formas de organización militar aymara que habían visto surgir en el campo en 2000 y 2001 y empezaron a organizar los primeros cuarteles generales indígenas, para coordinar las acciones de protestas entre zonas y barrios (Gómez 2004: 84).

En este agitado panorama de confrontación e insubordinación social, la escasez de productos alimentarios y de combustibles en la ciudad de La Paz se hizo cada vez más aguda. El gobierno decidió entonces implementar un operativo militar para levantar los bloqueos y hacer llegar un convoy de carros cisternas cargados de gasolina desde la Planta de Senkata, en la parte sur de la ciudad de El Alto, hasta la ciudad de la Paz¹⁶. El 12 de octubre las primeras cisternas de gasolina empezaron a salir de la Planta de Senkata resguardada por el ejército y la policía nacional. La población alteña, irritada por la enésima provocación gubernamental, se resistió con toda su fuerza al paso de la caravana hacia la capital: fue el inicio de una de las insurrecciones populares más imponentes y militarmente exitosas de la historia de América Latina.

Durante más de dos días, los habitantes alteños combatieron sin tregua con el ejército: cavaron zanjas en las avenidas, hicieron caer los puentes peatonales y construyeron muros en las calles de entradas a los barrios, has-

16 El 11 de octubre el gobierno firmó el llamado "decreto de la muerte" en el cual se establecía que las Fuerzas armadas debían encargarse de hacer llegar el combustible a La Paz utilizando cualquier medio para vencer la resistencia de la población.



Foto: cuestiondigital.com

ta movieron algunos carros abandonos del ferrocarril, todo para impedir el paso del convoy militar.

El operativo militar fracasó: de 24 cisternas, sólo 3 llegaron a la ciudad de La Paz. Sin embargo, los alteños no se detuvieron. Después del tercer día de rebelión, los vecinos, junto con otros sectores sociales del país, pasaron a la ofensiva y bajaron masivamente a la ciudad de La Paz al grito de: “Fusil, metralla, el pueblo no se calla”, “El Alto de pie, nunca de rodillas”.

Eran miles: eran vecinos, maestros, estudiantes, comerciantes... en su mayoría indígenas. Bajaron una y otra vez por las calles de la capital, hasta alcanzar su objetivo: la renuncia del presidente.

La heroica resistencia alteña y el elevado número de víctimas cambiaron radicalmente la relación de fuerzas al interior del escenario político nacional. Numerosos sectores de la clase media empezaron a manifestar su disenso hacia la política represiva del gobierno y a pedir la renuncia del presidente. Entre el 13 y el 16 de octubre, muchos ministros presentaron sus renuncias, incluso el Vicepresidente tomó abiertamente distancia del gobierno. Sánchez de Lozada quedó totalmente aislado y, el 17 de octubre, abandonó el país en una avioneta facilitada por la embajada de Estados Unidos.

¿Qué significó la Guerra del Gas para la ciudad de El Alto? ¿Cómo se reinventaron las comunidades urbanas alteñas en esos momentos de lucha? ¿Cómo actuaron estos poderes comunitarios en el espacio urbano y qué relación establecieron con el estado?

La comunidad barrial en tiempo de “guerra”

Dos elementos principales caracterizaron la acción de los pobladores alteños en tiempo de “guerra”: **la ocupación estratégica y extensiva del espacio urbano** por parte de la población y **la absoluta horizontalidad en la toma de las decisiones** y en la ejecución de las acciones colectivas.

Durante los levantamientos de 2003, al igual que los aymaras del campo, los alteños se enfrentaron al estado **recuperando la dimensión territorial de la organización comunitaria**. Irrumpieron masivamente en las carreteras y en las avenidas de la ciudad, reduciendo físicamente el área de la acción estatal y estableciendo su propia soberanía territorial sobre el espacio urbano. Bloquearon calles y avenidas, cavaron zanjas, construyeron barricadas, organizaron vigilias a lado de las calles y rondas de seguridad por los barrios: tomaron físicamente el control del espacio, paralizando todas las actividades ordinarias de la ciudad e impidiendo el abastecimiento de productos en la capital.

Esta masiva irrupción de la población en el territorio urbano no aconteció de manera desordenada: siguió reglas de comportamientos y lógicas de organización espacial bien precisas. Las reglas no fueron idénticas en todos los barrios de la ciudad. Sin embargo, se organizaron alrededor de algunos patrones comunes, muy similares a los que se observaron en las formas de acción colectiva empleada por los aymaras de las zonas rurales. En efecto, si bien las acciones de protesta y resistencia fueron el resultado de la alianza entre distintos sectores sociales de la ciudad (gremiales, estudiantes, maestros, transportistas, etc.), por lo general su organización material estuvo a cargo de las juntas vecinales de cada barrio, que se encargaron de movilizar a las familias asentadas en sus respectivos territorios. Para organizar las acciones

de protesta, los vecinos recurrieron, como costumbre, a la tecnología social comunal, empleando un sistema de turnos obligatorios y rotatorios para distribuir equitativamente el esfuerzo de la acción entre ellos, evitando de esta forma que la gente se desmovilizara por cansancio.

“Las bases se organizaron solitas de forma independiente, sin importar quién dirigía. Se organizaron y había rotatividad, un día iba saliendo la mitad de un barrio, al otro día la otra mitad, iban rotando para no cansarse siempre”¹⁷.

Los turnos siguieron mecanismos diferentes dependiendo de las zonas y de las tareas a las que había que cumplir. La participación de los vecinos en las acciones de protesta fue obligatoria. Por lo general, los hombres en edad adulta de cada familia estaban obligados (bajo sanciones o hasta maltrato físico) a salir a marchar y a bloquear las calles. Las mujeres, los ancianos y los niños se quedan en cambio a resguardar las zonas, encargándose de preparar las ollas comunes, de organizar las fogatas y de lanzar el alerta en caso de peligro. En la noche el escenario cambiaba, se escogía un representante (hombre o mujer) por cada unidad habitacional para constituir los equipos encargados de hacer vigiliias en sus respectivas manzanas o en lugares estratégicos, desde donde se organizaba la defensa de zonas más amplias (Montoya y Rojas 2004: 75).

Con la intensificación del conflicto, la organización vecinal se volvió mucho más estricta y capilar. Cada junta empezó a nombrar jefes de manzanas y jefes de calles que estaban encargados de coordinar las actividades con los dirigentes, vigilar sobre el cumplimiento de las acciones de protesta y aplicar las sanciones en caso de necesidad. Como de costumbre, el mecanismo de obligación y sanciones colectivas no era determinado verticalmente, sino horizontalmente mediante un sistema de autorregulación y autocontrol comunal cuya legitimidad descansaba siempre en la autoridad de la asamblea barrial, que era la institución donde se consensuaban colectivamente las acciones a emprender y las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento.

¹⁷ Entrevista a Abraham Delgado, dirigente estudiantil de la UPEA, El Alto 05/09/2008.

“Los vecinos mismos se obligaban a salir a marchar. Las multas se aplicaban pero esto siempre por decisión de la asamblea.....no es como dicen que de afuera nos obligaban”¹⁸.

A lado de las estructuras barriales, también las redes inter-barriales jugaron un papel fundamental en la organización de la acción colectiva. Siguiendo la lógica andina de organización segmentaria y asociación confederativa, los barrios de cada distrito coordinaron sus acciones de forma conjunta. Cada distrito identificó puntos comunes de bloqueos o de control estratégicos, que fueron gestionados de forma conjunta y coordinada entre los distintos barrios.

“Los barrios se articularon entre ellos horizontalmente, siguiendo una lógica de poder absolutamente descentrada en las que todos pueden actuar conjuntamente, todos son políticos, todos son líderes en rotación en el espacio urbano”¹⁹.

Este tipo de relaciones inter-barriales sólo en parte han sido reflejo de las estructuras formales de la FEJUVE, por lo general nacieron de un protagonismo local de las juntas, las cuales fueron tejiendo autónomamente sus formas de cooperación inter-barrial. Una de las características principales de los levantamientos en El Alto fue la total autonomía de las juntas en la organización de la acción colectiva: las estructuras formales de la FEJUVE, al igual que sus dirigentes, fueron totalmente rebasadas por las bases. En un cierto punto del conflicto, las acciones y las medidas a tomar se decidían directamente en las barricadas, en las asambleas de barrio y en los cabildos de zonas, sin pasar por la mediación de la organización matriz.

“Los que marchaban, los que estaban en las barricadas, en los bloqueos determinaban que actitud había que asumir frente a las movilizaciones. Los dirigentes ya no existían. La gente decidía autónomamente”²⁰.

18 Entrevista a **Rosa Paredes**, vecina de Villa Imperial, El Alto 11/09/2008

19 Entrevista a **Pablo Mamani**, intelectual aymara, El Alto 11/11/2008

20 Entrevista a **Abraham Delgado**, dirigente estudiantil de la UPEA, El Alto 05/09/2008.

“Uno de los aspectos más importantes tal vez es la organización de cómo, especialmente del 2003, las juntas vecinales ya no se guiaban de las decisiones de la FEJUVE. Había un momento en que los presidentes del distrito decían: “Pucha, ya nada determinan en la FEJUVE. Para que vamos a hacerle caso”. Un caso inédito también ha sido en el 2005, cuando habían decidido en la FEJUVE, en un ampliado, que querían llevar adelante cuatro aspectos importantes: juicio de responsabilidades, nacionalización, asamblea constituyente, e indemnización. Pero ocurre que, en el 2005, había otro tema importante: estaba por ascender el señor Hormando Vaca Diez. Muchos de los presidentes decían.”Pucha, no dicen nada de la FEJUVE. ¿Qué vamos a hacer?”. Sin embargo, la gente había escuchado la radio y decía: “No vamos a dejar de lado nuestros objetivos aprobados en la FEJUVE, pero hay un objetivo principal en la coyuntura actual que es detener a Hormando Vaca Diez. Si no lo detenemos, todo se va a venir para abajo”. Así empezaron a organizarse autónomamente y esa era una organización de las bases. Los presidentes decían la única forma de organizar es resguardar nuestras calles, armados con palos y piedras y controlar el territorio. Se empieza a hacer como una especie de estado de sitio provisional en todas las zonas. Era algo complicado transitar por la zona, porque te pedían nombrar tu carnet de identidad, cuáles son tus generales, quienes son tus papás, que colegio hay en tu zona y, si tu respondías te dejaban pasar, y si no respondías, no te dejaban. Este tal vez ha sido uno de los momentos de organización más fuerte”²¹.

En breve, los alteños se enfrentaron al estado boliviano, a partir de su capacidad de controlar el espacio urbano y generar en él redes sociales comunitarias y formas autónomas de gobierno local. La existencia de identidades territoriales diferentes a la estatal, construidas a partir de las relaciones barriales e inter-barriales entre los vecinos, se trasformaron en la mejor arma

21 Entrevista colectiva con algunos vecinos y dirigentes de Villa Ingenio (unidad vecinal 1), El Alto 07/10/2008.

para enfrentar al enemigo, en tanto permitieron a los vecinos cercar físicamente los centros del poder estatal y reducir su espacio de acción.

El segundo elemento característico de la acción aymara en los tiempos de insurgencia fue la capacidad de producir eficaces acciones de protesta al interior de un marco de **unidad consensuada**, en el que la fuente de autoridad fue siempre el “nosotros”.

Los espacios donde se construyó esta unidad de pensamiento y acción fueron varios. Al principio de las movilizaciones, las consultas populares se dieron al interior de las estructuras formales de las distintas organizaciones sociales existentes en la ciudad (FEJUVE y COR). Sin embargo, a medida que la tensión social fue subiendo y que los dirigentes de las instancias superiores perdieron autoridad sobre las bases, aumentó el protagonismo local de las juntas vecinales y de las redes inter-barriales: las acciones de protesta empezaron a ser definidas y organizadas localmente a partir de las asambleas barriales e inter-barriales de emergencia, de los ampliados de distrito y de los grandes cabildos, donde se reunía gente de varios barrios. En cada zona de la ciudad (al igual que en los principales puntos de bloqueo) se tenían asambleas diarias durante las cuales se presentaban informes generales sobre el estado del conflicto a nivel local y nacional, se definían conjuntamente las acciones a tomar y se organizaban los métodos de lucha. El principio de delegación como instrumento para la toma de decisiones perdió su validez, las bases empezaron a deliberar de forma directa mediante mecanismos autónomos de consulta.

En este sentido, durante las movilizaciones, se produjo en El Alto una ruptura simbólica muy fuerte con las formas estatales establecidas de ejercicio del poder y con la política tradicional. Cansados de los partidos tradicionales y de los mecanismos de cooptación clientelar y prebental existentes en sus organizaciones matrices, los alteños empezaron a ejercer autónomamente la soberanía social. De esta forma, se produjo una crítica práctica muy importante no sólo hacia las formas de dominación existentes en Bolivia, sino

también hacía el principio liberal de la representación como mecanismo de delegación de poder político y fuente legítima de ejercicio del mismo.

Este sentimiento tuvo distintas manifestaciones. En muchos barrios alteños, después de octubre los dirigentes que no habían respondido bien al mandato de las bases fueron destituidos públicamente por los vecinos, que de esta forma reafirmaron su capacidad y su derecho a mandar colectivamente. En otros, en cambio, los vecinos decidieron externar y formalizar su rechazo hacia las reglas de la democracia liberal, quemando públicamente los símbolos de los partidos tradicionales bolivianos. Esto, por ejemplo, aconteció en Villa Ingenio, donde durante una asamblea barrial los vecinos decidieron conjuntamente que en la zona ya no había espacio para los partidos políticos:

“Después de 2003, han cambiado muchas cosas en la conciencia de la gente. Los partidos políticos ya no son bien vistos. Por ejemplo, en mi zona ya no existen, se decidió en asamblea que los dirigentes deberían obligar a que ya no existieran los partidos tradicionales en la zona. La gente dijo: ‘Aquí ya no se puede ser MNRistas, ADNistas y, para la siguiente asamblea, hagan notar los dirigentes que aquellos que han participado de partidos vengan con sus gorritas, con sus poleras para quemarlas en la asamblea’. Eso fue muy fuerte, pero los dirigentes hicieron cumplir el mandato de la asamblea. En la zona se sabe quiénes han participado en partidos políticos, entonces los dirigentes se acercaban y la decían: ‘Tienes que hacer caso, vas a traer tu polera del MNR y tu bandera, vamos a quemar’. Y así fue. Esa vez, como nunca, se ha acatado lo que ha determinado la asamblea, se quemó todo públicamente y, ahora, ya no hay partido neoliberal en nuestra zona”²².

El rechazo de la política tradicional y de las formas liberales de ejercicio de la política, estuvo relacionado con otro fenómeno social muy importante que tuvo que ver esencialmente con la revitalización y el fortalecimiento de la identidad étnica aymara entre los pobladores de la ciudad. En efecto, si bien

22 Entrevista a Néstor Guillen, dirigente de la junta de vecinos de Villa Ingenio (unidad vecinal 1), El Alto 27/09/2008.

es cierto que las luchas de 2003 no se desarrollaron alrededor de un discurso explícito de autodeterminación indígena (como las que se produjeron en las cercanas provincias del altiplano), es también verdad que el tema étnico estuvo presente de varias formas a lo largo de los levantamientos. Durante las luchas, los alteños reivindicaron en más de un modo su identidad aymara: evocando constantemente las figuras de Tupac Katari y Bartolina Sisa; utilizando la simbología y las armas indígenas (los ponchos, la *wiphala*, los *pututus*, las *k'urawas*); recurriendo constantemente a los métodos de lucha y a las prácticas políticas comunales; y peleando por una nueva constitución y por un nuevo sentido de inclusión. Después de 2003, el ser aymara empezó a adquirir un sentido distinto, ya no de vergüenza y humillación, sino de dignidad y rebeldía:

“Octubre de 2003 es casi todo para El Alto, particularmente es un momento de acumulación y explosión ya de la bronca: son años de lucha, años de resistencia, años de exclusión social. Porque no hay que mirar a El Alto solamente como la ciudad que fue capaz de autoconstruirse; sino también como una ciudad que vivió permanentemente una condición de exclusión social y étnica, y eso genera mucha bronca. Por esto en El Alto había mucho cuestionamiento hacia el gobierno y este sistema de exclusión, este sistema de verticalidades que se ha ido dando en la historia. Octubre era cambiar eso y cambiar todos los estigmas que se pensaban de El Alto: ciudad fría, ciudad pobre, ciudad de chupones, ciudad de indios. Todos estos estigmas se van modificando en 2003. Después de 2003 ya es otra cosa hablar de El Alto (...) o decir que eres alteño. Hay un profundo orgullo de ser aymara e hijos de minero. El Alto ya no es cualquier ciudad es la cuna de la rebeldía”²³.

Frente al olvido y a la sistemática exclusión estatal, los alteños reaccionaron diciendo con orgullo: “somos aymaras, somos campesinos e hijos de mineros”. Esta valoración positiva de sus orígenes, indígenas y proletarios, implicó entre otras cosas el reconocimiento y la apreciación de aquella larga

23 Entrevista a Marco Quispe, radio periodista alteño, El Alto 26/10/2008.

tradición política de lucha y auto-organización comunitaria que caracterizó históricamente a los indígenas aymaras.

Los alteños hicieron visible esta capacidad social, inscrita y cultivada en la historia de la ciudad y de su gente, ocupando físicamente el territorio de la ciudad bajo una lógica comunitaria e imponiendo en la vida política nacional una forma distinta de ejercicio de lo político que logró, por lo menos temporalmente, diluir el poder estatal y poner un freno a la acción del capital trasnacional en el país.

Conclusiones

Los levantamientos de El Alto revelaron la fuerza y la creatividad de los poderes comunitarios urbanos. Hicieron visible aquella capacidad social (que los alteños han guardado y cultivado a lo largo de su historia) de generar al interior de la cotidianidad de la dominación espacios y tiempos sociales alternativos, que se organizan alrededor de una lógica distinta a la del capital y del estado, una lógica centrada en el reconocimiento de lo colectivo y del nosotros como espacio de decisión, deliberación y autodeterminación social.

Durante octubre de 2003, los alteños reactivaron esta capacidad social, se aferraron a ella, para desafiar abiertamente al estado boliviano, rebelarse a su condición de exclusión social (política, economía y cultural) y modificar aquel orden de dominación por el cual se sentían profundamente amenazados. Lucharon cómo sabían hacerlo, cómo aprendieron a hacerlo y cómo lo hacen cotidianamente: haciendo comunidad, reinventando y reactualizando el código político comunitario andino. La fuerza, las potencialidades y las debilidades de esta lucha se fueron revelando a medida que las movilizaciones fueron creciendo. No se llegó a subvertir el orden de dominación existente (por lo menos, no todavía). No se supo cómo hacerlo (quizás, no se pensó realmente en cómo hacerlo). Los hombres y las mujeres alteñas, al igual que los aymaras del campo, se limitaron a renegociar las reglas de una nueva

convivencia social al interior del estado boliviano, abriendo paso a una nueva transformación del mismo (cuyos rasgos todavía no acaban de definirse completamente). Sin embargo, en el marco de este proceso de transformación social, plagado de contradicciones y dificultades, se produjo un cambio significativo en la relación de dominación cultural y política, bajo la cual los poderes comunitarios siguen coexistiendo con los poderes estatales: se vislumbró la posibilidad de invertir esta relación.

Uno de los principales desafíos para la sociedad boliviana contemporánea consiste en no renunciar a explorar esta posibilidad y en producir nuevos horizontes de sentido (prácticos y simbólicos) capaces de proyectar este saber hacer colectivo “más allá del orden instituido”, hasta encontrar el punto de ruptura del sistema de dominación existente.

Bibliografía

ARCHONDO, Rafael

1991 Compadres al micrófono. La resurrección metropolitana del *ayllu*. HISBOL, La Paz.

GILLY, Adolfo

2009 Historias clandestinas. Itaca – La Jornada, México D.F.

GÓMEZ, Luis

2004 El Alto de pie. Una insurrección en Bolivia. Textos rebeldes, La Paz, 2004.

GUTIÉRREZ, Raquel

2008 Los Ritmos del Pachakuti. Textos Rebeldes, La Paz.

HOLLOWAY, John

2006 Contra y más allá del capital. Reflexiones a partir del debate del libro “Cambiar el mundo sin tomar el poder”. UAP/Herramientas Ediciones, Argentina.

HYLTON, Forest (et Al.)

2003 Ya es otro tiempo el presente. Cuatros momentos de insurgencia indígena. Muela del Diablo, La Paz.

LINSALATA, Lucia

2009 El ethos comunal en la política boliviana. Una reflexión acerca de las formas comunales de la política en el mundo aymara contemporáneo. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos para la UMAM, México D.F.

MAMANI, Pablo

2005 Microgobiernos barriales. Levantamiento de la ciudad de El Alto (octubre de 2003). IDIS/UMSA/CADES, El Alto.

MONTOYA Villa, Beimar Josué y Rosa, Rojas García

2004 El despertar de un pueblo oprimido: estructuras de movilización y construcciones discursivas en la ciudad de El Alto, en el mes de Octubre de 2003. CUSO-CISTEM-MUSUX WAYRA, La Paz.

LARUTA, Carlos H.

2006 La conquista de la ciudadanía (Documento de Trabajo). CIPCA, La Paz.

QUISBERT, Máximo

2003 FEJUVE El Alto 1990-1998. Dilemas del clientelismo colectivo en un mercado político en expansión. Aruwiyiri/THOA, La Paz, Bolivia.

RED HABITAT

2000 Diagnóstico del Distrito 5 del Municipio de El Alto. Proyectos RH/ Oxfam GB, El Alto-Bolivia.

SANDOVAL, Godofredo y Sostres, Fernanda

1989 La ciudad prometida. Pobladores y organizaciones sociales en El Alto. ILDIS y SYSTEMA, Bolivia.

TAPIA, Luis

2008 Política Salvaje. Muela del Diablo/CLACSO, La Paz.

TICONA, Esteban (coord.)

2003 Los andes desde los andes. Ediciones Yachaywasi, Bolivia.

ZIBECHI, Raúl

2006 Dispersar el poder. Los movimientos sociales como poderes anti-estatales. Tinta Linón, Buenos Aires.

ZUMARÁN Romero, Raquel B.,

2003 De mineros y vecinos. Prácticas políticas vecinales en El Alto. Tesis de maestría en Ciencias del Desarrollo en el CIDES-UMSA, Bolivia.

Entrevistas

Entrevista a **Abraham Delgado**, dirigente estudiantil de la UPEA, El Alto 05/09/2008

Entrevista a **Doña Candy**, vecina de Villa Imperial, El Alto 12/09/2008

Entrevista a **Doña Cristina**, vecina de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008

Entrevista a **Esteban Ticona**, intelectual aymara, La Paz 15/01/2008

Entrevista a **Gilberto Mayta**, vecino y ex -minero de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008

Entrevista a **Jaime Estrada**, Sub Alcalde del Distrito 5, El Alto 29/09/2008

Entrevista a **Marco Quispe**, radio periodista alteño, El Alto 26/10/2008

Entrevista a **Mónica Paz**, ejecutivo FEJUVE (2003), El Alto 30/11/2008

Entrevista a **Néstor Guillen**, dirigente de la junta de vecinos de Villa Ingenio (unidad vecinal 1), El Alto 27/09/2008

Entrevista a **Pablo Mamani**, intelectual aymara, El Alto 11/11/2008

Entrevista a **Rodolfo Nina**, presidente de la Juntas de Vecinos de Villa Imperial, El Alto 08/09/2008

Entrevista a **Rosa Paredes**, vecina de Villa Imperial, El Alto 11/09/2008

Entrevista a **Rolando Ariquipa** y **Fabián Delgado**, presidente y vicepresidente de la junta de vecinos de Villa Ingenio (unidad vecinal 1), El Alto 05/10/2008

Entrevista colectiva con algunos vecinos y dirigentes de Villa Ingenio (unidad vecinal 1), El Alto 07/10/2008



Las Juntas Vecinales de El Alto entre la institucionalidad y la rebelión

Melina Deledicque* y Daniel Contartese**

Introducción

Bolivia es un país donde alrededor del 80% de su población tiene ascendencia indígena. Por ello la participación de estos fue y es un ingrediente indispensable en los distintos cambios históricos que se sucedieron. La presencia indígena no se limita solamente a las zonas rurales sino que se ha incorporado de manera importante en los espacios urbanos, manteniendo en la mayoría de los casos sus costumbres ancestrales de organización y lucha.



* Estudiante avanzada de la Licenciatura en Sociología, Universidad Nacional de La Plata. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social. Email: melinadele@yahoo.com.ar

** Licenciado en Sociología, Docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Email: contarlari@yahoo.com.ar.

Foto: travel.webshots.com

Esta situación se ve reflejada en las Juntas Vecinales, especialmente en El Alto, punto central de las más importantes rebeliones sociales de este país en los últimos años. Estas organizaciones vecinales, que actualmente tienen un funcionamiento legal e institucionalizado, conservan en un grado importante las prácticas tradicionales, algo que se advirtió claramente en su participación en los distintos levantamientos populares en los que han sido protagonistas.

Justamente en este trabajo intentamos analizar este proceso y como las Juntas han participado en distintas luchas contra el neoliberalismo y la colonialidad del poder.

Una de las características importantes con relación a la participación de los movimientos sociales en los últimos años es que a partir de la crisis del movimiento obrero y de la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación se produjo una territorialización de los movimientos, es decir un arraigo de los mismos en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas abiertas o subterráneas, respondiendo a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda. Las Juntas Vecinales de El Alto son un claro ejemplo de ello (Zibechi, 2006).

Este artículo se basa en un trabajo de campo realizado durante el mes de junio de 2008 en la ciudad de El Alto donde se hicieron observaciones y entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas se realizaron a presidentes de Juntas Vecinales, Comités de Vigilancia, organizaciones de trabajadores, de la Federación de Juntas Vecinales, del Gobierno Municipal y otros informantes claves. Asimismo se realizaron distintas observaciones no participantes en movilizaciones, seminarios, ampliados, reuniones de presidentes de Juntas Vecinales, entre otras.

La ciudad de El Alto

El territorio que ocupa en la actualidad la ciudad de El Alto tiene una importancia central en la historia contemporánea de Bolivia. Desde este

lugar en dos oportunidades se realizaron cercos a la ciudad de La Paz. La primera vez en 1781 dirigidos por Tupac Katari; la segunda, en 1899 en la llamada Guerra Federal. En esta oportunidad El

Alto se convirtió –bajo el liderazgo de Pablo Zárate Willka- en una muralla humana para impedir el paso de las tropas constitucionalistas. Por otra parte, la ciudad de El Alto tiene una importancia geoestratégica fundamental ya que está situada a treinta minutos de La Paz, capital de la República de Bolivia, y es la puerta de entrada o salida hacia el altiplano sur y norte y paso obligado hacia las Yungas (donde hay producción de coca y frutas) y la amazonia.

El desarrollo de la ciudad comienza en la década del 30 cuando se instalan los primeros pobladores, pero es en la década del 50 cuando comienza un crecimiento vertiginoso alimentado por dos grandes procesos migratorios.

El primero ocurrió entre 1956 y 1976 debido a que la Reforma Agraria de 1953 impuso un sistema de minifundios que empequeñeció las parcelas de las unidades productivas familiares. En ese período la población de El Alto se multiplicó quince veces, alcanzando los 95.000 habitantes. Este proceso fue protagonizado especialmente por los campesinos aymaras y quechuas pero también por el desborde de la población más pobre de La Paz que no podía acceder allí a una vivienda (obreros, maestros, empleados) (Puente y Longa, 2007).

En 1985 comenzó la segunda ola migratoria con la implementación del modelo neoliberal: miles de mineros fueron separados de su fuente de trabajo y migran orientándose hacia los sectores del comercio y del transporte. También muchos se trasladan por las sequías que se produjeron en 1982 a causa del fenómeno de El Niño (Arbona, 2002).

La tasa de crecimiento de la población de El Alto es del 6,4% anual, una de las más altas del mundo. Además esta ciudad tiene la mayor densidad de población de todas las secciones de provincia de Bolivia: 1920 habitantes

por kilómetro cuadrado, según el Censo de 2001. La migración acelerada y desordenada provocó innumerables problemas de infraestructura: hay problemas con la energía eléctrica, el agua y los servicios más esenciales (Mamani Ramírez, 2005.a). El crecimiento de esta población provocó que en 1988 obtuviera el rango de ciudad independizándose de La Paz en el aspecto político. Es importante señalar que en primer lugar el Parlamento Nacional votó la ley de creación de la cuarta sección municipal y luego se elevó a El Alto al grado de ciudad. Ambas conquistas fueron logradas gracias a gigantescas movilizaciones y paros cívicos contundentes.

La población de esta ciudad tiene características particulares: el 81,29% de la población alteña se identifica como indígena y el 74% se identifica específicamente como aymara. Por otro lado, es una población muy joven: el 60% son menores de 25 años y sólo un 10% tiene más de 50 años de edad (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2001).

En una dimensión identitaria urbana, la relación de El Alto con la ciudad de La Paz y tras ciudades manifiesta situaciones de “racismo latente e indiscriminado”, cuyas imágenes van naturalizando y perpetuando las diferencias sociales al establecer fronteras como fundamento de las prácticas sociales. Es decir, que la relación entre los alteños y los paceños está determinada por la alta tensión que refleja la discriminación étnica y la diferencia económica. Los primeros “son vistos como personas peligrosas, como delinquentes” (Arbona, 2002 y Revilla Herrero, 2006).

Como señala Arbona (2005) “El Alto es prácticamente un emblema de la exclusión racial y económica en Bolivia”. En efecto, la pobreza urbana en el departamento de La Paz afecta al 50,9% de los habitantes y una gran proporción de estos se concentran en El Alto. En El Alto se encuentran los mayores índices de trabajo infantil y el promedio más alto de personas ocupadas por hogar. Según el Censo Nacional de Población 2001, el 83,4% de los hogares está por debajo de la línea de pobreza y la mitad de éstos últimos en la indigencia.

El Ajuste Neoliberal en Bolivia

En 1982 con la recuperación de la democracia en Bolivia se establecieron dos rasgos principales que iban a signar el futuro del país hasta principios del siglo XXI. Por un lado, la democracia formal y por otro, la economía de mercado. En este país, como en el resto de América por esos años, se llevó adelante un ajuste neoliberal, en este caso mediante la aplicación ortodoxa de las políticas del Consenso de Washington que privilegiaron la estabilidad de precios y los intereses del capital antes que el bienestar de la población (Arze Arce, 2005). Debido a ello se agudizó la desigualdad, aumentando la intensidad de los niveles de pobreza. Bajo esta nueva política económica, la protección de la fuerza de trabajo, el nivel de empleo y el nivel salarial fueron reemplazados por un uso flexible de la capacidad de trabajo, eliminando derechos sociales y laborales a favor de la recomposición de la tasa de ganancia y la acumulación del capital (Escóbar de Pabón, 2005).

Una vez recuperada la democracia, el gobierno de la Unión Democrática y Popular (UDP) bajo la presidencia de Siles Zuazo no logró éxitos en términos de gobernabilidad.

Durante su gobierno, que duró hasta 1985, se produjeron una gran cantidad de protestas y conflictos, un bloqueo parlamentario de las iniciativas del ejecutivo y la más alta inflación en la historia del país (Vargas y Córdova, 2004).

El rápido desprestigio de la UDP amenazó la misma continuidad del régimen democrático y la salida fue el adelanto de las elecciones presidenciales. En 1985 las elecciones dieron la victoria a Banzer de la Acción Democrática Nacionalista (ADN) pero secundado muy de cerca por Paz Estenssoro del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); entre ambos alcanzaban el 52% de los votos. Como la diferencia era muy pequeña y Paz Estenssoro contaba con mayoría parlamentaria, por un acuerdo, este último asumió la presidencia.

Este gobierno contó con un importante apoyo de los empresarios. Esto se debió a que los nexos entre la ADN y la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia eran fluidos desde la fundación del partido, al punto que podría decirse que la ADN es, en realidad, el partido de los empresarios en Bolivia (Palermo, 1990).

El gobierno de Paz Estenssoro llevó adelante la implementación de la Nueva Política Económica (NPE) cuyos ejes centrales fueron los siguientes: la eliminación de subvenciones estatales, el despido masivo de trabajadores (en especial del sector minero), la privatización de las principales empresas estatales, la reorganización del Banco Central y la reforma del sistema de pensiones.

El programa de ese gobierno tiene fundamental importancia para comprender lo que sucedería a partir del año 2000. Éste fue presentado como un plan político dirigido a reestablecer la autoridad del Estado sobre la sociedad.

Por ello su primer objetivo fue eliminar el poder social de los sindicatos. La estrategia de confrontación abierta con las organizaciones obreras tuvo mucho éxito, liquidando en la práctica los recursos tradicionales de poder del sindicalismo boliviano. Esto se pudo lograr gracias a que el mismo fue sometido a un nivel de aislamiento social sin precedentes. De allí que la NPE neoliberal deba ser vista ante todo como un momento de refundación de la autoridad del Estado.

La primera consecuencia de ello fue la rápida estabilización de la economía con una reducción del déficit fiscal –que pasó del 27,4% del PBI en 1984 al 2,7% en 1986- y una baja en la inflación del 15000% al 11% en dos años (Ibáñez Rojo, 1993). Pero tras el éxito inicial de la estabilización, el modelo económico se mostró absolutamente ineficaz para superar el persistente estancamiento de la economía y esto produjo un empeoramiento en las condiciones sociales de la población. En efecto, a partir de la aplicación de estas políticas el desempeño del mercado de trabajo y el empleo fueron negativos lo que provocó la expansión sin precedentes del nivel de desocupación (que alcanzó el 13% de la PEA). Las características generales de esa situación pueden ser

descritas de la siguiente manera: insuficiencia en la generación de empleos en el sector privado de la economía, baja calidad de los nuevos empleos, deterioro de los salarios reales que nunca recuperaron los niveles previos a la crisis de la década del ochenta, y aumento del empleo bajo contrato civil en sustitución del contrato laboral. Este proceso provocó un fuerte crecimiento de la ocupación en el sector informal y en las actividades terciarias caracterizadas por la baja productividad. En definitiva, se produjo una amplia difusión del trabajo precario.

Las Juntas Vecinales

La cultura política de El Alto está personificada principalmente por dos entidades: los partidos políticos y las llamadas Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), como se denomina formalmente a las Juntas Vecinales. Ambos grupos de instituciones definen los espacios y las formas en que los alteños se relacionan con la política. Representan dos circuitos entretejidos e interdependientes de poder que establecen cómo los bienes canalizados a través del gobierno municipal se distribuyen, es decir, quiénes se favorecen de los recursos limitados administrados por el gobierno local.

La ciudad es un espacio rico en experiencias de organización social: las juntas vecinales, las organizaciones de trabajadores asalariados, los gremiales, las asociaciones de pequeños empresarios, grupos culturales, estudiantes, etc. Es un espacio urbano complejo y dinámico donde se presenta un proceso de producción de la vida social urbana indígena-popular relacionada con las propias estructuras internas de las organizaciones barriales, las experiencias de la vida cotidiana y los sistemas de interrelacionamiento barrial. Como señala Albó (2006) “prácticamente no hay sector alteño cuyos vecinos no formen parte de alguna asociación de vecinos, aunque después participen poco en sus reuniones”. Esto se encuentra relacionado con la herencia cultural rural.

De esa manera la ciudad se va organizando desde sus viviendas, pasando por los jefes o jefas de calle o de manzana, por la junta de cada zona y

barrio, hasta la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto. La intervención de las Juntas en el barrio es muy importante. Así, como sucede en el área rural, la participación en asambleas cuenta como unidad doméstica y no como persona. Es decir que cada vivienda debe estar representada por una persona.

Con relación a la participación de la población, existen dos tipos de reuniones barriales, las que tienen lugar según fechas regulares y las que se convocan con carácter de urgencia. En las primeras se tratan temas relacionados con infraestructura, equipamiento o servicios para el barrio, la elección de la comisión directiva o delegados a los congresos de la FEJUVE, etc. En cambio, las segundas se convocan para resolver algún conflicto barrial o para intervenir en un conflicto más amplio, departamental o nacional (Flores Vásquez y otros, 2006).

Las Juntas Vecinales nacen en la década del 50 y tienen una larga historia pero es la Ley 1551 de Participación Popular (LPP) de 1994 la que legaliza su funcionamiento. Estas se constituyen como Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) con funcionamiento autónomo del Estado y son autosostenidas. En El Alto se distribuyen en los distritos de la región más populosa y combativa de Bolivia.

Los aspectos centrales de la LPP son (Regalsky, 2005; Pérez Mamerito, 2006): define una nueva jurisdicción territorial de los municipios, ampliándola a todo el ámbito de las secciones de provincia, articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país; otorga a las alcaldías el 20% de los ingresos del tesoro nacional en calidad de coparticipación tributaria en los impuestos internos, de los cuales el 90% debe ser utilizado en inversión y no puede usarse en gastos corrientes; reconoce la personería jurídica de las OTBs, que deben elegir un representante por cada distrito o cantón para conformar un Comité de Vigilancia ante el municipio; transfiere al gobierno local la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, etc., con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla; fortalece la democracia participativa,

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades.

El sentido práctico de esta ley fue fortalecer el Estado local intentando neutralizar el mini-Estado paralelo de las comunidades indígenas. Por ello las entidades campesinas vieron en la misma un intento de minar a sus organizaciones y comunidades en sus formas propias de organización y de control del espacio, es decir, un intento por socavar su autonomía. Si bien los movimientos indígenas se opusieron de manera activa a la ley, fracasaron, pese a que la convocatoria a bloqueos fue acatada por buena parte de las comunidades campesinas, sobre todo en la región cordillerana quechua.

Con la LPP se rompe, por primera vez, con el esquema comunitario de control colectivo sustentado en la rotación de autoridades, donde no rige la lógica de la ganancia a la hora de ocupar cargos públicos y donde no es la riqueza económica lo que lleva a obtener réditos políticos.

Según Patzi Paco (2006) con el paulatino desmantelamiento del antiguo sistema de autorregulación comunal aparecen las elites rurales que ahora se van a dedicar a la política, trasladando a lo local la lógica de ganancia del sistema liberal, que sustituye la lógica del servicio. Es decir que a partir de la aplicación de la LPP convertirse en administrador público se presenta –cada vez más– como una oportunidad de enriquecimiento y no como un servicio.

Sin embargo, la ley no detuvo el desarrollo de las organizaciones de base. En 1988 El Alto contaba ya con 180 Juntas Vecinales, alrededor de una cada dos mil habitantes; en 2004 esta cantidad ascendía a 540 Juntas, con una densidad de una cada 1.350 habitantes. En la actualidad alcanza a 590 Juntas.

Las luchas contra el ajuste neoliberal

Para Regalsky (2006) la situación que atraviesa Bolivia desde el año 2000 es el resultado de un entramado de procesos, de los cuales pueden citarse tres principales: la emergencia de los pueblos indígenas, sus organizaciones y su lucha por territorios y autonomía desde los años 80; la organización

-desde 1995- del instrumento político de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que luego deriva en el MAS, hasta el triunfo en las elecciones de diciembre de 2005; y, un proceso más general referido a la territorialización de los movimientos sociales. A esto es necesario agregar, como señala Oliver (2007/2008), “la descreencia en las promesas del neoliberalismo”.

En el 2000 frente a la percepción del triunfo de la imposición de las políticas económicas liberales, el país “estalla”. Uno de los principales protagonistas de esta sublevación fue el movimiento aymará que realiza su movilización a partir de bloqueos de caminos. Esta es una técnica de lucha que consiste en ocupar los territorios mediante la movilización de las redes comunitarias. En el 2000 –por primera vez en muchos años- los pueblos originarios pusieron en jaque al gobierno paralizando la parte occidental del país. Ese año comenzó la rebelión del pueblo boliviano con sucesivos levantamientos –que tomaron el nombre de “guerras”- contra la dominación neoliberal en un Estado que no había perdido su matriz colonial. Así es que se fueron sucediendo: la guerra contra la

privatización del agua en Cochabamba en el año 2000, la guerra en defensa de los plantíos de coca en el Chapare contra el ejército y la policía en enero de 2003 (con un saldo de más de 30 muertos), la guerra del gas en septiembre y octubre de 2003 (con más de 80 muertos), que finaliza con la toma indígena de La Paz y la caída del gobierno nacional, y la segunda guerra del agua en El Alto (Gilly, 2004). Estas dos últimas tuvieron al pueblo de El Alto y sus Juntas Vecinales como uno de sus principales protagonistas. En el período 2000/2003 una red de activistas sociales, independientes o ligados a organizaciones comunitarias y corporativas, se movilizó de manera permanente difundiendo información destinada a reforzar la crítica hacia la manera discriminatoria y elitista con que los distintos gobiernos habían encarado la gestión de los recursos naturales. En 2003 este trabajo más invisible, junto con la labor de los líderes opositores y la memoria histórica del despojo marítimo, hizo que la negativa a la exportación de gas por y a Chile, se transformara en una eficaz consigna movilizadora. El levantamiento se inició el 8

de octubre de 2003 exigiendo la no venta del gas por puertos chilenos, pero luego a esto se sumó el pedido de modificación de la Ley de hidrocarburos y la oposición al ingreso al ALCA, finalizando en la exigencia de renuncia del presidente Sánchez de Losada y la nacionalización del petróleo.

En octubre de 2003 surgió un movimiento urbano multiforme que expresó el gigantesco escontento social. Un rasgo de esa movilización fue el ataque a todos los símbolos y sedes del poder. El gobierno y el propio Estado desaparecieron de la ciudad de El Alto durante los días de la rebelión popular. La situación se agravó cuando se produjo el cerco de La Paz, reeditando en el imaginario popular la epopeya de Tupac Katari. La ciudad quedó completamente desabastecida; inclusive los organismos de represión carecían de combustible para su movilidad. La Paz quedó bajo el cerco aymara, el cierre de caminos y la huelga general, donde no se permitía la entrada a la ciudad de alimentos ni mercancías ni combustible. Mientras tanto desde el sur, cerraron el cerco y avanzaron sobre la ciudad las comunidades de los valles (los comuneros de Ovejunos).

Para romper el cerco, hacer un escarmiento y permitir el ingreso de mercaderías y combustible, el día 12 de octubre el gobierno nacional decidió la represión militar a las masivas manifestaciones de El Alto provocando decenas de muertos. Esto repercutió en todo el país, donde se multiplicaron las manifestaciones, y provocó la ruptura del frente gubernamental. Finalmente el alzamiento popular triunfa al provocar la caída del presidente Sánchez de Losada. No cabe duda que desde el poder no se veía otra posibilidad que la represión, ya que la ciudad de El Alto se encontraba asombrosamente organizada, con bloqueos de calles y avenidas, juntas vecinales en cada manzana, vigiliadas voluntarias en las esquinas, barricadas, radios independientes transmitiendo las 24 horas, guardias populares para evitar saqueos a los negocios, asambleas en las calles, en los locales sindicales y las parroquias (Gilly, 2004).

En estas movilizaciones fueron las juntas de vecinos y no las organizaciones tradicionales las que articularon el movimiento. Por eso el ejército tuvo que lanzarse contra todos, sin poder ir a buscar las inexistentes cabezas del movimiento.

Luego de la caída de Sánchez de Losada, el rechazo y la deslegitimación se trasladó a todos los partidos políticos tradicionales. El escenario parlamentario se convirtió en el epicentro de los conflictos y la irritación social debido a que desde el mismo se intentaba reconfigurar el poder de estos partidos. Esto provocó un sentimiento de insuficiencia e inconclusión del proceso por parte de los movimientos sociales, dando lugar a un nuevo ciclo de movilizaciones durante mayo y junio de 2005 que volvió a instalar el bloqueo de La Paz, al cual se sumó el bloqueo de Santa Cruz de la Sierra. Este proceso finalizó con la renuncia de Carlos Mesa (vicepresidente que había asumido en el 2003) y desembocó en una nueva sucesión presidencial, la de Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien la 1ra Guerra del Agua (2000, en Cochabamba) fue el punto de partida de un nuevo ciclo en las luchas populares constituyéndose en la primera gran victoria frente al neoliberalismo, pocos años después se desataría la 2da Guerra del Agua (a fines de 2004) con la participación privilegiada y fundamental de las Juntas Vecinales alteñas. A comienzos de 2005 la 2da Guerra del Agua entró en su etapa de definición. El 10 de enero de 2005 se iniciaba el embate final de la FEJUVE El Alto exigiendo la salida de Aguas del Illimani (concesionaria de la provisión de agua) de la ciudad. Para ello convocó a un paro por tiempo indefinido, que incluía bloqueos y demostraciones pacíficas. El 13 de ese mes los alteños festejaron la expulsión de la empresa.

En esta segunda Guerra del Agua, el paro en la ciudad de El Alto fue total, utilizando nuevamente el sistema de participación vecinal y aplicando formas de justicia comunitaria para los que no se involucraban. En este proceso la FEJUVE cuenta con una importante legitimidad como representante de los sectores populares, principalmente por su autonomía frente a los partidos políticos y la estructura clientelística (Crespo Flores, 2005).

En ambos conflictos El Alto dio un nuevo impulso a los movimientos sociales, fragmentados y neutralizados por las instituciones políticas. Esto se puede advertir en la capacidad para introducir el tema del agua dentro de la

agenda de la futura Asamblea Constituyente como tema estratégico prioritario frente a las propuestas privatistas y mercantilistas.

Juntas Vecinales como microgobiernos barriales

Las Juntas Vecinales cuentan con una larga historia en Bolivia y a partir de la Ley de Participación Popular se las ha intentado institucionalizar.

Decimos que ha habido intentos de institucionalizarlas porque si bien por un lado esta ley les da un reconocimiento a la hora de tomar decisiones con respecto a una parte de los recursos que las Alcaldías tienen para realizar obras, por otro lado se convierten en organizaciones autónomas en los momentos más álgidos de la lucha, como pudo advertirse en octubre de 2003 durante la llamada Guerra del Gas.

En los levantamientos las Juntas Vecinales se estructuran como organizaciones locales que se movilizan como cuerpos políticos alternativos al orden dominante, superando incluso a la propia FEJUVE de El Alto y a la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, quienes representan a la población en tiempos “normales”. En momentos de vacío de poder, son las Juntas Vecinales las que ocupan ese lugar.

En los momentos de lucha en cada barrio se erigen microgobiernos barriales en los que se toman decisiones políticas. Como señalamos anteriormente, en la ciudad de El Alto se congregan más de 500 juntas vecinales. De todas ellas en los sucesos ocurridos en el año 2003, con la Guerra del Gas, se han articulado unas cuatrocientas juntas vecinales como microgobiernos barriales organizados en comités de movilización. Esto fue así porque cada barrio había organizado sistemas de acción y control y toma de decisiones autónomas sin perder de vista la demanda común que era la no exportación del gas por puertos chilenos—entre otras demandas— (Mamani Ramírez, 2005). La movilización fue organizada, en primer lugar, por las Juntas Vecinales en coordinación con otras organizaciones locales. En las asambleas que se realizaron se decidió bloquear las avenidas y calles de entrada a los barrios,

la realización de vigiliadas en los puntos de bloqueo centrales, y marchas en el entorno barrial (Flores Vásquez y otros, 2006)

Desde el interior de la ciudad estos hombres y mujeres crean poderes difusos, intermitentes, alternos y mortíferos hacia fuera, especialmente para el gobierno. Cada milímetro de la ciudad es parte de este escenario. De esta manera la ciudad de El Alto se convirtió –en ese momento– en una ciudad minada para el movimiento y la legitimidad del Estado. Éste deja de existir por el vaciamiento de su legitimidad, siendo disuelto de facto.

Este vacío de poder es rápidamente rellenado por estos mecanismos de acción colectiva son actos contundentes.

Es en este espacio-territorio se conforman comités de vigilia, grupos de control y seguridad de los movilizados. Cada miembro de la familia es parte de esta estructura de organización y movilización social. Unos cuidan las casas, los otros están en las calles, el resto cocina y los que tienen medicina la llevan para curar a los heridos. Por esto las juntas barriales se transforman en una multitud hecha cuerpo político que tiene la capacidad de traspasar fácilmente las fronteras del poder constituido y las fronteras de la tolerancia social. Bajo estas condiciones se legitiman los microgobiernos barriales. Primero, por la contundencia de su acción y organización colectiva. Segundo, porque son el referente de la seguridad de la vida social de los barrios (Mamani Ramírez, 2005).

A partir de la decadencia de los formatos tradicionales de organización y la inadecuación de los partidos políticos y los sindicatos comienzan a surgir nuevas formas de protesta social (Oliver, 2007/8). Las Juntas Vecinales empiezan a ser preponderantes en Bolivia junto a otros movimientos sociales. Por ejemplo, ellas transforman las formas de lucha incorporando a los paros y las huelgas, las marchas que buscan la autoafirmación del colectivo (pueblo, comunidad, etc.), los levantamientos que nacen en los barrios autoconstruidos, los bloqueos de rutas, etc. El bloqueo aymara es una alfombra de piedras, es una tecnología propia que no necesita la presencia humana, las comunidades se van turnando, aparecen y desaparecen y entorpecen el tránsito sin necesidad de poner el cuerpo.

También cambian las formas de organización: deja de existir una separación entre vida cotidiana y “organización”. Siguiendo las tradiciones del movimiento indígena en las Juntas Vecinales hay una baja división del trabajo. Se replican las formas ancestrales de la comunidad como el turno o la rotación, la reciprocidad, y la asamblea que pasan a formar parte del arsenal de las formas de lucha.

La LPP: autonomía y “normalización conflictiva”

Como ya señalamos, la Ley de Participación Popular ha creado mecanismos que modifican las relaciones entre las Juntas Vecinales y el gobierno municipal de El Alto cambiando los márgenes de la autonomía de las primeras. Con esta Ley se amplió la participación política local canalizada institucionalmente.

Kohl y Farthing (2007) señalan que la LPP pretendió canalizar la oposición política, tradicionalmente ingobernable a escala local, a fin de contenerla dentro de límites establecidos. Por su parte Espósito y otros (2006) indican que la LPP permite al Estado, a través del diseño de instrumentos artificiales, definir los procedimientos para la participación: sujetos, momentos, funciones, formas de presentar reclamos y ejercer el control social. Estos instrumentos niegan la tradición colectivista de la historia de la participación social en Bolivia, oponiéndole un modelo en el que el individuo sustituye al actor colectivo.

Además, crea un sistema de participación altamente restringido centrado en los espacios locales limitando a las organizaciones sociales su capacidad de incidir en otros niveles estatales.

Según algunos de los entrevistados, las distintas gestiones municipales han intentado cooptar, y a veces lo han logrado, a los representantes elegidos al Comité de Vigilancia (CV). Al no existir un control efectivo, el dinero puede ser utilizado muchas veces de manera corrupta. Por otra parte, el CV se ha vuelto también un ente que aplaca la reacción social, desmovilizando a

la población. Sin embargo, en las entrevistas también se pone de manifiesto que la construcción de la autonomía es un proceso contradictorio.

La reforma institucional al crear nuevos canales de participación y decisión, da nuevos grados de autonomía pues permite a las Juntas Vecinales decidir directamente sobre cuestiones y problemas respecto a los cuales carecían de injerencia directa.

Las Juntas ganan poder para decidir sobre las obras que se realizarán en su zona, pero simultáneamente enfrentan la tendencia a la desmovilización impulsada por la institucionalización. Se plantea lo que denominamos “normalización conflictiva” (Dinerstein y otros, 2007).

Hay un reconocimiento político de las Juntas Vecinales pero ello no elimina el conflicto sino que genera nuevas tensiones entre estas organizaciones y el Estado. Esta integración” en el Estado no implica su despolitización ya que la institucionalización no puede tener lugar sin el reconocimiento político de los proyectos alternativos y la búsqueda de autonomía de las OTBs.

A pesar del peso de la institucionalización, la creación de la figura de subcalde elegido por las Juntas Vecinales ha sido un avance que supera la propia Ley. Es a comienzos de 2005 después de diversas medidas de lucha, que los vecinos de El Alto consiguieron imponer que los subalcaldes de los distritos fueran elegidos en un ampliado (asamblea) de las Juntas. Es decir, que se logró que los subalcaldes fueran elegidos en una instancia asamblearia de las Juntas Vecinales, quitándole esa potestad al alcalde. Esta situación, de todas maneras, no es ideal pues operan sistemáticamente mecanismos de cooptación de los referentes de las Juntas Vecinales.

La figura del subcalde crea un espacio para una doble y contradictoria representación. Todos los subalcaldes son a su vez presidentes de Juntas Vecinales, de manera que deben actuar como representantes de su zona (presidentes de Junta) y como funcionarios municipales (subalcaldes) con una esfera de intervención en todo el distrito. Además de la figura del subcalde como espacio de doble representación, hay algunos presidentes de Juntas que se desempeñan en otros cargos públicos.

La dimensión autonómica de las Juntas se manifiesta más claramente en la pervivencia de las distintas instancias asamblearias y se cristaliza en la práctica de la “política de las necesidades vitales” (Cabezas, 2007).

Ya sea por una participación concreta en la decisión de qué demandas serán satisfechas o en la autogestión de emprendimientos comunitarios, los vecinos de las distintas Juntas vecinales de El Alto llevan adelante una particular política de autodeterminación con sus límites y potencialidades.

Las Juntas Vecinales y su “política de necesidades vitales”

Thompson (1995) propone que las respuestas de la población frente a los agravios operan dentro de un consenso popular en cuanto a qué prácticas son legítimas y cuáles ilegítimas. Esto a su vez se basa en una visión tradicional consecuente de las normas y obligaciones sociales, de las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad. Estas normas, tomadas en conjunto, constituirían una suerte de “economía moral de los pobres”. Ese en ese marco que un atropello a estos supuestos morales, tanto como la privación o agravio en sí mismo, constituiría la ocasión habitual para la acción directa.

Como ya señalamos la actividad principal que llevan adelante las Juntas Vecinales se plasma en lo que podría denominarse una “política de las necesidades vitales”. Esto significa que ante la privación o falta de servicios básicos, los vecinos se organizan e interpelan al Estado para que satisfaga sus demandas. En algunos casos ante la inexistente respuesta por parte del Estado o de empresas privadas, se autogestionan la provisión de distintos servicios como el agua, alcantarillado, educación, etc. La resolución de las necesidades vitales como iniciativa comunitaria de las Juntas Vecinales tiene que ver con su cotidianeidad.

Ahora bien, tal cual lo propone Thompson (1995), en algunas circunstancias particulares la motivación de las acciones colectivas que realizan los

miembros de las Juntas tienen que ver fundamentalmente con una respuesta a lo que interpretan como agravios que violentan lo que consideran derechos o costumbres tradicionales. Tal fue el caso de la lucha contra la imposición del formulario Maya y Paya. La guerra del gas y la segunda guerra del agua también constituyeron claros acontecimientos donde se intentó vulnerar derechos, se visualizó el “agravio” y, por consiguiente, se realizaron medidas de lucha.

Reflexiones finales

El proceso boliviano en los últimos años está atravesado por la disputa por el creciente intento de saqueo capitalista (imperialista) de las riquezas naturales o bienes comunes.

Este saqueo implica la apropiación privada, en general en manos de multinacionales, de esas riquezas para convertirlas en recursos naturales, es decir en valor susceptible de ser su vez valorizable.

El avance durante los años ochenta y noventa de las multinacionales sobre la propiedad y usufructo de esas riquezas ha teñido la mayoría de los conflictos sociales en Bolivia. El embate sobre las tierras comunitarias, los desplazamientos de población, la apropiación privada de lo común, son todas modalidades de lo que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005), nueva modalidad del imperialismo. Este proceso reproduce de manera ampliada y recurrente lo que Marx denominó “acumulación primitiva u originaria” de capital y expresa que las poblaciones están siendo desposeídas de aquello que les pertenecía colectivamente. A través de nuevos procesos privatizadores, se les está despojando de lo que era propiedad común, comunitaria o pública.

Las Guerra del Gas y del Agua (tanto en Cochabamba como en El Alto) instalaron la discusión a nivel nacional sobre las formas de propiedad y uso de los recursos vitales e iniciaron la construcción de un nuevo polo popular.

Los procesos de privatización de empresas estratégicas, iniciados en 1993, han significado para la economía nacional un empobrecimiento del

Estado, no han generado los empleos prometidos y si provocaron una pérdida de soberanía – en especial en el control sobre las riquezas naturales- y un aumento en el costo de ciertos bienes y servicios básicos.

De allí que la acción colectiva llevada adelante por las Juntas Vecinales y otras organizaciones sociales de El Alto esta íntimamente relacionada con la lucha contra la privatización de los servicios básicos y la emergencia de una nueva generación de derechos humanos como el derecho al agua (Cabezas, 2007). Estos nuevos derechos forman parte –en realidad- de la economía moral de los pobladores de El Alto, con un fundamento en el derecho consuetudinario (basado en usos y costumbres), en una particular cosmovisión sobre la relación entre los bienes comunes y los seres humanos, –consecuentemente- en una forma específica de entender la gestión de lo colectivo.

El 2003 es un punto de quiebre en El Alto, un hito en el ciclo rebelde iniciado en el 2000 no sólo por saldarse con la huida de un presidente del país sino porque también implicó la consolidación de una agenda nacional de cambios estructurales propuesta desde los movimientos sociales, la “agenda de octubre”.

Las Juntas Vecinales pasaron de la institucionalización impuesta por políticas que intentaban cooptar y debilitar su participación, a luchas de resistencia, para finalizar como “movilizaciones sociales de quiebre y reformas al modelo desde abajo” que frenaron y modificaron decisiones gubernamentales (Espósito y otros, 2006). En este sentido es que hablamos de normalización conflictiva pues esa relación que establecen las Juntas Vecinales con el Estado se encuentra en permanente tensión. Por un lado, las JV ganan en poder de decisión en cuanto a la gestión de recursos del Estado municipal y de alguna manera- son normalizadas e integradas. Por otra parte, sin embargo, no son completamente absorbidas por la estructura estatal y mantienen su poder de confrontación y autonomía (Dinerstein y otros, 2007: 67), el cual se manifiesta más visiblemente en los momentos de las “guerras”.

A su vez, como plantean Kohl y Farthing (2007) en relación a los efectos de la Ley de Participación Popular, el proceso de “democratización” que

allí se inició incluyó dos tendencias potencialmente contradictorias que se advierten en las rebeliones de El Alto. Los esfuerzos por descentralizar las funciones de gobierno no sólo no transfieren competencia a los gobiernos municipales, sino que también fragmentan la oposición potencial a los recortes en los servicios públicos. Al mismo tiempo, los programas de descentralización pueden volver a los ciudadanos más conscientes de sus derechos y crear nuevas oportunidades para el surgimiento de luchas de los movimientos sociales que pueden alcanzar el nivel nacional.

El problema es advertir cómo estos movimientos locales pueden articularse con otros de manera nacional para encontrar una salida democrática a los problemas acuciantes de las clases más postergadas de Bolivia.

Bibliografía

ALBÓ, Xavier (2006)

“El Alto, la vorágine de una ciudad única”, *Journal of Latin American Anthropology*, Vol. 11, N° 2, págs. 329-350.

ARBONA, Juan Manuel (2002),

“Ver y hacer política en la ciudad de El Alto. Capacidades políticas y actividades económicas”, *Cuadernos de Trabajo, Bolivia, PNUD*. Arbona, Juan Manuel (2005), “Los límites de los márgenes. Organizaciones políticas locales y las Jornadas de Octubre de 2003 en El Alto, Bolivia”, *Nueva Sociedad*, 197, pp. 6-15, Venezuela.

ARZE Arce, Gonzalo Horacio (2005)

“Los movimientos sociales en la refundación de la democracia en Bolivia”, *Revista América Latina*, Santiago de Chile, Universidad Arcis.

CABEZAS, Marta (2007)

“Caracterización del ciclo rebelde 2000- 2005”, en Iglesias Turrión, Pablo y Espasandín Lopez, Jesús (coords.), *Bolivia en movimiento. Acción colectiva y poder político*, España, Ediciones de Intervención Cultural/El Viejo Topo.

CRESPO Flores, Carlos (2005)

“Los factores para la expulsión de Aguas de Illimani de las ciudades de La Paz y El Alto”, *Observatorio Conflictos y Movimientos Sociales*, Cochabamba, CESU-UMSS/OXFAM GB.

DINERSTEIN, Ana Cecilia, Deledicque, L. Melina y Contartese, Daniel (2007)

“La impronta de las organizaciones de trabajadores desocupados en Argentina. Una evaluación de su innovación organizacional e incidencia en la recomposición del

tejido social y el cambio institucional y de políticas”, Documento de Difusión y Reflexión preparado para el Seminario Debate: Reflexiones sobre una trayectoria: El Movimiento de Trabajadores Desocupados en Argentina a diez años de su emergencia, Agosto.

ESCÓBAR de Pabón, Silvia (2005),

“Globalización, trabajo y pobreza. El caso de Bolivia”, en Alvarez Leguizamón, Sonia (comp.), Trabajo y producción de la pobreza en Latinoamérica y el Caribe: Estructura, discursos y actores, Buenos Aires, CLACSO.

ESPÓSITO Guevara, Carla y Arteaga Aguilar, Walter (2006)

“Movimientos sociales urbano-populares en Bolivia: na lucha contra la exclusión social, económica y política”, mayo, La Paz (Bolivia), UNITAS / Programa Desarrollo del Poder Local.

FLORES Vásquez, J., Herbas Cuevas, I.H. y Huanca, F. (2006)

“Participación política de mujeres alteñas en las acciones colectivas y en la vida cotidiana”, Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) (<http://www.pieb.org/imaginario/proyecto.html>; 17/11/2008)

GARCÍA Linera, Álvaro (2006)

“Los movimientos indígenas en Bolivia”, en Ezcarza F. y Gutiérrez, R. (coordinadoras), Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Bolivia, Gobierno Federal/Casa Juan Pablos, BUAP, UNAM y UACM.

GILLY, Adolfo (2004)

“Bolivia: Una revolución del siglo XXI”, Cuadernos del Sur, N° 37, Buenos Aires.

HARVEY, David (2005)

“El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión”, Panitch, Leo y Leys, Colin (eds.), El nuevo desafío imperial– Socialist Register 2004, pp. 99-129, Buenos Aires, CLACSO.

IBÁÑEZ Rojo, Enrique (1993)

“¿Democracia neoliberal en Bolivia? Sindicalismo, crisis social y estabilidad”, Revista del EIAL, N°2, v.4.

KOHL, Benjamín y Farthing, Linda (2007)

El bumerán boliviano. Hegemonía neoliberal y resistencia social, La Paz (Bolivia), Plural Editores.

MAMANI Ramirez, Pablo (2005)

Geopolíticas Indígenas, El Alto (Bolivia), Centro Andino de Estudios Estratégicos.

MAMANI Ramirez, Pablo (2005a)

Microgobiernos barriales, El Alto (Bolivia), Centro Andino de Estudios Estratégicos/ Instituto de Investigaciones Sociológicas IDIS-UMSA.

- OLIVER, Lucio (2007/2008)
Clases virtuales, CLACSO.
- PALERMO, Vicente (1990)
“Programas de ajuste y estrategias políticas: Las experiencias recientes de la Argentina y Bolivia”, Desarrollo Económico, N°119, Vol. 30, Buenos Aires.
- PATZI Paco, Felix (2006),
“Las tendencias en el movimiento indígena en Bolivia”, en Ezcarza F. y Gutiérrez, R. (coordinadoras), Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Bolivia, Gobierno Federal/Casa Juan Pablos, BUAP, UNAM y UACM.
- PÉREZ, Mamerto (2006)
“La Ley de participación Popular en una perspectiva indígena”, en Grammont,
- HUBERT (compilador)
La construcción de la democracia en el campo latinoamericano, Buenos Aires, CLACSO.
- PUENTE, Florencia y Longa, Francisco (2007)
“El Alto: los dilemas del indigenismo urbano. Entre la insurrección y el clientelismo” en Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (compiladores), Bolivia. Memoria, insurgencia y movimientos sociales, Buenos Aires, CLACSO-El Colectivo.
- REGALSKY, Pablo (2005)
“Territorio e interculturalidad: la participación campesina indígena y la reconfiguración del espacio andino rural”, en L. Enrique López y P. Regalsky (compiladores) Movimientos indígenas y Estado en Bolivia, La Paz (Bolivia), PROEIB Andes / CEN-DA / Plural Editores.
- REGALSKY, Pablo (2006)
“Bolivia indígena y campesina. El gobierno de Evo Morales”, Revista Herramienta, N°31, Buenos Aires.
- REVILLA Herrero, Carlos (2006)
“Representaciones colectivas sobre desarrollo urbano y legitimación en la gestión del Plan Progreso en la ciudad de El Alto”, El Alto (Bolivia), Programa de Desarrollo del Poder Local / UNITAS.
- THOMPSON, E.T. (1995)
Costumbres en Común, Barcelona, Crítica.
- VARGAS, Humberto y Eduardo Córdova E. (2004)
“Bolivia: un país de reconfiguraciones. Por una cultura de pactos políticos y de conflictos”, en José Seoane coordinador), Movimientos sociales y conflicto en América Latina, Buenos Aires, CLACSO.
- ZIBECHI, Raúl (2006)
“Movimientos sociales: nuevos escenarios y desafíos inéditos”, OSAL, Año VII N° 21, Buenos Aires, CLACSO.

El *ayllu* reterritorializado y su *taypi*, la ciudad de El Alto¹

Orlando Augusto Yépez Mariaca*

1. Introducción

Las ciudades de hoy —en la perspectiva de una interpretación del fenómeno urbano denominado *postmetrópolis* (Soja, 2000)— se han convertido en el típico reflejo del egocentrismo humano frente al entorno natural, a su separación de todo contexto, al alarde tecnológico alcanzados, y a una brutal separación entre naturaleza y sociedad. Los paradigmas de la modernidad que se afianzan en una sociedad de consumo se tornan hoy obsoletos tanto en lo ecológico —en sus tres dimensiones psíquico, social y territorial—, en lo económico y en lo cultural, por sus consecuencias nocivas, cuyas dimensiones de catástrofe son difíciles de predecir. Es por eso que los principios de desarrollo humano —y por tanto del desarrollo urbano— nos obligan a reorientar y redefinir con bases a nuevos paradigmas que se afinquen especialmente en el concepto de vivir en comuna, de vivir bien y no de vivir mejor.

¹ *Ayllu* y *taypi* son vocablos aymaras que significan comunidad y centro respectivamente.

* Facultad de Arquitectura, Universidad Mayor de San Andrés, Email: arqyopez@gmail.com



Foto: Gianni Renzo Borja Godoy "Madre Ciudad"

Tal vez, escudriñando nuestra memoria larga, en las prácticas y principios premodernos de nuestras sociedades agrarias, encontremos algunos hilos conductores que nos permitan hoy tejer la urdimbre contemporánea del *constructo humano* que es la ciudad, en su condición de palimpsesto y múltiple, abigarrado y plural, de equilibrio y respeto entre todos y con todo. En esa perspectiva se inscribe este documento.

2. Antecedentes; espacios confrontados con el capital, en el suburbio boliviano La Paz/El Alto

Bolivia, un país prácticamente despoblado con diez millones de habitantes que perviven en un inmenso territorio de un millón de kilómetros cuadrados —el cuarto en superficie de Sudamérica— durante la etapa *fordista* del capital, configuró las bases para tres áreas metropolitanas en un solo eje central y transversal del país, conectando desde el Pacífico vía Chile hasta

Cuadro 1: Comparativa de las dos ciudades

	El Alto	La Paz
Población en 2005 (habitantes)	800.273	839.169
Superficie, mancha urbana en 2005 (km ²)	339	271
Densidad (hab/km ²)	2.360,70	3.096,60
Predios/Catastro en 2001	184.637	222.494
Ingresos municipales en 2007 (B\$)	298.830.364	350.250.675
Índice de desarrollo humano	0,638	0,714
Categoría Pobreza	II pobreza moderada	I necesidades satisfechas
Educación, tasa de deserción	4,44	5,52
Servicios básicos:		
agua potable/cañería (%)	76	88
energía eléctrica (%)	79	84
alcantarillado (%)	41	73
Idiomas:		
castellano (%)	91	94
aymara (%)	46	29
quechua (%)	5	7

Fuente: FAM (2009)

el Atlántico vía Brasil. Es en éste eje transversal, que concentra a más del 60% de la población del país, donde se ubica en su extremo occidental la metrópoli La Paz/El Alto, constituyéndose no sólo en la capital política/administrativa sino en un verdadero puerto seco dada su proximidad al Pacífico.

La Paz/El Alto es una urbe con 1,6 millones de habitantes —la más extensa y con mayor población del país— produciendo una macrocefalia en la región andina boliviana, ya que concentra a más del 80% de la población urbana. La ciudad de El Alto —una gigantesca conurbación de la metrópoli— ha crecido en los últimos quince años con una tasa acelerada del 9%, reduciendo su ritmo al 5,1% anual en los últimos cuatro años. Aún así, se

constituye en la ciudad con mayor índice de pobreza y menores índices de desarrollo humano.

En la geografía de la acumulación capitalista en esta metrópoli andina —y ahora en la etapa *postfordista*— se ha modelado básicamente dos caras² de la ciudad: la *blanca* que desde la época colonialista ha manejado siempre todos los hilos del poder,³ y que se asienta en el centro de la ciudad de La Paz y las zonas bajas y con mejor clima. Y la otra, la indígena —siempre mayoritaria— y mestiza, que se entromete por todos los poros de la urbe, ya sea como sirviente, asalariado, trabajador de la calle o *informal*, e inclusive como burguesía *chola*. ¿Que es lo que los divide?, una cruel diferencia no de clase, sino étnica, un halo racista que margina y delimita territorios, espacios geográficos más que sociales.⁴

Esta delimitación de territorios queda fuertemente imbricada en el uso intensivo de la calle, no sólo como el espacio público por excelencia, sino convertido en el espacio de conquista y reconquista las más de las veces de un poder ilusorio, momentáneo y que en el imaginario indígena-mestizo se lo hace cíclico y repetitivo hasta el agotamiento. De ahí emana y de una manera muy fuerte las prácticas de la fiesta, de la feria y los cercos de las movilizaciones sociales.

3. La cosmovisión del *ayllu*; la territorialidad originaria en el contexto actual

El *ayllu* es sobre todo una comunidad indígena originaria —una organización social neta— que basadas en instituciones comunitarias radicalmente distintas a la racionalidad instrumental de Occidente, a sus prácticas productivas y de consumo, y a esa concepción lineal y evolutiva que el gran

2 La tesis del antropólogo Albó (1972) *Las dos caras de Chuquiago/La Paz* ha abierto una veta trascendental en las investigaciones sociológicas, etnográficas y políticas de hoy.

3 Desde enero de 2006 y por primera vez en nuestra historia, un indígena es hecho Presidente Constitucional por voto popular, inaugurando posiblemente un proceso con ribetes revolucionarios e inéditos en la tradición sociológica y política de nuestra civilización occidental.

4 El primer *cercu indígena* que tiene la ciudad de La Paz, es en los años de 1781-1782, dirigido por el caudillo Tupaj Catari, descuartizado al final de manera brutal. De esa experiencia dolorosa se han acunado sensiblemente prácticas racistas —especialmente en la población criolla— que perviven lamentablemente hasta hoy.

capital ha impuesto durante siglos, toma forma en una micro-geografía rural con todas las particularidades de gobierno, gestión y administración, dentro de una red de territorios localizados en varias capas, pisos o *layers* ecológicos: la Costa, el Altiplano andino, los valles interandinos y las tierras bajas.

La fuerza del *ayllu*⁵ y su actualidad o vigencia radica fundamentalmente en la fuerza de su antigüedad, en la permanente recuperación de su memoria histórica que como todo colectivo social prefigura, reconfigura y refigura la conformación de sus imaginarios colectivos frente a modelos impuestos. La inventiva social emergente ha hecho y hace que siempre haya encontrado momentos de interpelación, actualizándose, transformándose, metamorfoseándose y retornando siempre a sus sedimentaciones y estratificaciones históricas a lo largo del tiempo y de su memoria. Esta condición mnemotécnica es vital en la medida que y desde las comunidades campesinas antes, y en los micro-distritos barriales urbanos de hoy, se ha ido retroalimentando permanentemente en sus prácticas de vida. Por ejemplo, en el techado de una vivienda en una comunidad rural, todos sus miembros participan y logran a través del trabajo colectivo, practicar las bases de reciprocidad, institución fundamental en el mundo andino. Estas prácticas se trasladan a la ciudad donde, a pesar de los violentos choques de aculturización y prácticas híbridas, perviven y entablan vigencia de generación en generación. Es así que en el barrio indígena/mestizo, muchísimas formas colectivas de vida se practican con mayor o menor intensidad, junto con el habla, la música y los tejidos, pilares de simbolización del mundo aymara.

El *ayllu* —institución comunitaria que se ha originado en los Andes centrales, en la cuenca hidráulica del lago Titicaca hasta los salares encima del Atacama— se rearticula dentro de un enjambre de circuitos de reciprocidades heredadas, transformadas y reconfiguradas, que no ha sucumbido ni en los tiempos del Incario⁶ a pesar de un siglo de ocupación, ni a las reduc-

5 El filósofo Prada (2008) desarrolla especialmente en el segundo capítulo Genealogía del Ayllu una interesante tesis sobre el motor de la emancipación y rebeldías de los movimiento sociales de hoy.

6 Cerca de cien años y antes de la Conquista, el Imperio Inca penetró entre los Señoríos Collas, en ésta parte del continente, y convivieron con éstos en una condición de complementación más que de conquista.

ciones toledanas en la Colonia que por sus consecuencias históricas se convirtieron en una verdadera catástrofe ecológica. Tampoco el *ayllu* sucumbió antes los embates de la República, cuyos criollos relegaron al originario en las mismísimas condiciones coloniales, ni durante el implante del modelo de haciendas en el siglo XIX.

Bolivia vivió con la llamada Revolución del 52 un proceso de reajuste del capital hacia su modernización e inicio de una burguesía industrial conjuntamente con medidas importantes como la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las minas, y otras medidas estructurales, donde el indígena pasaba a ser campesino, el indígena obrero a asalariado de clase, las clases medias fortalecidas en las urbes, y todo esto enmarcado en la visión occidental típica de la modernidad: democracia representativa, libertad a la especulación financiera y engranaje con el capital transnacional. Tal vez fue el momento más crítico para la institución del *ayllu*, ya que socavaba profundamente las condiciones de solidaridad, trabajo colectivo y complementariedad. Pasada la larga noche de las dictaduras militares, donde el *ayllu* vivió escondido en las profundidades de la memoria indígena, se inicia un nuevo embate, es la época del neoliberalismo donde a tiempo de dismantelar al Estado en beneficio del gran capital, los paradigmas del consumo, del individualismo al límite y del mercado como el único regulador de la vida misma, la sociedad urbana dirige su mirada y esperanza de construir a la manera del sueño americano, autopistas, grandes centros, malls, barrios-archipiélagos, ciudad fragmentada.

Con diferentes tonalidades, matices y velocidades del carácter comunitario del *ayllu* a lo largo de más de seis siglos, los pueblos originarios —especialmente los aymaras— han logrado comportarse simultáneamente a lo largo de la historia con entrecruzamientos, entrelazamientos y alternancias de las lógicas y cosmovisiones originarias con los horizontes históricos modernos de occidente, pero a la espera del mejor momento para irrumpir y proponer, rescatando lo mejor del pasado, una alternativa de vida, una alternativa de trabajo y una alternativa de construir otro hábitat.

4. Cartografías del *ayllu*; del modelo originario territorial a la periferia urbano-rural híbrida actual

Previo a presentar un cuadro-síntesis de la manifestación del *ayllu* en el territorio amplio más que rural, y una semblanza en la urbe La Paz/El Alto, se hace imperioso el aclarar que en Bolivia, y luego de la remesón que ha significado la Guerrilla del Ché, la intelectualidad de izquierda y especialmente una nueva intelectualidad indigenista, se empezó a gestar a partir de los años 80 una importante bibliografía basada en las cosmovisiones andino-amazónicas, que buscan no sólo interpretar el pasado, sino buscar lazos alternativos que nos ayuden a encontrar herramientas para el cambio.

Por tanto, el *ayllu* tendría las siguientes características básicas:

- Un sistema de organización territorial interecológico; como una base de ordenamiento de la producción y la economía; como una lógica de ordenamiento de la cultura y la ritualidad y como un sistema de organización y jerarquía de autoridades políticas.
- Los tres niveles espaciales: el *Alajpacha*, o el cielo, lo de arriba; el *Akapacha*, o este mundo, lo del centro; y el *Manqhapacha*, o el subsuelo, lo de abajo.
- El concepto de tiempo, *pacha*, en sus tres niveles espaciales arriba mencionados, se inserta entre dos elementos territoriales: el territorio de la comunidad misma o *marka uraqi*, con el concepto de vivir en bienestar o *qamaña*; y el territorio sacralizado o *pacha uraqi*, con el concepto de vivir con armonía y respeto con la naturaleza o *pachamama*.
- La espacialidad como tejido u organización del gran territorio va desde un nivel macro que es el control y gestión de pisos ecológicos —control de tierras altas y tierras bajas— hasta un entretejido holístico en espiral que concerta la tetralidad andina: la tierra-territorio; la producción o base económica; el tejido ritual-cultural y la organización social y gobierno comunal.

Sin embargo, un sistema fuerte de distorsión y deslegitimación ha sufrido el *ayllu* —desde la Colonia hasta la República— produciendo especialmente una desestructuración del territorio —imposición de espacios jerárquicos y centralizados como el sistema de departamentos, provincias y cantones— una desorganización de las bases de producción —implante de centros de producción aislados como la minería extractiva, o agricultura intensiva— y la distorsión y suplantación del sistema político de autoridad —deslegitimación social a través de la matriz étnica-racial e imposición del modelo de liderazgo occidental basado en el culto a la personalidad—, entre otros.

Hoy día, y a la luz del proceso de resurgimiento y rescate de los valores indígenas, encontramos en las periferias de La Paz/El Alto principalmente, aunque débilmente, muchas manifestaciones donde la institución del *ayllu* se hace presente:

- El *ayni*, la institución de reciprocidad en el trabajo y responsabilidad, está fuertemente arraigada, especialmente entre las organizaciones vecinales de los barrios periurbanos.
- La *apacheta*, o montículo de un territorio, se constituye como el centro o *taypi* del barrio. Puede estar *disfrazado* de mirador, pero en realidad se constituye en el centro ceremonial para rendir culto a las tres *pachas* o tiempos espaciales.
- La *cancha* o descampado, juega el rol del espacio organizador de eventos o acontecimiento político, religioso o cultural. Sirven como inicio o final de cualquiera de ellos, entroncándose siempre en un circuito, que a su vez, se constituye en el trayecto más importante del barrio o la ciudad.
- El *tambo*, o centro de reunión y hospedaje o *pascana*, hoy día tremendamente transgredido, juega el rol de espacio de solidaridad con el forastero, a tiempo que permite el intercambio de comercio, albergue y esparcimiento, todo bajo el concepto de *espacio público*, por tanto libre y democrático. En las antípodas del *megacenter* americano, en la que el control y vigilancia ha roto brutalmente la

libertad de circulación en medio de una guerra de *marcas* o *logos* para el mayor consumo, con su valor agregado de banalidad.

Durante el año principalmente en los períodos de siembra y cosecha, un alto porcentaje de vecinos se trasladan a sus comunidades de forma temporal, dejando a los barrios una imagen de *deshabitado* temporalmente en cierta manera. Es la condición nómada urbano/rural que pervive fuertemente, y que se da por encima de su condición de riqueza o necesidad económica del urbanita indígena/mestizo. Pues la estructura de propiedad de las tierras colectivas y familiares —*Sayañas*— está fuertemente enraizada.

- El *t'hinku*, o encuentro es la práctica más común que se da en el enjambre de asociaciones de vecinos, amas de casa, jóvenes, artesanos, comerciantes, organizados por tipología de ventas, etc. En cualquier sitio público y en horas diversas, grupos de urbanitas permanentemente intercambian sus experiencias, que de alguna manera, trasladan la práctica de decisiones colectivas y por consenso que en el *ayllu* siempre se ha dado, que sumado a la práctica organizativa occidental del sindicato, se entremezcla con la vieja tradición, en un afán de acciones de solidaridad y apoyo para la autoestima.
- Las rutas de *llameros*, que desde tiempos preincaicos se establecieron entre comerciantes y pobladores, han marcado en buena medida las vías hoy motorizadas. Pero un enjambre de *cachanchadas* o atajos, especialmente entre las laderas y altas pendientes entre La Paz y El Alto, han quedado mutiladas, por la torpeza del *urbanizador de dameros* que tercamente ha estado ciego ante la memoria del lugar.

5. El cerco aymara en sus tres manifestaciones: la feria (el *qhatu*), la fiesta (la *anata*) y los bloqueos (la *pirka* humana)

Tres instituciones operacionales del *ayllu* son no sólo significativas, sino siempre recurrentes en todo acto comunal: la reciprocidad o *ayni*, la solidaridad o *minka* y la redistribución o *laqinuqa*.

También son tres los tipos de manifestación de apropiación del espacio público que a modo de cerco a la otra cara de la ciudad se despliega entorpeciendo y colapsando el sistema urbano que el *urbanizador de daderos* ha impuesto:

- La feria o *qhatu*, que de manera cíclica serpentea toda la ciudad.
- La fiesta o *anata*, que haciendo coincidir con el calendario occidental/cristiano los cincuenta y seis sábados y domingos del año se despliega por las calles.
- Las movilizaciones, bloqueos, marchas, etc., que a manera de muralla humana o *pirka* irrumpe en los momentos álgidos de un calendario político de la multitud, que como tal, es imposible de predecir, predefinir o calcular.

5.1 La feria o *qhatu*

La feria es algo más que un espacio de intercambio, sino que es, sobre todo, de socialización y de reproducción de las relaciones tradicionales.

Blanes (1992)

De esa manera y en su consideración integral La Feria es social, económica y culturalmente una dinámica continua y de fuerte articulación entre lo rural y lo urbano, entre la economía campesina y economía capitalista, entre el trueque y el intercambio comercial neto. Pero hay algo más, es una de las formas de captación del espacio público del *ayllu*, en su afán de reivindicar sus instituciones y en su afán de resarcir del ocultamiento al que está sometido. Por eso se manifiesta de manera superlativa y grandilocuente, expansiva y multitudinaria, bulliciosa hasta llegar a un éxtasis barroco y extravagante.

Varias son las características de la feria: tiene una periodicidad que, concatenando las diferentes ferias de la urbe, en un todo, se haya presente en los siete días de la semana; por la predominancia de los productos especializados que expone, abarca mucho más que un bazar árabe; y por la con-

currencia de sus relaciones sociales, engloba a casi la totalidad de las clases sociales de la ciudad.

Sólo a guisa de ejemplo, la Feria de la 16 —la feria más grande de Latinoamérica—, ubicada en el borde norte entre la ciudad de La Paz y El Alto, convoca a más de trescientos mil transeúntes, comerciantes, compradores y sobre todo curiosos, para que se solasen observando todo tipo de productos, nuevos y a medio uso, grandes o pequeños, flamantes o destartados, originales o *piratas*; todo, absolutamente todo, los jueves y domingos del año entero. Un verdadero festín para la vista y sobre todo para la socialización.

5.2 La fiesta o *anata*

Otra manifestación del cerco indígena son las fiestas, verdaderos acontecimientos multitudinarios, exóticos y sobre todo, rebeldes. Rebelde porque la cantidad de bailarines y músicos es multitudinaria; rebelde porque busca la saturación de sus sonidos entre conjuntos y bandas; rebelde porque son apoteósicas las galas y vestimentas de sus danzarines; rebelde porque irrumpe descaradamente en los sitios simbólicos de la otraciudad; rebelde porque es la única ocasión de no representar el papel de sirviente, obrero o empleado, ya que se constituye en un genuino conquistador del espacio, dueño de sí y dueño del entorno que lo acaba de atrapar con las veleidades de su baile, su coreografía y su canto. Por ese momento sólo, el indígena-mestizo se manifiesta con toda libertad adueñándose de todo lo que le rodea, sólo por el tiempo que dura la fiesta, por eso, la fiesta dura varios días, por eso la fiesta se produce todas las semanas del año, en cadena, de barrio en barrio, en circuito de plaza en plaza, cíclicamente a la par del calendario religioso-pagano.

Sino veamos, a manera de ejemplo, las fiestas-hito de los diferentes meses del año:

- **Enero.** La fiesta de las *alasitas* y el *Ekeko*, el dios de la abundancia.
- **Febrero,** El carnaval andino, el origen de la *ispalla*, el rito a la buena producción agrícola.

- **Marzo.** La fiesta de la *puqu pacha*, tiempo de recoger la cosecha.
- **Mayo.** La fiesta de la *chacana*, de la cruz del sur, andaina o cuadrada.
- **Junio.** El *Año Nuevo Aymara*, 21 de junio⁷
- **Agosto.** Mes de la *pachamama*, madre-tierra y las *waxt'as*, pago a la tierra.
- **Septiembre.** La fiesta de las *ñustas* y los *chasquis*, 21 de septiembre.
- **Noviembre.** El *amay phazsi*, mes de los difuntos, la muerte como continuación de la vida.

5.3 El bloqueo o *pirka*

La construcción inicial de lazos de solidaridad, de asociaciones de todo tipo para encarar la necesidad común, no es de por sí una acción subversiva o transformadora, pero bien puede serlo... en la medida en que tales acciones, en y sobre esas construcciones, se levante la posibilidad de la acción humana soberana, de la práctica digna y autodeterminativa.

Gutiérrez (2006)

La trilogía del cerco como otra manifestación del *ayllu*, estaría inconclusa sino observamos esa terca y tozuda manera de interponer con el movimiento de multitudes⁸ indígena-mestizos, cada reclamo, cada solicitud, cada acto reivindicativo, a todo nivel ya sea nacional, prefectural o municipal, en cada lugar, ya sea a la salida de las carreteras regionales, o en el centro mismo de la urbe, y en cualquier momento, en las horas-pico del tráfico urbano o en el momento-clave que alguna autoridad se halla. Las ciudades de La Paz/ El Alto en sus sitios y arterias más importantes, se convierten por tanto, en

7 Con el actual gobierno de **Evo Morales**, se ha instituido oficialmente la celebración del Año Nuevo Aymara, con todas las prerrogativas de un acontecimiento anual de gran importancia.

8 Preferimos el concepto de *multitud* a la manera de **Negri** (2004), que el de *masas* en la concepción dogmática de la izquierda tradicional.

un verdadero *marchódromo* en la que permanentemente los movimientos sociales se han adueñado, por decir de alguna manera.

Lo que estamos viviendo va mucho más allá de los procesos de gobernanza y de empoderamiento de la sociedad civil organizada. Es más, ha tomado unos rumbos radicalmente distintos a los de los años 70, donde el movimiento obrero por excelencia peleaba por liderar a nombre de una revolución social, o las guerrillas marxistas intentaban la toma del poder por la vía de las armas. Ahora, todo lo contrario, son los poderosos movimientos sociales encabezados por una condición étnica, que lenta, pausada y silenciosamente han comenzado a reconfigurar la geografía misma del país, y tal vez del continente. Es la manifestación del *ayllu* que por fin ha encontrado el momento propicio para salir del subterráneo impuesto a más de cinco siglos, es la cara indígena-mestiza que se ha impuesto encabezar las luchas antiglobalizadoras, es la *pirka* humana que está moldeando el territorio colonizado buscando entroncar con los paradigmas de este nuevo siglo.

En nuestra memoria corta, ya son nueve años del punto de inflexión de las movilizaciones colectivas, son ya seis años de la Guerra del Gas y cuatro años que el nuevo gobierno encabezado por un indígena es celosamente observado y calificado. Sólo para tener una idea de la eclosión de movimientos sociales actuales y donde la ciudad de El Alto se sitúa en el eje articulador de éstos: *Central Obrera Boliviana*, *Confederación Única de Trabajadores Campesinos*, *Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano*, *Central Sindical de Colonizadores*, *Confederación Nacional de Ayllus Markas del Qullasuyo*, *Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz*, *seis Confederaciones de Cocaleros del Trópico de Cochabamba*, *Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas*, *Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa*, *Movimiento sin Tierra*, *Federación de Juntas Vecinales de El Alto*, *Coordinadora del Agua-Regantes* (**García Linera**, 2004a) entre las más importantes de la muchas organizaciones sociales hoy vigentes.

6. Hitos de rebeldía; confrontando los espacios del poder

6.1 La Guerra del Gas: septiembre-octubre de 2003, ciudad de El Alto

La rebelión de la nación aymara. En la memoria larga de los pueblos andino-amazónicos tal vez son tres los momentos más dramáticos y fuertes en este intento de emancipación del indígena de este continente denominado *Abya Yala* impuesto hasta ahora como *Latinoamérica*: El cerco de *Tupaj Katari* en

Chuquiago Marka, hoy La Paz, y casi al unísono del levantamiento de *Tupaj Amaru* en el Cuzco, allá en el siglo XVIII; la tenaz resistencia del pueblo chiriguano/guaraní y su caída en las postrimerías de la República; y el levantamiento de *Zárate Willka* durante la Guerra Federal a finales del siglo XIX.

En la memoria corta está gravada la llamada Guerra del Gas en octubre del 2003 donde la ciudad de El Alto se constituye en el eje articulador de este movimiento, cuyo inicio se remonta al año 2000 cuando se inicia en la larga marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Los motivos iniciales de movilización fueron el respeto a los usos y costumbres en el ejercicio de la justicia, y la oposición a la venta de gas a los EE.UU. Pero finalmente maduran las demandas, constituyéndose en una cerrada defensa por los recursos naturales —especialmente del gas— como un principio de reivindicación histórica.

Es la *Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE)* quien lideriza el movimiento insurreccional, tejiendo una inmensa red de organización comunal basada en la autoridad del *ayllu*: *Mallkus, Jilakatas y Mamat'allas*.



Foto: bolivianueva.blogspot.com

A nivel urbano, se alza una gigantesca estructura barrial y gremial, basada en la identidad indígena, desplazando inclusive a los líderes indígenas que había hasta ese momento incursionado con una estructura partidaria. Se trata de **Felipe Quispe** —*el Mallku*— y el ahora presidente del Estado plurinacional **Evo Morales**. Se impone pues, la lógica del *ayllu*, en su condición de autoridades emanadas directamente de la comunidad y que de forma rotativa van asumiendo tareas de coordinación y de mandato.

Ante la arremetida militar —más de sesenta muertos— se impone la estructura territorial de barrios urbanos y comunidades rurales, descentralizada, autónoma y ágil —muy parecida al rizoma deleuzeano— que finalmente se impone en sus demanda principal: gas para los bolivianos.

Como anota **García Linera** (2004c)⁹: «militarmente es una masacre, políticamente es la acción más contundente y dramática del fin de una época; históricamente es la más grande señal de soberanía que los más pobres y excluidos de este país dan a una sociedad y para toda una sociedad»

7. Corolario

Para terminar, que mejor definición de la institución *ayllu*, que hace **Raúl Prada**, donde sociedad y territorio se entrelazan, y en donde gestión y producción se complementan:

El Ayllu procede de la revolución verde, desde cuando los aymaras domesticaron a las plantas, ocasionando, además de la revolución agraria, una transformación en las formas organizativas de la sociedad. La estructura social del Ayllu responde a la necesidad de complementar suelos, de hacer circular los productos, de hacer rotar los trabajos. Los mandos rotativos del poder comunitario son un resultado estructural de esa rotación agrícola en el campo de disponibilidad de fuerza.

Prada (2004)

⁹ Álvaro García Linera es desde enero de 2006, vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia. La cita viene del libro *Memorias de Octubre*, en su capítulo La crisis del estado y las sublevaciones indígena-plebeyas.

Bibliografía

- ALBÓ, Xavier, et al** (1983)
Chukiyawu I, II, III. La Paz: CIPCA.
- ALBÓ, Xavier et al** (1972)
Las dos caras de Chuquiago. La Paz: CIPCA.
- ALVARADO Quispe, Manuel y Mary Mamani Tito** (2007)
El origen de las fiestas andinas. La Paz: Editorial Paka-Illa.
- BARNADAS, Josep** (1978)
Los aymaras dentro de la sociedad boliviana. La Paz: CIPCA.
- BERNABÉ, Adalid et al** (2003)
Las ferias campesinas. La Paz: PIEB.
- BLANES, José** (1992)
Agricultura campesina y los mercados de alimentos. Cochabamba: CERES.
- BOUYSSSE-Cassagne, Thérèse** (1987)
La identidad aymara. La Paz: Hisbol.
- CONDARCO, Ramiro** (1966)
Zárate, el temible Wilka. La Paz: Talleres Gráficos Bolivianos,.
- DELEUZE, Gilles y Félix Guattari** (2002)
Mil mesetas. Valencia, Pre-textos.
- GARCÍA Linera, Álvaro et al** (2004a)
Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. La Paz: Oxfam/Diakonia.
- GARCÍA Linera, Álvaro; Raúl Prada y Luís Tapia** (2004b)
Memorias de Octubre. La Paz, Muela del Diablo.
- GARCÍA Linera, Álvaro** (2004c)
La crisis del estado y las sublevaciones indígena-plebeyas. La Paz: Ed. Muela del Diablo.
- GISBERT, Teresa** (1980)
Arte textil y el mundo andino. La Paz: Gisbert S.A.
- GUATTARI, Félix** (1996)
Caosmosis. Buenos Aires: Manantial.
- GUATTARI, Félix** (1995)
Las tres ecologías. Valencia: Pre-textos.
- GUTIÉRREZ Aguilar, Raquel** (2008)
Los ritmos del Pachakuti. La Paz: Editorial Textos rebeldes.

- GUTIÉRREZ Aguilar, Raquel** (2006)
A desordenar. México:Ed. Textos rebeldes.
- HARVEY, David** (2006)
Spaces of Global Capitalism: A Theory of Uneven Geographical Development. Editorial Verso. Se cita la versión castellana Espacios del capital. Madrid: AKAL (2007).
- HERNÁNDEZ Aja, Agustín (ed)** (2008)
Arquitectura del siglo XXI: mas allá de Kyoto. Madrid: IAU+S.
- MAMANI Ramírez, Pablo** (2004)
El rugir de las multitudes. El Alto: Ediciones Yachayhuawasi.
- MAMANI Ramírez, Pablo** (2005)
Microgobiernos barriales. El Alto: Textos rebeldes.
- MONTES Ruiz, Fernando** (1984)
La máscara de piedra. La Paz: Editorial Quipus.
- NEGRI, Antonio** (2004)
Guías. Cinco lecciones en torno al Imperio España: Paidós.
- PARDO, José Luís** (1992)
Las formas de la exterioridad. Valencia: Pre-textos.
- PERELMAN Fajardo, Juan** (2004)
Las mil mesetas de la guerra del gas La Paz: C&C editores.
- PLATT, Tristan** (1982)
El Estado boliviano y ayllu andino. Lima: Instituto de estudios peruanos.
- PRADA, Raúl** (2004)
Largo Octubre. La Paz: Plural Editores.
- PRADA, Raúl** (2008)
Subversiones indígenas. La Paz: Ed. Muela del Diablo.
- REYNAGA, Fausto** (1969)
La revolución india La Paz: Ed. Partido Indio de Bolivia.
- RIVERA, Silvia** (1983)
Luchas campesinas contemporáneas. México: Siglo XXI.
- SAIGNES, Thierry.** (1985)
Los andes orientales: Historia de un olvido. Cochabamba: IFEA-CERES.
- SASSEN, Saskia** (2003)
Los espectros de la globalización. Buenos Aires, FCE.

SOJA, Edward W. (2000)

Postmetrópolis: critical studies of cities and regions Los Angeles: Blackwell Publishing.

VAN DEN BERG, Hans y Norbert Schiffrers (1992)

La cosmovision aymara. La Paz: Hisbol.

VILLA Villena, Carlos (1983)

Génesis de la cultura andina. Lima: CISA.

YAMPARA Harachi, Simón (2001)

El Ayllu y la territorialidad en los Andes. El Alto: CADA/UPEA.



Plan 3000:

Bastión rebelde del oriente boliviano¹

Marxa Chávez

Para Mariel y toda su familia, por ser parte de esta trama de insubordinaciones. Gracias hermana.

“Aquí no va a entrar la oligarquía, aquí no va a mandar un Rubén Costas... ¡¡vamos, vamos!! ¡¡Avancen compañeros, con los escudos!! Avancen”

El estruendo era grande entre los cohetones y los gritos que se escuchaban en las calles del Plan 3000 el 11 de septiembre pasado. Cientos de personas, sobre todo los jóvenes, hombres y mujeres, comerciantes, los llamados “jóvenes de la calle”, corrían y se parapetaban tras unos escudos hechos artesanalmente por ellos mismos, para defender La Rotonda, el centro simbólico de la resistencia en el Plan y principal objetivo de la arremetida de la Unión

1 Tomado de UB Noticias



Foto: richardbolivia.blogspot.com

Juvenil Cruceñista (UJC), grupo armado y fascistoide de la derecha cívica y prefectural. Por la radio un dirigente anunciaba:

“Se ha iniciado la guerra en el Plan 3000”, mientras varias personas, como los dirigentes indígenas perseguidos en el centro de la ciudad, iban a refugiarse al Plan y resistir desde ese lugar. La defensa se hizo con piedras, palos, puños, hondas y cohetes pequeños.

¿Qué es lo que se visibilizaba entre esas vigiliadas vecinales aquellas jornadas? ¿Por qué tanta gente del Plan salió a las calles? Mientras el prefecto Rubén Costas, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, y las otras prefecturas que pululan a su alrededor se desgañaban en

sus medios de “comunicación” a favor de la autonomía departamental, como una supuesta “revolución de paz y amor”, en las calles sus hordas pagadas pateaban campesinos, humillaban a indígenas, amenazaban, torturaban, escupían, perseguían, amedrentaban y luego, como sucedió en Pando, asesinaban. Mientras la sangre campesina e indígena, de las mujeres y niños acribillados, de los “collas”, de los takana (grupo guerrero indígena), corría en Porvenir, Pando, la indignación y la organización de los sectores populares crecía y se tejía en varios lugares, desde diversos puntos de la geografía nacional.

La lucha se hizo abierta cuando, en uno de los barrios más pobres y más dignos de Santa Cruz, emergieron en la historia de nuestro país —que no es otra cosa que la historia del pueblo en constante batalla— las voces de la rebelión contra la asonada fascista que se vivió en septiembre de este año de manera muy violenta en por lo menos cuatro departamentos de Bolivia. Esta primera nota acerca de los sucesos de septiembre pretende pensar sobre el espacio, los tiempos y la gente insurrecta, en los primeros puntos de todo este tejido que se reveló ante el pueblo boliviano y latinoamericano, en este barrio cruceño: el Plan 3000.

Territorio insumiso, memorias

En 1983, el entonces alcalde de la ciudad de Santa Cruz Sergio Antelo, fundador de la “Nación Camba” —movimiento federalista en Bolivia— ordenó el traslado de 3000 familias afectadas por una terrible inundación hacia una zona baldía y lejana del centro de la ciudad, ésta última está organizada en barrios que pertenecen a los “anillos” que rodean la plaza central: primer anillo, segundo anillo, tercer anillo... allí viven muchas familias pertenecientes a la alta burguesía cruceña

Cuando esas tres mil familias fueron llevadas a las afueras del área urbana central, nació el Plan 3000, como cuenta Eduardo Loayza, director de la Radio Integración. ¿Se imaginaría el señor Antelo que 25 años después aquel mismo barrio que él ordenó establecer, se convertiría en el principal freno a sus aspiraciones separatistas y oligárquicas?

Hoy, muy al sur de los elegantes primeros anillos de Santa Cruz, está la Ciudadela Andrés Ibáñez, donde se hallan el Plan 3000 y otras zonas, también están las comunidades guaraníes. Todos planean convertirse en una nueva sección municipal que se denominaría Ciudadela Igualitaria Andrés Ibáñez*, autónoma de la administración de la alcaldía actual de Santa Cruz, y de la prefectura central, ya que actualmente hay casi 300 mil habitantes en el Plan. Este proceso está en plena discusión colectiva.

Al llegar allí, lo primero que se divisa es La Rotonda del Plan 3000, una plaza emblema de la resistencia. Al medio de ésta se halla plantado un mojón que lleva inscrita la consigna “autonomía municipal” sobre el que flamea una bandera boliviana. Al frente, entre un laberinto de comercios, queda un edificio donde funciona la Radio Integración, uno de los pilares del movimiento.

Este barrio, de calles y avenidas de tierra llenas de puestos de venta, de ruido de cientos de buses que pasan cerca, es muy parecida a la ciudad de El Alto o a algunas zonas populares de Cochabamba, no sólo por su fisonomía sino por su alta composición de migrantes de otros departamentos. Un dirigente nos explica: “El Plan 3000 de Santa Cruz es El Alto de La Paz”. Mucha gente habla en quechua y más allá, nos dicen, está el Barrio Minero, que provocó miedo en septiembre a las clases acomodadas de los primeros anillos cruceños. Algo más lejos están las zonas donde viven comunidades guaraníes. La diversidad se nota en los acentos, en los rostros. Así nos lo narra Eduardo:

“Había el mechero cerquita de acá, porque esta zona ha sido rica, gasífera; ha ido alumbrando y lo demás. Después va llegando gente del interior producto de la relocalización, el 83 es el Plan 3000, 85 es la relocalización y comienzan a llegar del sector minero, y llegan con plata porque les habían dado su finiquito y se convierten en comerciantes”.

Entonces por ahí le viene una explicación de por qué más o menos se dan ciertas cosas de niveles de organización. Está también el Barrio Mine-



Foto: Nelson Vilca

ro en el Plan 3000, y también sumado a que había comunidades originarias aquí, y siguen habiéndolas, como Pueblo Nuevo, que son guaraníes.

El Plan 3000 se va haciendo más grande, más comercio, va llegando más gente de todas partes, y ya ha llegado a límites increíbles, que todos los días se van fundado barrios nuevos que ni siquiera son reconocidos dentro del plan regulador.

La memoria organizativa en el Plan, como zona de llegada de inmigrantes de otros departamentos, fundamentalmente está asentada en todas estas memorias de organización y lucha. Las jornadas de resistencia labradas en todo este tiempo tienen que ver en mucho con la gran cantidad de personas que vinieron de otros lugares, buscando un trabajo que les permitiese sobrevivir. Son estas personas, sus hijas e hijos, las familias que provienen de un origen indígena, trabajador y humilde, las que establecieron cuando lle-

garon diversas organizaciones: las más numerosas son las de los “gremiales” o comerciantes, grandes y pequeños. Cuenta Eduardo:

Estas organizaciones surgen también luego de que va haber movimiento económico, mercados, va a empezar a haber bastante movimiento gremial también, van a haber sindicatos de transporte, que hasta ahora los hay, y van a ir surgiendo más. Por ejemplo ahora hay 18 asociaciones de gremiales en el Plan 3000, solamente en la zona de La Rotonda, y hay muchos mercados más y otras organizaciones más, lo gremial es muy importante.

El otro eje de la movilización fueron los vecinos, aglutinados en la Unión de Juntas Vecinales, que salieron a cuidar la zona. De otro lado, se crearon grupos juveniles de muchas tendencias que desde hacía tiempo venían organizándose ante las agresiones de la UJC. “La Juventud Igualitaria Andrés Ibañez”, la “Juventud Integrada del Plan 3000”, los grupos culturales, las organizaciones de mujeres, como el grupo “María Ayma”, fueron los espacios donde se gestó el tiempo de la resistencia.

Racismo

Los hechos de violencia racista se vivían, hasta hace algunos años, de manera velada, como parte de la herencia colonialista en el país. La construcción de la cultura dominante en Santa Cruz se construyó a partir de la mitificación de la figura y el color de los ricos y blancos cruceños de élite, y la desvalorización de “el otro” que es lo “andino”, lo occidental, lo indígena, lo campesino y lo pobre. Así fue que lo “colla” se transformó en epíteto para insultar a las personas que tenían rasgos indígenas o, en todo caso, no blancos. Santa Cruz, para esta visión prejuiciosa de las cosas, era lugar de fulgurantes pasarelas de la moda, la ciudad moderna y pujante, llena de emigrantes europeos.

El espejo deformante donde se miraban los dominadores, e incluso los que no lo eran, se rompió en trizas cuando se hizo patente que detrás de



Foto: boliviateamo.blogspot.com

aquel discurso de lo “mestizo” se encubrían las discriminaciones más dolorosas. La macabra andanada racista se desató sin eufemismos de ningún tipo ya el 2005.

Una compañera que vive en Santa Cruz nos narra que cuando los comités cívicos y prefecturas, junto a la UJC, gestaban su discurso y acciones contra “collas”, indígenas y campesinos, los hechos violentos se dieron casi todos los días, y, por supuesto, no salieron a luz pública por ningún medio de “comunicación”, porque golpear o insultar a algún indígena ya no era noticia. Dirigentes heridos brutalmente, personas acusadas de ser “masistas” casi muertas a patadas en las calles, gente agredida cuando estaba sola. Un compañero de la Juventud Unida del Plan 3000 lo describe así:

Yo antes de todos esos conflictos yo trabajaba en una empresa de comida, y tenía un salario mínimo que era discriminado desde ya en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, me tildaban de “colla”, “masista de mierda”, “sos una basura”, y yo nunca me he dejado, y les digo a todas las personas que nunca se dejen avasallar por nadie, que defiendan sus creencias.

Las caravanas siniestras de jóvenes unionistas con bates de béisbol para perseguir a los dirigentes, dos campesinos muertos a bala en la ciudad de Cochabamba el 2007 pasado, radios comunitarias quemadas, hogares de campesinos e indígenas incendiados, insultos al pasar por la calle, más golpes, más patadas, más violencia, mientras un locutor anunciaba en un medio televisivo, allá en el departamento del Beni, su odio a la “raza maldita”, refiriéndose a los campesinos e indígenas del país: lo peor que puede sucederle a una sociedad, es la aceptación de esta violencia como un hecho normal —lo que es un fenómeno del fascismo—. Por otro lado, el miedo que los grupos de choque habían logrado infundir entre las personas contribuía a consolidar este “silencio”.

Aun con ese miedo ante los grupos de choque, en el Plan, así como en los alrededores rurales de la ciudad de Santa Cruz, finalmente se decidió poner un alto a todas estas agresiones. Se proclamó, por antagonismo, la idea de “igualdad” contra el racismo que se ejerció todo este tiempo. Comenzaba el movimiento.

“Justamente, estos jóvenes como nosotros, en la ciudad de Plan 3000, nos vimos en la necesidad de por lo menos conformar una organización para tener una autodefensa. Viendo que sentimos que nuestros hermanos, hermanas del interior, que nos vienen a visitar a la familia que tenemos, estaban pateados, pegados, apaleados, así digamos ensangrentados.

Para asumir sobre todo esa autodefensa nos dimos esa iniciativa, a qué estar paseando como jóvenes por las calles; entonces primero nos dimos esa iniciativa de organizarnos”.

(Entrevista con el presidente de la Juventud Igualitaria Andrés Ibáñez del Plan 3000).

“Hemos personas en el Plan 3000 que vivimos bajo los árboles, con el techo de plástico con un techo de hojas de palmera, sin agua, sin luz, por la dignidad de estas personas humanas vamos a luchar, vamos a hacer frente[...]No es que nosotros somos como algunos de Media Luna que han afirmado: “Todos los del Plan 3000, de Villa Primero de Mayo, La Colorada, y que son —incluso al señor presidente de Bolivia lo han dicho—, que es la mitad animal y la mitad mierda”. No somos eso, nosotros tenemos también razón, libertad y dignidad. Veo que basta tener esas tres facultades para ser persona, para tener derechos y para ser respetados, por eso es la lucha”.

(Testimonio de estudiante del Plan 3000).

4 de mayo de 2008: Primer momento de movilización masiva

Las voces de disidencia a la política prefectural y cívica se pronunciaron ya ante los primeros ataques de la UJC, que se iniciaron en 2004 y 2005. Un ex trabajador minero de Siglo XX, perseguido por la dictadura y que vive hace muchos años en la ciudad de Santa Cruz, nos dijo que el movimiento que muchos de ellos habían generado en este lugar no era de ahora, sino de hace años, cuando habían llegado a la ciudad.

En la constitución de este horizonte de lucha un momento crucial, en el que se mostró una fuerza masiva de movilización, fue el 4 de mayo de este año, fecha en la cual la prefectura cruceña convocó ilegalmente a un referéndum por la aprobación de su Estatuto Autonómico Departamental. Fue la primera vez que se vio salir una enorme cantidad de gente en La Rotonda del Plan 3000.

Mientras en la perturbada lógica de la derecha se trataba sólo de un puñado de partidarios del gobierno, las cientos de personas que salieron a las

calles del Plan para enfrentar las piedras, palos e incluso armas de fuego de la UJC, estaban conscientes de que la lucha que se iniciaba era parte de una “guerra” contra el proyecto político pergeñado por la derecha, y porque las empresas más grandes, los latifundios, se hallan en esta región.

Mucha gente que pelea en el plan no son masistas, pero sí son militantes de un proceso de cambio revolucionario; ellos confían mucho que este proceso lleve adelante hacia una justicia social con mayor equidad y por eso la gente del Plan se siente más identificada y pelea con fuerza.

Lo primero, en el Plan siempre ha habido intentos agresiones de parte de las brigadas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista; ellos han venido, han querido humillar en más de una oportunidad a los vecinos del Plan 3000.

Han habido algunas peleas, por ejemplo cuando hay concentraciones sociales. Hay eventos en el plan 3000 y han venido los fascistas, y los vecinos han salido a resistir en más de una oportunidad. Socialmente fue a partir del 4 de mayo, el 4 de Mayo ya se hace evidente, más que todo, los vecinos, ya preparados para resistir esta arremetida, con la intención de resistir, pero también se ve una juventud más organizada, más estructurada, y se logra hacer resistencia el 4 de mayo

(Entrevista a compañero activista parte de la resistencia en el Plan 3000).

Desde las 5 de la madrugada los vecinos salieron a vigilar las calles, ante las amenazas de invasión que habían hecho los unionistas aquel día. Algunas periodistas independientes que cubrieron el día del referéndum comentaron, con algo de asombro, la mirada que tenían los unionistas cuando proclamaban la muerte a los collas, el odio que podían reflejar claramente en el rostro.

Entonces grupos de amigos, de vecinos que se conocían entre sí, salieron a las calles para pelear. Familias enteras estaban en La Rotonda y en otros



Foto: richardbolivia.blogspot.com

lugares clave para evitar el ingreso de la UJC. Pero no tuvieron una atención médica adecuada para la gente del Plan 3000 herida, como nos decía un compañero: “solidaridad era lo que teníamos”. De esa jornada se recuerda:

Se ponen músicas de protesta, especialmente la música “La Patria” de Juan Enrique Jurado, y posteriormente de eso nos volvemos a reagrupar a partir de las ocho de la mañana. Ya nos da mayor ánimo la resistencia que se había consolidado en Yapacaní, San Julián, y en otros municipios, y empezamos a decir: “hay que empezar a resistir acá, ya en San Julián han tomado, entonces también empecemos nosotros” [...] en ese intento de toma los unionistas lamentablemente eran superior en número, eran superiores en armamento; tenían palos, piedras, petardos de 12 tiros [...] lo que todos los vecinos empiezan a indignarse más, empiezan a reagru-

parse, los jóvenes también, y se consolida después ya una multitud de más de 500 personas. Bueno, en total éramos unas 10 mil personas, pero los que salíamos a los frentes de batalla éramos unos 500, 800, y poco a poco iba creciendo

(Entrevista a compañero activista parte de la resistencia en el Plan 3000).

Los resultados de ese día fueron considerados como una victoria por los vecinos del Plan, puesto que fue, en todo el proceso de realización de referéndums por estatutos autonómicos, el lugar más visible donde se consolidó un polo popular de lucha, además de otras regiones alrededor de la ciudad como San Julián, Montero y Yapacaní:

...pero la victoria más grande es que hemos logrado hacer retroceder este proceso ilegal, y se ha sacado, y lo más importante que el espíritu, el patriotismo se ha fortalecido bastante en el Plan. Todos éramos concientes que estábamos en contra de un movimiento antipatriótico, separatista, la oligarquía en su expresión. Todos estábamos concientes de que la Unión Juvenil Cruceñista era un brazo armado fascistoide que venía amedrentando, humillando y golpeando a la gente humilde, y a eso había que ponerle un alto; ya está de buen tamaño. Eso es lo más importante que ha salido

(Entrevista a compañero activista parte de la resistencia en el Plan 3000).

Desde aquel momento, las discusiones realizadas colectivamente fueron parte de lo que se viviría posteriormente el 2008. El paro cívico del 19 de agosto de este año fue también otra parte de este aprendizaje social de resistencia. Así, la gente tenía una idea más clara de la forma en que podría enfrentar lo que se denomina como “palo cívico”:

Después de esa resistencia hubo la siguiente el 19 de agosto para el Paro Cívico, un día martes. Ese día empezamos con la vigilia desde el lunes por la noche en La Rotonda, durante toda la noche y en la mañana estábamos en apronte. En este día ya estábamos más concientes e incluso teníamos más

experiencia de enfrentamientos, porque a veces para enfrentarse es cuestión de preparación nomás, como una guerra (Entrevista a compañero activista parte de la resistencia en el Plan 3000).

Sobre el despliegue de la lucha: Vísperas del 11 de septiembre

Empezando para el 4 de mayo, hicimos enfrentamientos, resistimos, hicimos respetar que el Plan 3000 es invencible. Por eso decíamos que el Plan 3 000 se considera una pequeña Bolivia, y si bien Plan 3000 no ha sido invadido, es como decir que Bolivia se hizo respetar. Si hubieran invadido el Plan 3000, digamos, nos hubieran hecho callar, nos hubieran hecho callar simbólicamente a toda Bolivia

(Entrevista a Presidente de la Juventud Igualitaria Andrés Ibáñez² del Plan 3000).

Tales fueron las palabras de un compañero en el Plan 3000, y reflejan el momento que atravesó Bolivia en estos últimos meses. Por un lado el “bloque señorial”, que tenía en manos un proyecto de autonomías departamentales, que había organizado durante años grupos de choque, que había explotado el discurso racista y que finalmente había crecido relativamente. Por el otro, el gobierno que tenía la imposibilidad de instaurar la presencia estatal en varios departamentos mediante el uso de la fuerza.

Finalmente, las organizaciones sociales, que generaron respuestas inmediatas a las agresiones sistemáticas de los grupos de poder en lugares como Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija.

² Hace más de ciento veinte años, en 1877, surgió en Santa Cruz un movimiento popular denominado “igualitario” y dirigido por Andrés Ibáñez. Era un movimiento que en cierto momento planteó un “federalismo igualitario”, basado en “autonomías municipales” (SCHELCHKOV, Andrey, Andrés Ibáñez. La revolución de la igualdad en Santa Cruz, Le Monde Diplomatique, Bolivia, 2008). Existe pues toda una reconstrucción popular actual, sobre todo de la parte de dicho movimiento que se proclamó como igualitaria; el significado de la “igualdad” es actualmente discutido, y esgrimido por varios sectores de la población contra las ideas racistas-separatistas proclamadas por la elite intelectual, política y económica cruceña.

Ahí radica la importancia del Plan 3000, en su constitución como bastión de la resistencia a la oligarquía, dentro de la primera lucha que se planteaba a nivel nacional, pensada para enfrentarse al poder de la derecha, y para cercar y avanzar territorialmente al núcleo de la burguesía agroindustrial y terrateniente:

Santa Cruz, ante el despliegue de la política racista y clasista del bloque de derecha, surgió la articulación y el despliegue de lo popular, basado en sus propias fuerzas organizativas, en su capacidad inmensa de indignarse, de re-crear de manera explosiva la potencia social, para ser la iniciativa de movilización que los habitantes del Plan tomaron en sus manos. Septiembre en ese sentido fue crucial para comenzar a reflexionar e hilvanar de manera colectiva lo que sucede en Bolivia en estos últimos tiempos.

Este transcurso del tejer la rebelión en Santa Cruz, con sus límites y potencias, es fundamental para pensar lo que vendría el 11 de septiembre de 2008. La recomposición de las tramas sociales, la primera salida del Plan ante el referéndum del 4 de mayo, la conformación de los primeros grupos de defensa vecinal, nos hablan de los inicios de la constitución en Bolivia de otro eje popular y urbano que se articuló, como veremos adelante, con las organizaciones urbanas y rurales.

En un territorio que por lo general había sido dominado por la política gamonal y de partidos tradicionales, surgió una respuesta que implicaría pensar, en todo el país, en la necesidad de la unión de todas estas experiencias de lucha.

Ante la masacre a campesinos en el departamento de Pando, ante los intentos de toma del Plan 3000 por parte de la UJC, las agresiones generalizadas en por lo menos cuatro departamentos contra sindicatos campesinos, sedes de organizaciones indígenas, la gente respondió pensando en una marcha en Santa Cruz, y en el Plan 3000 se pensó en una resistencia mucho mas coordinada. Era cierto, el Plan no sería acallado, y por tanto Bolivia, la gente de todo el país que peleó desde la guerra del agua el 2000 e inclusive antes, no fuimos silenciados.

Plan 3000:

Resistencia y cambio social en el corazón del racismo

Raúl Zibechi*

En plena ciudad blanca y racista, centro de la oligarquía agroexportadora, el plan 3000 es una inmensa y pobre barriada de casi 300 mil habitantes, en su mayoría aymaras, quechuas y guaraníes; un micro-mundo integrado por las 36 etnias bolivianas. Una ciudad multicultural que resiste—en nombre de la igualdad—la cultura machista, prepotente y violenta de las elites locales.

“A las 12 en la rotonda, donde está el mojón con la bandera boliviana”, dijo Junior. “A la rotonda del Plan”, digo al taxista. Luego de atravesar los ocho anillos de la ciudad, desde el casco viejo presidido por la elegante plaza 24 de Setiembre, la catedral y los edificios públicos de neta factura colonial, nos internamos en una zona casi descampada, de calles de tierra perforadas por máquinas que abren zanjas y remodelan caminos. Un sol de plo-

* Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas (www.ircamericas.org).

mo castiga la rotonda, un círculo de quince metros de diámetro, suelo de tierra espolvoreada por el viento y media docena de palmeras enanas. Alrededor giran micros, autobuses y coches haciendo sonar sus bocinas mientras las vendedoras del mercado vocean sus productos. Gruesas gotas de sudor resbalan por todo el cuerpo haciendo la espera interminable y asfixiante. Junior se acerca con una sonrisa, estira la mano con cortesía y decide caminar por el mercado para buscar una sombra donde conversar. Cruzamos la avenida Che Guevara y nos internamos en el laberinto de puestos saltando sobre enormes charcos.

Sobre un piso de tierra enlodada por aguas hediondas, encima de taburetes de madera y bajo techos de chapa y lona, se aglomeran puestos de verduras y frutas, pollos y carnes rojas, las infinitas variedades de cereales y papas andinas y un sinfín de alimentos manipulados por mujeres de polleras largas y gestos frugales. Se intercalan con puestos de ropa, equipos de audio, DVD, cuadernos y bolígrafos, adornos y jabones, y las músicas nacidas de los más increíbles mestizajes.

Es imposible no recordar la Ceja de El Alto, sobre La Paz, el centro de la ciudad más india y combativa de América Latina. Muchos dicen que el Plan 3000 es El Alto de Santa Cruz, pero desde dentro se aprecian tantas diferencias como similitudes. En todo caso, el Plan 3000 fue un bastión que los paramilitares cruceñistas no pudieron doblegar. En setiembre de 2008, se convirtió en nuevo símbolo de la resistencia popular latinoamericana.

Una Miami sin mar

Una calamidad de la naturaleza está en el origen del barrio más poblado y extenso de Santa Cruz. La riada del año 1983 del río Piráí hizo que tres mil familias fueran trasladadas a una zona semiurbana lejana del centro de la ciudad, que de inmediato recibió el nombre de Plan 3000. Construyeron sus viviendas y sus calles, pero debían comprar el agua una o dos veces por semana a vendedores particulares. “Era un lugar abandonado, sembradíos, estancias de ganado, cañaverales”, dice Junior Pérez, un joven ingeniero agrónomo activista en grupos juveniles del Plan.



Foto: richardbolivia.blogspot.com

Después empezaron a llegar migrantes de todo el país cuando, en 1985, el primer gobierno neoliberal del continente cerró las minas, la principal riqueza del país. Pero también llegaron afectados por las sequías, cambas pobres y collas nacidos en los más remotos rincones del país¹. También fueron arribando al nuevo barrio gauraníes, chiquitanos y ayoreos, entre muchas otras etnias, del interior del departamento de Santa Cruz. “Esta es una zona multicultural”, asegura Junior. “Pasamos de los 10 mil habitantes iniciales a unos 250 mil, sin servicios, sin alcantarillado ni pavimentación, mucha inundación. Ahora sufrimos la epidemia del dengue”.²

Sin embargo, los nuevos pobladores se insertaban en una sociedad “urbana feudal, estratificada, señorial y dominada por una economía de

1 Camba es una palabra de origen guaraní que se utiliza para designar a las personas de tierras bajas (Santa Cruz, Beni y Pando). Collas se le dice a los emigrados de occidente, o sea a los indios. Ambos suelen usarse también como adjetivos con claro tono despectivo (Adrián Waldmann).

2 Entrevista a Junior Jazmani Pérez Vaca

trueque”³. Santa Cruz es diferente. Fundada en 1561 por soldados españoles, tuvo dos características que labraron su identidad: un fuerte aislamiento geográfico y la ausencia de riquezas naturales. Eso la mantuvo como un enclave colonial con un orden social estratificado en el que las diferencias sociales -nacidas del color de la piel y no del tamaño del bolsillo- se concentraron en el nivel simbólico.

“La zona de residencia en relación con la cercanía a la plaza, la vestimenta y el estar eximido de trabajo o de tener que trabajar representaban en una ciudad, en la cual las diferencias económicas eran limitadas, puntos de vista determinantes para marcar la posición de cada uno dentro del orden social”⁴. En suma, una isla colonial y “civilizada” rodeada de “salvajes”, tan lejos del Altiplano, que era el centro económico y político, como de Buenos Aires, capital del Virreinato del Río de la Plata del que dependió desde 1776. En la década de 1870, el movimiento político encabezado por Andrés Ibáñez, inspirado en la Revolución Francesa, funda el partido “Iguaitarios” contra las estructuras estamentales de la ciudad.

Ibáñez proponía la abolición de la servidumbre de los indios y la distribución de las tierras no explotadas por los latifundistas. Aunque tuvo muchos seguidores fue atacado por la oligarquía local y perseguido por las autoridades centrales que lo ejecutaron en 1877. Hasta la Guerra del Chaco (1932-35) entre Bolivia y Paraguay, Santa Cruz permanece aislada del resto del país. Con la revolución de 1952 se reemplaza el orden estamental-feudal por el sistema electoral y se moderniza la región que registra un rápido crecimiento económico.

En 1950 Santa Cruz contaba con 41 mil habitantes; en 1998 supera el millón. Un 40% son collas que provienen del Altiplano y los valles; otro 40% son migrantes del interior del departamento; el resto son cambas, menonitas y japoneses. En 1952 Santa Cruz representaba el 3% del PBI de Bolivia; en 2004 supera ya el 30%, gracias a la exportación de gas a Brasil y Argentina y a

3 Adrián Waldmann, ob. cit. p. 19

4 Idem pp. 20-21

la producción agropecuaria, con destaque de la ganadería y la soya. Aunque los rasgos materiales se han actualizado, las mentalidades evolucionan mucho más lentamente: una sociedad moderna coexiste con una mentalidad feudal.

Un buen ejemplo de esa mentalidad son los concursos de Miss Bolivia, uno de los orgullos de Santa Cruz. Las últimas doce ganadoras provienen de esa ciudad. Gabriela Oviedo, Miss Bolivia 2003, dijo que representa a “la otra Bolivia”, la “no indígena”, ya que en oriente son “blancos, altos y hablan inglés”. Una estudiante de derecho de 23 años, dijo algo muy similar: “Los bolivianos vienen a Santa Cruz porque es una Miami para ellos”⁵.

La conclusión del sociólogo Andrés Waldmann, un alemán que vive hace más de diez años en Santa Cruz y escribió una tesis notable sobre la cultura de las elites, suena lapidaria: “Una sociedad pueblerina, estamental y homogénea, ha sido reemplazada por otra urbana, estructuralmente heterogénea, en la cual los contrastes entre el lujo y la miseria, entre el buen mantenimiento de instalaciones privadas y el ruinoso estado de las públicas, entre organización y caos, entre estructuras de vida premodernas y modernas coexisten de manera desarticulada”⁶.

A grandes rasgos puede afirmarse que en Santa Cruz se ha creado un polo de crecimiento capitalista moderno que se siente diferente y superior al occidente indio boliviano, al que considera un lastre para el país. Pero hay algo más: los cambas de Santa Cruz son hoy minoría en su propia ciudad, algo que puede deducirse del diseño urbano. La ciudad fue delineada a partir de una plaza central, a la que no podían ingresar los indios hasta hace apenas unos años, y un conjunto de anillos concéntricos. Los tres primeros anillos son la ciudad consolidada. El cuarto es una zona de transición; pero ya existen ocho anillos.

Además de ser menos, se sienten rodeados por indios, por collas a los que desprecian...y temen. La elite cruceña se apoderó ilegalmente de tierras destinadas a la reforma agraria de 1953; se estima que serían entre 30 y 50

5 Martín Sivak, ob. cit. pp. 67-68

6 Idem p. 29



Foto: patricianueva.bo

millones de hectáreas. Esa es la base de su riqueza. Desde el golpe de Estado del general Hugo Bánzer en 1971, los golpistas partieron siempre de Santa Cruz, de donde surgieron también todos los ministros de Agricultura, hasta el día de hoy.

La demanda de autonomía tiene dos vertientes: por un lado, es un intento por controlar las riquezas hidrocarburíferas a través del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), motivo de enfrentamiento con el gobierno de Evo Morales. En segundo lugar, la autonomía es un intento por poner distancias con La Paz y el Altiplano, foco de las principales rebeliones desde la de Tupaj Katari en 1781. De alguna forma, es el modo de establecer un “cerco sanitario” que proteja los intereses de las elites locales.

Sobre este escenario contradictorio, se dibuja uno de los principales conflictos del continente: entre una elite rica, racista y excluyente, y una so-

ciudad multicultural que está democratizando las relaciones sociales y culturales, e intenta revertir las desigualdades económicas.

Enfrentar el golpe cívico

Eduardo Loayza, director de Radio Integración, vive en el Plan 3000 desde hace 14 años. La emisora fue una donación del gobierno ante el monopolio mediático de la derecha y es administrada por once organizaciones sociales que gastan sólo mil dólares mensuales en mantenerla en el aire. “Hay cambios, hay más movimiento, más circulación, pero sobre todo la gente ha crecido en lo político. Esto era una bomba de tiempo que había que amortiguar para que no estallara. Pero al final llegó lo que tenía que llegar. La propia oligarquía lo hizo”⁷.

La discriminación hacia los collas fue creciendo de modo geométrico desde que Evo Morales llegó a la presidencia en enero de 2006. “Desde hace tres años hay agresiones contra manifestaciones y dirigentes, agresiones cobardes para intimidarnos, grupos de 20 con bates de beisbol”, dice Junior. Sostiene que los jóvenes y los habitantes del barrio empezaron a defenderse, a partir de 2005, de los ataques de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), grupo civil de carácter paramilitar.

Con el tiempo, 2008 será considerado como un año de rupturas. Remmy González, ingeniero y ex viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, nacido en La Paz pero emigrado a Santa Cruz hace décadas, cree que la ofensiva de la derecha cruceñista fue integral y abarcó todos los planos. “El año pasado decidieron afectar económicamente al gobierno de Evo aumentando la inflación en enero y febrero. La soya es el alimento principal para el ganado, fija los precios de las carnes, del aceite comestible y la leche, y con la especulación todo empezó a subir. Paralelamente reclamaban la autonomía”⁸.

González fue nombrado para bajar la inflación, lo que consiguió apoyándose en los pequeños y medianos productores que proveen la mayor par-

7 Entrevista a Eduardo Loayza

8 Entrevista a Remmy González

te de la canasta alimenticia. “Se creó EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) que ha procesado su aceite, vendido su arroz, tiene ahora una fábrica de harina de trigo y decide sus precios en base a los costos de producción, y así y todo tiene ganancias. Pero no da para comprar toda la producción y sólo incide en el 20% de los alimentos. Pero si el 80% restante se pone de acuerdo, no hay forma de bajar los precios”, dice Remmy. EMAPA tendría que construir sus silos y plantas de procesamiento de aceite, una inversión que el Estado está ahora en condiciones de realizar. Pero no cuenta con personal especializado a nivel de gerencia. “En la empresa Aceite Fino el gerente gana 50 mil bolivianos; yo fui gerente de producción de EMAPA y mi sueldo era de 7.000 bolivianos. Si uno quiere profesionales de buen nivel es muy difícil. Y políticamente, la gente que ha llegado a ese nivel de conocimientos no quiere trabajar con este gobierno”⁹. Remmy sufre aún el acoso de sus vecinos por haber estado en un ministerio.

En el Plan 3000 los verdaderos enfrentamientos comenzaron el 4 de mayo de ese año decisivo. Ese día el Comité Pro Santa Cruz y la prefectura cruceña convocaron un referendo ilegal para la aprobación de un Estatuto Autonómico Departamental¹⁰. El Comité suele convocar “paros cívicos” en los que la Unión Juvenil Cruceñista asume funciones policiales, obliga a los comercios a cerrar, golpea a los que se niegan e impide con violencia que manifestantes populares lleguen hasta la plaza central. Suelen hacer pintadas con el lema “collas de mierda”.

Ese día en el Plan se organizó una vigilia desde las cinco de la madrugada ante las amenazas de invasión que había hecho la UJC. Animados con música de protesta, una multitud estimada en 10 mil personas se concentró en la rotonda para impedir la devastación de los cruceñistas. Hasta ese momento los grupos de choque sólo se habían enfrentado a pequeños grupos o

9 Un dólar se cotiza a siete bolivianos en marzo de 2009

10 Fundado en 1950, el Comité Pro Santa Cruz es una instancia de las elites que opera en forma paralela a las instituciones del Estado. Aunque está integrado por 183 instituciones, incluyendo la central obrera, siempre estuvo controlado por las elites del poder económico y sus dirigentes siempre son varones. Para tener una idea de su poder, el alcalde informa antes al Comité sobre sus decisiones que al Concejo Municipal (Waldmann, p. 118).

personas aisladas a las que invariablemente golpeaban y humillaban. Con la multitud aún no se habían atrevido.

La derecha separatista iba ganando terreno. El 15 de agosto, mientras dos tercios de los bolivianos confirmaban en referendo a Evo Morales en la presidencia, los miembros de la UJC golpearon brutalmente en el suelo al mismo comandante de la policía de Santa Cruz mientras era filmado por la televisión. “En ese momento se supo la verdadera dimensión de la ‘crisis estatal’ en esos departamentos”¹¹. A fines de agosto y principios de septiembre arreciaban los paros regionales en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, exigiendo la devolución del IDH ya que el gobierno había decidido financiar con ese dinero un bono para los jubilados.

Evo no pudo llegar a cinco de los nueve departamentos porque turbas de opositores bloquearon los aeropuertos. Entre el 9 y el 11 de setiembre parecía que la derecha estaba en condiciones de voltear al gobierno desde las calles: se tomaron instituciones, destruyeron oficinas estatales, ocuparon aeropuertos, persiguieron y dispararon contra opositores. En Santa Cruz fueron destruidas las oficinas de Canal 7 y de la radio estatal, oficinas públicas, locales sindicales y de partidos oficialistas, de movimientos campesinos y de ONGs fueron rodeadas, incendiadas y dinamitadas.

Aún puede verse el esqueleto de la Confederación de Pueblos Etnicos de Santa Cruz y los destrozos realizados en la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, aunque están lejos del centro. Durante esos días calientes, miembros de movimientos, funcionarios estatales y de ONGs se refugiaron en el Plan 3000, ya que era el único lugar en el que sentían a salvo.

Pero el 11 de setiembre la derecha fue demasiado lejos al masacrar una marcha campesina en Pando con el resultado de por lo menos 17 muertos, campesinos indefensos asesinados con ráfagas de ametralladoras. Los testimonios aseguran que ese día la gente pobre de Bolivia sintió que era hora de actuar, de frenar lo que Evo denunció como un “golpe cívico” con-

11 Marxa Chávez, ob cit

tra las instituciones. El gobierno expulsó al embajador Philip Goldberg, denunciado por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel como el gran articulador de la oposición, decretó el estado de sitio en Pando y movilizó al ejército. Los presidentes sudamericanos lo respaldaron a través de UNASUR.

En el Plan 3000 había una enorme tensión. El día 10, los separatistas rodearon y tomaron la terminal de autobuses “expulsando a los que hacían resistencia adentro, sin que el grupo de policías que se hallaba allí pudieran hacer nada”¹². Los vecinos tuvieron claro que si ellos mismos no se defendían, nadie lo haría por ellos. El mismo día

varios camiones llenos de “unionistas” llegaron por las varias entradas del Plan, golpeando sus escudos con palos para amedrentar a la gente.

Junior estaba en la rotonda y recuerda cómo fue el día 10. Comenzó muy temprano con la vigilia, pero el enfrentamiento más fuerte fue al mediodía: “Llegaron con escudos antimotines y cohetes de doce tiros de alto poder que pueden romper ladrillos y latas, y tienen un alcance de 50 metros y así nos empiezan a atacar. Nos hacen retroceder como dos cuadras. En esa acción caen algunos compañeros mayores que los golpean. Ahí hay una reacción. Gritamos, salimos todos y avanzamos. Logramos entablar un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y liberamos nuestros prisioneros, y les tomamos prisioneros. Recuperamos nuestro territorio y los hacemos retirar como tres



Foto: alminuto.com.bo

12 Idem

cuadras. Ahí tiene que interceder la policía que los resguarda y hace un pequeño cerco para protegerlos”.

“La radio transmitió todos los combates”, dice Eduardo Loayza. “Ya habían quemado Patria Nueva y Canal 7, y querían quemarnos la radio, nos quedaba sólo organizarnos y llamar a la gente a defender esto. La gente respondió. Nos llamaban de todas partes, nos decían qué sucedía: ‘que pasa un coche oscuro con unionistas, que están llevando cohetes, tal camión traslada handies’. Nos multiplicábamos porque la radio eran los ojos del pueblo, las manos, todo. Miles de personas, las mujeres, los jóvenes, niños con sus escuditos de lata de la calle, para pelear...cosas muy bonitas que van a quedar en la historia”.

Lugo se supo que el objetivo era tomar la rotonda para preparar la llegada de Branko Marinkovic, presidente del Comité Pro Santa Cruz, que ya tenía preparado su discurso. “Aquí no hay nada, aquí todos somos nosotros”, cuenta la leyenda que iba a decir. Pero el Plan resistió y ahora es un símbolo; y un bastión de la Bolivia multicultural.

Fragmentos del mundo nuevo

La crisis de setiembre se resolvió a favor del gobierno y de los sectores populares. Durante los días más calientes, la Bolivia de abajo se movilizó con un impresionante cerco a Santa Cruz. “Por el norte, se dirigían desde el Chapare cochabambino. Por el este marchaban desde San Julián, Cuatro Cañadas y otros municipios. Por el suroeste desde las provincias de los valles mesotérmicos. Desde el sureste, merece subrayarse la participación de indígenas guraraniés”¹³. Con machetes en la mano, discutieron entrar en la plaza central de Santa Cruz “para darles una lección”.

Se calcula que en el cerco participaron unos 30 mil indígenas, campesinos, colonizadores, sin tierra, pequeños comerciantes, obreros de la ciudad y

13 Marcelo Iván Paredes, ob. cit.

el campo, estudiantes. Una parte venían del interior del propio departamento de Santa Cruz, guarayos, chiquitanos, guaraníes, además de los 20 mil que se movilizaron en el Plan 3000. El cerco a Santa Cruz reproduce, de alguna manera, el mítico cerco de Tupaj Katari a la colonial La Paz hace dos siglos. Con ese temor deberán convivir en adelante las elites separatistas.

El movimiento social del Plan se asienta en una enorme red informal de relaciones sociales densas, sumergidas en la vida cotidiana. El movimiento más fuerte es el de los “gremiales”, las trabajadoras del mercado que cuentan con unas tres mil personas organizadas. Las juntas vecinales están presentes en la mayor parte de los 107 barrios, intentan resolver los problemas de alumbrado, alcantarillado, el mantenimiento de las calles y ahora encaran la creación de la Quinta Sección Municipal, que le daría al Plan 3000 su autonomía legal. La propuesta es denominarla Ciudad Igualitaria Andrés Ibáñez.

“La mayoría trabajan para el día, trabajo informal, comercio, empleadas domésticas, lavanderas, construcción, albañiles, plomeros.... Si no sacan dinero un día, el siguiente no tienen para comer. Hay muchos cuartos de alquiler donde vive toda la familia pagando 250 bolivianos. El promedio es de cinco hijos por familia. Las calles las mantiene la gente. Abordan el tema de salud, agua, basura, y sobre todo la inseguridad ciudadana”, asegura Junior.

Para comprender cómo los habitantes de un barrio pobre resisten y derrotan a una poderosa oligarquía, parece necesario dejar de lado las grandes acciones para enfocarse en los modos como transcurre la vida cotidiana. De la mano de Beti Zaire, maestra de 30 años nacida en La Paz que emigró al Plan 3000 cuando tenía diez, es posible conocer algo más de esa vida cotidiana¹⁴. Beti vive en Toro Toro, uno de los primeros barrios del Plan a pocas cuadras de la rotonda. Su barrio cuenta con unas mil familias pero su vida gira en torno a la cuadra donde está el comercio de su madre, Felicidad; o sea, su vida se relaciona densamente con la de otras cincuenta familias.

14 Entrevista-conversación con Beti Zaire.

Felicidad tiene una tienda de abarrotes donde vende sobre todo alimentos a sus vecinos. Tiene una libreta donde anota las compras de los que no le pueden pagar al contado. Esas familias le pagan cuando cobran el salario de la semana o la quincena. Cuando alguien no paga, la visita en su casa particular todas las veces que sea necesario, hasta que la convence de saldar la deuda. En todo caso, la existencia de una deuda no implica que la relación se deteriore o se rompa.

Antes de tener su propia tienda Felicidad vendía golosinas en la puerta de colegios, fiestas y discotecas, dentro o fuera del Plan 3000. Tanto su papá, un albañil incapacitado para trabajar, como su mamá, hablan aymara aunque Beti ya no domina la lengua materna. Las demás familias de la cuadra provienen de los más diversos rincones del país: La Paz, Sucre y Cochabamba, aunque también hay cambas y familias del interior de Santa Cruz. Felicidad es una referente del barrio aunque no ocupa cargo en ninguna institución.

Las relaciones con las familias vecinas son muy estrechas. Cuando hay algún enfermo, algo muy común en barrios sin saneamiento ni agua potable, los demás vecinos de la cuadra le llevan comida, remedios y algo de dinero para afrontar los gastos más urgentes. Pero sobre todo “consejos y compañía, que es lo principal, porque somos muy unidos”, dice Beti. Entre los valores parece tener tanta o más importancia la compañía, el diálogo o el simple “estar”, que el apoyo estrictamente material. Las vecinas suelen apelar tanto a las pastillas como a las hierbas medicinales como forma de curar enfermedades, pero las hierbas no se “consumen” como medicamentos ya que a su alrededor existe una cosmovisión que se trasmite de forma oral, en largos e íntimos diálogos sobre las ventajas de tal o cuál hierba.

En el barrio donde vive Beti funciona una junta vecinal que se reúne en la plaza sólo cuando hay que tomar decisiones importantes. La última asamblea en la que participó fue para debatir sobre los medidores del consumo de agua. El agua no la instaló la empresa estatal sino ellos mismos a través de su cooperativa, Coplan, pero con los medidores deben pagar mucho más que



Foto: Indymedia

antes. Por eso exigen que si les van a instalar medidores les cambien las viejas cañerías por otras nuevas.

El presidente de la junta es un señor mayor, jubilado, que tiene tiempo suficiente para hacer trámites municipales para sus vecinos. El cargo es honorario, como en todas las juntas vecinales, y los vecinos lo renuevan porque le tienen confianza, un valor muy apreciado en este barrio. Beti insiste en que los dos principales problemas son la salud y el alcantarillado, dos temas que van de la mano y consumen buena parte de las energías y los escasos ahorros de las familias.

El relato de Beti muestra la enorme riqueza de las relaciones sociales en un barrio del Plan 3000. Por un lado, enseña la escasa mercantilización de la vida cotidiana. La confianza personal o familiar tienen más valor que el dinero, como aparece en el caso de la libreta de las compras. El tiempo no se mide como una mercancía sino por la intensidad del vínculo, lo que permite

dedicar mucho tiempo a los vecinos aún descuidando el comercio o la propia familia. No se vive como una pérdida sino como un “don”, parte de una relación de reciprocidad.

Por último, en un breve e incompleto examen, habría que destacar las diferencias de los liderazgos según géneros. Mientras Felicidad, la mamá de Beti, es una referente natural de su cuadra, sin ostentar ningún cargo, el presidente de la junta vecinal tiene un cargo formal aunque esté igualmente cimentado en la confianza personal. Podría decirse que mientras el cargo formal de la junta es “hacia afuera”, el de Felicidad es “hacia adentro” de la propia comunidad. Una división no jerárquica que suele ser muy común en las formas de ejercer el poder en las comunidades indias y de los sectores populares.

Son estas las relaciones que se pusieron en movimiento cuando la ultraderecha cruceñista atacó el Plan 3000. Son las relaciones densas de la cotidianeidad las que permiten a los débiles derrotar a los poderosos; las mismas que hacen posible la vida en medio de tanta pobreza. Y algo más: esas mismas relaciones son las que pueden permitir, expandidas, crear un mundo nuevo, o sea el “otro mundo” posible que proponen los altermundialistas.

La política desde abajo

Durante los combates, cuenta Junior, esa multitud de decenas de miles tenía formas muy precisas. Los más jóvenes, varones pero también mujeres, iban delante al enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los cruceñistas. En una segunda fila estaban las mujeres del mercado y los padres de familia con sus hijos pequeños. Los comerciantes apoyaban con agua y coca, y las mujeres del mercado cocinaban los desayunos para todos.

“Los grupos son como células improvisadas en cada barrio y no tienen nombre, se toman decisiones en asambleas en la rotonda, como en cabildos para la defensa. Sin jerarquías, sin comandantes. Eso es bueno porque cuando hay liderazgos se siguen otros intereses. La UJC es un grupo bas-

tante organizado, tienen asesoramiento de militares retirados, manejan armamento bélico, usan escudos antimotines y tienen instrucción de orden cerrado y artes marciales. Como es una oligarquía empresarial es eficiente. Nosotros lo hacemos alrededor de un sentimiento y de la dignidad”, dice Junior con inocultable satisfacción.



Foto: lostiempos.com

Siente que ahora que predomina la distensión, es la hora de sacar lecciones de la experiencia vivida. “Se llegó a reflexionar que la dirección política del MAS no influyó en esta resistencia, no hubo una estructura de dirección sino que fue la propia gente. Tampoco hubo apoyo de logística del gobierno ni del MAS sino del mismo combatiente que traía sus cosas, agua, comida y palos, y el mismo pueblo que por solidaridad apoyaba con agua, cohetes y eso. La gente desbordó al propio MAS, lo rebasó y hubo muchos cuestionamientos de que solo se dedican a la política grande pero no a estar con su pueblo porque es la acción de masas la que va a determinar el cambio político”.

Con matices apenas, Loayza enfatiza en la trascendencia de los combates de 2008. “Si el Plan no se hubiera levantado en septiembre otra sería la historia de Bolivia. Querían entrar a la rotonda y barrer con todo. Pero la gente no permitió. Hubo muchos caídos, heridos, mucho sacrificio de los hambrientos, de los que no tienen nada que perder. Todos se dan cuenta quién es el enemigo. Eso ha permitido madurar para evitar un golpe cívico”.

Junior está convencido que si no los hubieran frenado, los cruceñistas hubieran impuesto una especie de dictadura, “hubieran hecho su genocidio

como pasó en Yugoslavia, en Kosovo. Pero aquí el pueblo se hizo respetar y eso ha superado a los propios políticos”.

Es muy probable que Bolivia esté viviendo una verdadera apertura democrática, pero sobre todo abajo, en las plazas, en los mercados, en las calles, en los espacios públicos. Remmy recuerda que hace apenas diez años, en 1997, visitó México y volvió sorprendido: “Cuando fui a un banco y vi un indígena atendiendo me pareció raro, y también había indios en los ministerios. Acá nunca había pasado algo así y cuando conté que allá los gerentes del banco eran indígenas me miraban raro, pero ahora aquí ya puede verse”.

El ex viceministro recuerda que mientras fue estudiante universitario nunca pudo asistir al comedor universitario porque había nacido en La Paz y estaba reservado sólo para cambas. Recuerda también que el padre del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) debió cambiar su apellido de Choquehuanca al de Cárdenas para poder ingresar a la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, donde se graduó de topógrafo.

Ahora los indios llevan con orgullo sus ropas, sus nombres y sus apellidos, y se relacionan de igual a igual con los demás. Y han creado espacios donde las diferencias se expresan todos los días sin establecer jerarquías. En el Plan, dice Loayza, “las identidades particulares se están mezclando porque de chicos se crían juntos todos los diferentes y conviven y apostamos a eso, a un nuevo boliviano sin taras mentales, que acepte todas las diferencias”.

“Mi abuelo fue a la Guerra del Chaco, mi padre fue dirigente sindical textil y fue torturado por la dictadura de Bánzer”, dice un Junior optimista pero prudente. La historia familiar lo empuja hacia delante, pero cuando hablamos del problema del poder, duda: “Ahí está nuestra debilidad. Puede volver a pasarnos lo mismo que en la independencia aunque ahora hay una multitud actuando... El problema es que los compañeros se drogan con el poder, ese es el problema cuando no hay norte político. Esto no es por tener poder, ya somos líderes pero no queremos ser dirigentes, acá hay un punto de inflexión para las nuevas generaciones...”

Bibliografía

WALDMANN Adrián, *El hábitus cambia*, El País, Santa Cruz, 2008.

PAREDES Mallea Mario Iván, “La marcha sobre Santa Cruz,” 29 de setiembre de 2008 en www.ubnoticias.org.

SIVAK Martín, *Santa Cruz: una tesis*, Plural, La Paz, 2007.

CHÁVEZ Marxa, “El bastión rebelde del oriente boliviano”, 10 y 17 de diciembre de 2008, en www.ubnoticias.org.

ZIBECHI Raúl, Entrevista a Beti Zaire, Santa Cruz, 27 de marzo de 2009.

ZIBECHI Raúl, Entrevista a Junior Pérez, Santa Cruz, Plan 3000, 25 de marzo de 2009.

ZIBECHI Raúl, Entrevista a Remmy González, Santa Cruz, Plan 3000, 25 de marzo de 2009.

ZIBECHI Raúl, Entrevista a Eduardo Loayza, Santa Cruz, Plan 3000, 25 de marzo de 2009.



VillaLibre Cuadernos de Estudios Sociales Urbanos pretende ser un aporte a la reflexión sobre la problemática urbana en nuestro país, dada la importancia creciente de las áreas urbanas en el mismo. VillaLibre es un espacio para el intercambio de estudios y reflexiones sobre el tema urbano desde las diversas disciplinas de las ciencias sociales así como para el intercambio de experiencias de y con las organizaciones urbano populares, tanto de nuestro medio como de otros países.

- **Organizaciones urbanas ¿Un nuevo sujeto político?**
Escarley Torrico
- **Irreflexiones interrogativas:
El barrio popular. Del axioma al sofisma**
Fabio H. Avendaño T.
- **Política Comunitaria y Rebelión en El Alto**
Lucía Linsalata
- **Las Juntas Vecinales de El Alto entre la institucionalidad
y la rebelión**
Melina Deledicque y Daniel Contartese
- **El ayllu reterritorializado y su taypi, la ciudad de El Alto**
Orlando Augusto Yépez Mariaca
- **Plan 3000: Bastión rebelde del oriente boliviano**
Marxa Chávez
- **Plan 3000: Resistencia y cambio social en el corazón
del racismo**
Raúl Zibechi

Proyecto "Impulso a procesos de cambio social en Bolivia:
Fortalecimiento del protagonismo social y político de organizaciones de inmigrantes
indígenas del área suburbana de Cochabamba"



Esta publicación es posible gracias al apoyo de:

